

Universidad Andina Simón Bolívar

Sede Ecuador

Área de Estudios Sociales y Globales

Maestría en Relaciones Internacionales

Mención en Negociaciones Internacionales y Manejo de Conflictos

Fuerzas Armadas y procesos políticos en los países periféricos

“Sublevación militar del 21 de enero del 2000 en el Ecuador”

Juan Carlos Sandoval Pérez

Tutor: Marco Romero Cevallos

Quito, 2020

Trabajo almacenado en el Repositorio Institucional UASB-DIGITAL con licencia Creative Commons 4.0 Internacional		
	Reconocimiento de créditos de la obra	
	No comercial	
	Sin obras derivadas	
Para usar esta obra, deben respetarse los términos de esta licencia		

Cláusula de cesión de derecho de publicación

Yo, Juan Carlos Sandoval Pérez, autor de la tesis intitulada “Fuerzas Armadas y procesos políticos en los países periféricos: sublevación militar del 21 de enero del 2000”, mediante el presente documento dejo constancia de que la obra es de mi exclusiva autoría y producción, que la he elaborado para cumplir con uno de los requisitos previos para la obtención del título de Magíster en Relaciones Internacionales en la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador.

1. Cedo a la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, los derechos exclusivos de reproducción, comunicación pública, distribución y divulgación, durante 36 meses a partir de mi graduación, pudiendo por lo tanto la Universidad, utilizar y usar esta obra por cualquier medio conocido o por conocer, siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio económico. Esta autorización incluye la reproducción total o parcial en los formatos virtual, electrónico, digital, óptico, como usos en red local y en internet.
2. Declaro que en caso de presentarse cualquier reclamación de parte de terceros respecto de los derechos de autor/a de la obra antes referida, yo asumiré toda responsabilidad frente a terceros y a la Universidad.
3. En esta fecha entrego a la Secretaría General, el ejemplar respectivo y sus anexos en formato impreso y digital o electrónico.

Quito, 6 de enero de 2020

Firma: _____

Resumen

Históricamente los actores militares de los países latinoamericanos han intervenido de diversas maneras en los procesos políticos de sus Estados. Este trabajo de investigación analiza, cómo funcionó esta tendencia a finales del siglo XX en el Ecuador; para lo cual, se estudió “la revuelta militar del 21 de enero del 2000”, examinando detalladamente sus motivaciones, el desarrollo de los hechos y las consecuencias generadas.

Las motivaciones que impulsaron a los oficiales subalternos de las Fuerzas Armadas ecuatorianas a ejecutar la toma del Congreso Nacional, el 21 de enero del 2000, se las examinará como consecuencia de los procesos de cambio en la doctrina militar, aplicados a partir de 1990, en los institutos de formación de las Fuerzas Armadas, y, de la situación socio-político-económica del Ecuador, enmarcada en los hechos históricos desarrollados desde el 4 de junio de 1990 hasta el 20 de enero del 2000.

El desarrollo de los hechos vividos antes, durante y después de la revuelta indígena-militar del 21 de enero de 2020; serán contados por sus protagonistas, con un matiz de realismo y veracidad, detallando: sus primeras acciones, la sublevación de los oficiales de los oficiales subalternos del ejército y el desenlace de la insurrección.

Las consecuencias, que este hecho generó para el Estado ecuatoriano, el movimiento indígena, las Fuerzas Armadas y para los oficiales subalternos que fueron parte de la revuelta militar, se las detallará luego de ejecutar un resumen de todos los procesos y su desenlace.

Este trabajo cumplió con el objetivo planteado para la investigación, al hacer una nueva lectura de los sucesos del 21 de enero del 2000, dar la voz a los protagonistas y examinar el papel que desempeñó cada uno de ellos. Concluyendo que los hechos del 21 de enero del 2000, fueron el resultado de una muy bien planificada estrategia de manipulación y engaño, ejecutada por las élites políticas y secundadas por el Alto Mando militar, aprovechándose de la ingenuidad de los jóvenes oficiales de rangos medios y de la convocatoria indígena, para así mantener la hegemonía del control político al aplicar la sucesión presidencial.

A mis hijos: Juan Martín y Zoe Paulette,
mi inspiración, la razón de mi vida y mi todo.

A mi madre y hermanos,
por acompañarme en todo momento y darme su apoyo incondicional.

A la memoria de mi adorado padre Francisco Sandoval Maldonado,
quien con sus enseñanzas y ejemplo de líder sindical en la década de los 70, forjó en mi
alma y en mi pensamiento, la obligación moral de luchar contra la desigualdad social y la
mala utilización del poder, razón por la cual decidí aquel 21 de enero del 2000, ser parte
de esa simbiosis "sociedad civil - movimiento indígena - militares jóvenes e idealistas".

A ella...

Agradecimientos

Dejo constancia de mi agradecimiento, a la Universidad Andina Simón Bolívar – Sede Ecuador, a todos quienes conforman el Área de Estudios Sociales y Globales, en especial a los Doctores Marco Aurelio Romero y Cesar Montufar, por su acertada orientación y guía, por su permanente apoyo y estímulo para culminar con éxito el presente trabajo.

He decidido escribir la verdadera historia del 21 de enero del 2000, sus antecedentes y consecuencias, en honor y agradecimiento a los oficiales subalternos del Ejército ecuatoriano y Policía Nacional, protagonistas de esta acción, que cambió la historia de nuestro país; oficiales que, aquel día tuvieron un accionar sincero, espontáneo y con un gran amor a la patria, a quienes el poder estatal y un Alto Mando militar oportunista, los calificaron de golpistas y sediciosos.

Y no debo olvidar a aquellas ecuatorianas y ecuatorianos, que producto de la crisis financiera de finales de los años noventa, cayeron en la pobreza y desempleo, viviendo una reducción significativa de su nivel de vida y de sus oportunidades, eligiendo la emigración internacional, como una solución para alcanzar un futuro digno para sus familias. Como no dedicarles este trabajo, a aquellas madres parte de los más de 560000 ecuatorianos que tuvieron que emigrar, entre los años 1999 y 2000, con sus hijos pequeños, para trabajar en situaciones precarias día y noche, y, así darles un futuro decoroso, que en su patria no lo iban a tener a consecuencia de una profunda crisis económica y bancaria, marcada por el escándalo que paralizó el sistema financiero del país, obligando al 4% de la población a salir de su tierra natal.

Tabla de contenidos

Abreviaturas.....	15
Introducción.....	17
Capítulo primero: Ecuador en década de los 90: procesos sociales - militares - políticos - económicos	43
1. Primer período, enero 1990 – julio 1992: primeras movilizaciones indígenas ..	46
1.1. Movilizaciones de 1990 y el primer levantamiento indígena nacional “Levantamiento del Inti Raimy”.....	47
1.2. Marcha indígena por los territorios denominada “la caminata”, abril de 1992	50
2. Segundo período, agosto 1992 – julio 1996: inestabilidad política y Guerra del Cenepa	51
2.1. Movilizaciones por los 500 años de resistencia, en octubre de 1992	52
2.2. Levantamiento indígena contra la aprobación de la Ley Agraria denominada “Movilización por la vida”, en junio de 1994.....	54
2.3. Guerra del Cenepa, en enero y febrero de 1995	55
3. Tercer período, agosto 1996 – julio 1998: Primer derrocamiento presidencial, gobierno interino y Asamblea Constituyente del Pueblo	57
3.1. Movilizaciones y caída del gobierno de Abdala Bucaram, en febrero de 1997	57
3.2. Gobierno interino de Fabián Alarcón	59
3.3. Asamblea Constituyente del Pueblo, en octubre de 1997; y, Asamblea Nacional Constituyente, en diciembre de 1997	60
3.3.1. Asamblea Constituyente del Pueblo	61
3.3.2. Asamblea Nacional Constituyente	61
4. Cuarto período, agosto 1998 – enero 2000: crisis y derrocamiento de Jamil Mahuad	62
4.1. Primeros meses de gobierno - negociación territorial con el Perú	63
4.2. Salvataje bancario y creación de la Agencia de Garantía de Depósitos	64
4.3. Feriado Bancario y congelamiento de los depósitos de los cuenta-ahorristas	65

4.4. Movilización nacional y levantamiento indígena, contra el gobierno de Jamil Mahuad, marzo de 1999	66
4.5. Período inter-crisis, marzo 1999 – julio 1999	68
4.6. Movilización nacional y levantamiento indígena, contra el gobierno de Jamil Mahuad, julio de 1999	69
4.7. Dolarización de la economía ecuatoriana	72
4.8. Levantamiento y movilización indígena, 15 de enero del 2000	73
Capítulo segundo: Procesos de cambio en la educación y entrenamiento militar, ejecutados en la década de los noventa, en respuesta a los procesos sociales - militares - políticos – económicos, vividos desde 1990 en el Ecuador	79
1. La influencia de los aspectos sociales, militares, políticos, económicos y tecnológicos, en la nueva educación militar; basada en la profesionalización de sus miembros y orientada a la ejecución de “planes y programas de apoyo al desarrollo” en función de las relaciones civiles-militares	80
2. El nacionalismo y su influencia en los procesos de formación académica de los miembros de las Fuerzas Armadas	88
3. El militarismo en América Latina y su influencia en los procesos de formación académica de los miembros de las Fuerzas Armadas	90
3.1. El militarismo en durante los años noventa del siglo XX en el Ecuador	93
3.2. El nuevo-militarismo a finales los años noventa del siglo XX e inicios del siglo XXI, en el Ecuador	99
4. Enfoque de la nación y su seguridad en los procesos de formación académica de los miembros de las Fuerzas Armadas.....	101
4.1. Conceptos de seguridad y nación, y, su influencia en los procesos de formación académica de los miembros de las Fuerzas Armadas	102
4.1.1. Enfoque conceptual del término “seguridad” en el contexto de la nación	102
4.1.2. Enfoques conceptuales del término “nación”	103
4.2. La seguridad y el desarrollo nacional, y, su influencia en los procesos de formación académica de los miembros de las Fuerzas Armadas	104
4.3. La seguridad y la política nacional, y, su influencia en los procesos de formación académica de los miembros de las Fuerzas Armadas	105
Capítulo tercero: La revuelta militar del 21 de enero del 2000, motivaciones y protagonistas, primeras acciones, desarrollo de los acontecimientos y desenlace	107

1. Motivaciones y protagonistas, de la sublevación militar del 21 de enero del 2000	109
2. Primeras acciones	111
3. Sublevación militar de los oficiales subalternos de las Fuerzas Armadas del Ecuador, 21 de enero del 2000	124
3.1. Desarrollo de los hechos	124
4. Desenlace de la sublevación	139
Conclusiones.....	143
Obras citadas.....	155

Abreviaturas

AGD:	Agencia de Garantía de Depósitos
CONAIE:	La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
CONFENIAE:	Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana
ECUARUNARI:	Ecuador Runakunapak Rikcharimuy - Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador
ESPE:	Escuela Politécnica del Ejército
FENOC:	Federación Nacional de Organizaciones campesinas
FUT:	Frente Unitario de Trabajadores
IERAC:	Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización
INDA:	Instituto Nacional de Desarrollo Agrario
OPIP:	Organización de los Pueblos Indígenas del Pastaza
PRE:	Partido Roldosista Ecuatoriano

Introducción

Esta no es una narrativa como otras que han escrito personajes ajenos a la revuelta militar del 21 de enero del 2000, sin saber lo que realmente ocurrió aquel día, cuáles fueron los antecedentes y las razones que incentivaron a un grupo de oficiales subalternos de las Fuerzas Armadas, a unirse al pueblo ecuatoriano, para tomarse el símbolo de la democracia del Ecuador, el edificio del Congreso Nacional, manifestando de esta manera el descontento y rechazo al Gobierno Nacional.

Históricamente los actores militares de los países latinoamericanos han intervenido de diversas maneras en los procesos políticos de sus Estados. Este trabajo de investigación, propone analizar, cómo funcionó esta tendencia a finales del siglo XX; para lo cual, se estudiará las razones que incentivaron a los oficiales alumnos de la Escuela Politécnica del Ejército (ESPE)¹, a tomarse el edificio del Congreso Nacional del Ecuador en conjunto con el movimiento indígena, en una clara posición de sublevación y desconocimiento del poder constituido, durante “la revuelta militar del 21 de enero del 2000”.

La ejecución de esta acción de desconocimiento del orden constitucional, por parte de los militares de rangos medios alumnos de la ESPE, con el apoyo indígena, no es casual y menos coyuntural. Responde a un largo proceso de cambios registrados en los métodos académicos-doctrinarios, aplicados desde inicios de la década de los noventa en las Fuerzas Armadas ecuatorianas, como respuesta a un proceso social que comenzó en 1990 en el Ecuador, y, basados en las teorías y políticas que analizan las relaciones cívico-

¹ El 16 de junio de 1922, el señor Presidente de la República, Dr. José Luis Tamayo, mediante Decreto, publicado en el Registro Oficial No. 521, de 20 de junio del mismo año, creó la Escuela de Oficiales Ingenieros.

La necesidad de tecnificar a los mandos en la especialidad de Ingeniería y Artillería, determinó para que el Presidente Federico Páez, el 22 de octubre de 1936, mediante Decreto No. 1058, dispusiera su continuidad con el nombre de Escuela de Artillería e Ingenieros.

Una innovación en la organización y programas de estudios de la especialidad de ingeniería, contribuyó para que se denominara Escuela de Ingenieros, a partir de 1948.

El 28 de octubre de 1970, mediante Decreto No. 691, publicado en el Registro Oficial No. 93 de 5 de noviembre del mismo año, el señor Dr. José María Velasco Ibarra, Presidente de la República, permitió el ingreso de estudiantes civiles, al aprobar el Reglamento de Régimen Interno para la Escuela Técnica de Ingenieros.

En Quito el 8 de diciembre de 1977 por decreto supremo se Confiérase a la “Escuela Técnica de Ingenieros” del Ejército el carácter y condición de Escuela Politécnica, la que desde la presente fecha tomará el nombre de “Escuela Politécnica del Ejército”, con domicilio principal en la ciudad de Quito, personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrita a la Comandancia General del Ejército (Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 2020).

militares, planteadas desde al menos la década del 50 hasta finales del siglo pasado por autores como: (Huntington, Samuel P), (Janowitz, Morris), (Stepan, Alfred), (Finer, Samuel Edward); entre otros.

Los procesos de cambios en la educación militar se aplicaron en las Fuerzas Armadas en un periodo histórico marcado por un constante y acelerado deterioro de los mecanismos estatales de procesamiento de las demandas sociales, y, en medio de una situación socio-político-económica caótica, vivida por el Ecuador especialmente a finales de la década de los noventa; procesos que, consideramos son las principales motivaciones, que impulsaron a los oficiales subalternos de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, alumnos de la ESPE, a ejecutar la toma del Congreso Nacional del Ecuador, en conjunto con los movimientos sociales e indígenas, en enero del 2000, en claro rechazo a las decisiones gubernamentales.

La influencia “académica-doctrinaria” predominante en las Fuerzas Armadas ecuatorianas a la cual hacemos referencia, y, que se aplicó desde inicios de los años noventa, se centraba en re-conceptualizar criterios como: hombre (soldado profesional), institución educativa (escuelas de formación militar), sociedad (relaciones cívico-militares), currículo y el perfil profesional que regirá especialmente para los nuevos oficiales subtenientes, y, su desempeño en los preparatos militares. Todo esto, implicaba tomar elementos de la sociedad ecuatoriana, con la finalidad de formar soldados profesionales en respuesta a las nuevas necesidades del país y a los nuevos fenómenos sociales, especialmente a la nueva política de identidad y democracia directa, planteada por los pueblos indígenas y por los grupos sociales.

El cambio de educación y doctrina en las Fuerzas Armadas, aplicadas con mayor énfasis en la fuerza terrestre (Ejército), se debió también a que el movimiento indígena comenzaba nuevamente después de medio siglo (1944 - 1990) a retomar sus luchas sociales, con levantamientos y grandes movilizaciones sociales; acciones que demostraban que los indígenas pueden desequilibrar al Estado, poniendo así en riesgo la seguridad y estabilidad interna del país.

No solo las Fuerzas Armadas del Ecuador re-direccionan su doctrina en la década de los noventa, sino también los intelectuales políticos ecuatorianos; proponiendo una distinción entre los viejos movimientos sociales representados por sindicatos, obreros e indígenas y los nuevos movimientos constituidos en cambio por: las coaliciones indígenas, grupos feministas, organizaciones de vecinos; entre otros.

En este contexto, aparece en la literatura política un nuevo concepto “democratización de la democracia”, tomando como centro de análisis y ejemplo de esta nueva forma de hacer política al movimiento indígena del Ecuador y su forma de democracia directa a nivel local, que generaba demandas también acogidas por otros grupos sociales y humanos pobres de la sociedad ecuatoriana.

Las Fuerzas Armadas, en respuesta a los nuevos escenarios generados por la nueva política de identidad de los pueblos indígenas, replantean su educación, entrenamiento y doctrina militar, e, inician a la par un proceso de acercamiento con la población indígena, a partir de un trabajo social de sus oficiales y tropa; de esta manera, logran vincularse más con la sociedad civil. Es decir, orientan su formación militar a una nueva doctrina, que prioriza el trabajo social con la comunidad, bajo el eslogan: “El ejército y su pueblo”. Así nace en las Fuerzas Armadas lo que hoy se denomina como “La Generación de la Victoria”.

El proceso social, por el cual las Fuerzas Armadas hacen un giro doctrinario, y, que se aplicaría en las escuelas e institutos de formación militar, inicia en 1990, cuando el movimiento indígena plantea su nueva política de identidad y democracia directa. Los principales institutos de formación militar en los cuales se aplicó ésta nueva doctrina, en función al proceso histórico-social que vivía el Ecuador, son: la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, Escuela de Perfeccionamiento de la Fuerza Terrestre, Academia de Guerra del Ejército y Escuela Politécnica del Ejército.

Institutos de formación superior militar que fueron parte del proceso de profesionalización de los oficiales del Ejército ecuatoriano, mediante la creación de la Facultad de Ciencias Militares, el 17 de agosto de 1994; mismos que deben impartir diez niveles de educación superior universitaria, distribuidos de la siguiente manera:

1. Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro”, cinco niveles universitarios
2. Escuela de Perfeccionamiento de la Fuerza Terrestre, dos niveles universitarios
3. Academia de Guerra del Ejército, dos niveles universitarios
4. Escuela Politécnica del Ejército, un nivel universitario

Para de esta manera los oficiales del ejército accedan a los respectivos títulos de segundo y tercer nivel académicos. Títulos que, les acreditarían como profesionales altamente calificados, capaces de intervenir en procesos de investigación científico-tecnológica, y, prestar servicio en las distintas áreas que demande el desarrollo socio-económico del Ecuador, conforme eran las prioridades planteadas por las Fuerzas

Armadas del Ecuador, desde inicios de la década de los noventa del siglo XX (Cueva, Campana y Abarca 2000).

En resumen, la acción ejecutada por los oficiales de rangos medios, alumnos becados en la Escuela Politécnica del Ejército, durante la revuelta militar del 21 de enero del 2000, se la estudiará como una consecuencia de los procesos de cambio en la formación profesional, académica y humanista, como también, de las vivencias durante la ejecución de programas de apoyo al desarrollo, aplicados con mayor interés por las Fuerzas Armadas en la década de los noventa del siglo XX, en un contexto histórico de inestabilidad socio-político y económica, en el cual las organizaciones indígenas ecuatorianas estaban en proceso de convertirse en actores políticos relevantes, como resultado de un proceso interno de fortalecimiento del movimiento indio, producto de la lucha agraria y la revalorización cultural (Porrás Velasco 2005).

El 21 de enero del 2000, fue el día en que las fuerzas sociales, la sociedad civil y los militares ecuatorianos de rangos medios, alumnos becados en la ESPE, se unieron para luchar contra un sistema político y los poderes fácticos, que defendían intereses económicos de carácter particular, enquistados dentro de un sistema gubernamental marcado por la corrupción, que utilizó el poder como medio para someter a las fuerzas sociales, bajo la concepción de que el poder es: "*la capacidad de influir en los demás y así conseguir que el pueblo haga lo que los caudillos quieren ...*"; plan que, aquel viernes 21 de enero del 2000, no funcionó como esperaban, tanto el poder estatal, como también, el Alto Mando militar.

Las acciones ejecutadas por los oficiales subalternos, alumnos de la Escuela Politécnica del Ejército, durante la revuelta militar del 21 de enero del 2000, serán analizadas también, como una reacción ante la crisis económica, producto de las decisiones erráticas y sistemáticas de las élites gobernantes; en su orden: el salvataje bancario, feriado bancario y congelamiento de depósitos de los cuenta-ahorristas, ejecutadas a finales de los noventa y que desembocaron en una crisis social, pobreza, migración y desempleo.

Los sucesos del 21 de enero del 2000 y su desenlace, marcaron la historia agitada y controversial del Ecuador, generando una curiosa simbiosis entre el movimiento indígena y los jóvenes oficiales subalternos del Ejército ecuatoriano, pertenecientes a la Escuela Politécnica del Ejército (ESPE). A éste hecho, se lo nombró con sustantivos como: *traición, sedición, rebelión...*; o con frases descriptivas como: "*golpe de Estado*", "*revuelta militar*", "*sublevación militar*", entre otras...; y sus actores, es decir los

oficiales alumnos de la ESPE, recibieron adjetivos como: *sediciosos, golpistas, subversivos*, etc...; pero en realidad, fue la respuesta de dichos actores, frente al profundo malestar, y, a la grave crisis sistémica que vivió el Ecuador a finales del siglo XX, como resultado de la ineficiencia y corrupción de los gobiernos de turno, de la década de los noventa, que con escasos niveles de estabilidad política, aplicaron indiscriminadamente esquemas económicos, que desencadenaron una emigración masiva y la peor crisis social de la historia republicana del Ecuador.

Con estos antecedentes y como guía de la presente investigación, planteamos como pregunta central:

¿Cuáles son los procesos, que provocaron que los oficiales subalternos de las fuerzas armadas del Ecuador, se rebelen contra el poder político y el Alto Mando militar, el 21 de enero del año 2000?

Para dar respuesta a la interrogante planteada, se escogieron como objetos de estudio: *los procesos sociales que el Ecuador afrontó desde inicios de 1990 hasta inicios del 2000, los procesos de cambio en la educación militar aplicados en la década de los noventa y los acontecimientos sucedidos el 21 de enero del 2000*; enmarcados en los siguientes objetivos, que, en conjunto darán cuenta de la pregunta central:

El objetivo principal de esta investigación es: *hacer una nueva lectura, de los sucesos del 21 de enero del 2000, dar la voz a los protagonistas del hecho y examinar el papel que desempeñaron cada uno de ellos; para de esta manera revelar los antecedentes históricos, y, las razones que incentivaron a los oficiales de rangos medios del ejército ecuatoriano, a sublevarse contra el poder político y el Alto Mando militar.*

Y así concluir en función a la pregunta de investigación, si: *los procesos sociales-militares-políticos-económicos vividos en el Ecuador durante el período histórico 1990 – 2000, la educación militar impartida a los uniformados, y, las vivencias de los soldados durante la ejecución de las acciones de apoyo al desarrollo realizadas por el Ejército durante la década de los noventa, fueron los antecedentes y motivaciones, que incentivaron a los oficiales subalternos de las fuerzas armadas ecuatorianas, a rebelarse contra el poder político y el Alto Mando militar, el 21 de Enero del año 2000.*

Para alcanzar este objetivo principal y su conclusión, se plantearon los siguientes objetivos específicos:

- a) *Revisar los procesos históricos y movilizaciones sociales que el Ecuador afrontó desde 1990 hasta 1997, sobre los cuales las Fuerzas Armadas basaron sus procesos de cambio en la educación militar, orientada a la aplicación de los*

programas de apoyo al desarrollo, y, al acercamiento de los uniformados a la población civil; y también, *estudiar los procesos de inestabilidad, agitación política y crisis económica, vividos por el Ecuador, a partir de 1998 hasta inicios del 2000*, que incentivaron a que un grupo de militares en apoyo al pueblo ecuatoriano y en alianza con el movimiento indígena, desconozcan el orden constitucional y se involucren en la sublevación militar del 21 de enero del 2000.

- b) *Analizar los procesos de cambio en la educación militar, ejecutados en función a una nueva realidad nacional, en la cual, el movimiento indígena ecuatoriano, a partir de las movilizaciones de 1990, comienza su transformación de actor social marginal a actor político relevante.*

Educación militar influenciada ideológica por “nacionalismo”, “militarismo” y “nuevo militarismo”, y, basada en el estudio de los enfoques conceptuales de la Nación y su seguridad; conocimientos que, les permitió entender a los uniformados la problemática de la seguridad nacional, y, les capacitaría a los uniformados para ejecutar los planes y programas de apoyo al desarrollo, enmarcados en las políticas de relaciones civiles-militares; procesos que, permitirían que los uniformados se aproximen a los diversos sectores sociales, económicos y culturales del Ecuador, como parte de la política de defensa nacional y seguridad interna del Estado.

- c) *Relatar los acontecimientos sucedidos el 21 de enero del 2000, dando la voz a los actores de los hechos, poniendo énfasis en: las primeras acciones, el desarrollo de los acontecimientos y su desenlace.*

Acontecimientos que nos permitirán demostrar que, los antecedentes históricos vividos por el Ecuador en la década de los noventa, caracterizados por inestabilidad social y agitación política, obligaron a reorientar la educación militar, con el objetivo de formar soldados, con una cultura de acercamiento y apoyo a la ciudadanía, misma que al detonar la crisis económica de 1999, incentivó a que los oficiales subalternos del ejército ecuatoriano, tomen la decisión de unirse a las fuerzas sociales, para ejecutar la toma del Congreso Nacional del Ecuador, el 21 de enero del 2000.

El cumplimiento de los objetivos general y específicos, nos llevará a entender, las razones que incentivaron a los oficiales subalternos del ejército ecuatoriano, alumnos de la Escuela Politécnica del Ejército (ESPE), denominados

“oficiales académicos²”, a ejecutar la toma del edificio del Congreso Nacional del Ecuador, el 21 de enero del 2000, en medio de una crisis social y económica, que marcó el término de un siglo y el inicio de otro.

Los planteamientos sobre los cuales nos basamos para iniciar esta investigación, son los siguientes:

- La presencia del movimiento indígena en la política nacional, utilizando como medio de presión los levantamientos y manifestaciones sociales especialmente en los años 1990, 1992, 1994 y 1997, influenciaron para que las Fuerzas Armadas, especialmente la Fuerza Terrestre, materialicen cambios en sus sistemas educativos y culturales, con la finalidad de optimizar y mejorar la preparación profesional de los uniformados, entrenándoles con una educación técnica, cultural y con conciencia social, que les permita desarrollar sus funciones institucionales, acorde a la nueva realidad que vivía el Ecuador en la década de los noventa.
- La educación militar impartida a los uniformados, en respuesta a las acciones ejecutadas por los movimientos sociales desde 1990, se basó en la actualización de conocimientos, valores y destrezas en el ámbito académico militar, que permitieron que los oficiales se constituyan en entes de apoyo al desarrollo y generen una conciencia social, que en el corto plazo obligaría a un acercamiento entre los uniformados y su pueblo.
- La conciencia social y el sentimiento de apoyo al pueblo, productos de la formación militar, y, las experiencias vividas durante la aplicación de los programas de apoyo al desarrollo, a lo largo del territorio ecuatoriano; influenciaron en los uniformados, para reaccionar ante las decisiones erráticas del poder político, que generaron una crisis sistémica a finales de la década de los noventa.
- Los procesos que incentivaron a los oficiales de rangos medios del Ejército ecuatoriano, miembros de la ESPE, a protagonizar la revuelta militar del 21 de enero, fueron el resultado de un sentimiento de rechazo, ante las decisiones erráticas del poder político, mismas que generaron crisis económica, crisis social, pobreza, migración y desempleo; factores que,

² Oficiales académicos: frase utilizada por la prensa para nombrar a los oficiales de rangos medios, pertenecientes a la Escuela Politécnica del Ejército, que fueron actores de la revuelta militar del 21 de enero del 2000.

iban contra los valores inculcados a los uniformados durante su formación académica y reafirmados durante las vivencias adquiridas en el cumplimiento de sus funciones, junto al pueblo, a lo largo de todo el territorio ecuatoriano, durante la ejecución de las acciones de apoyo al desarrollo.

Los acontecimientos que incentivaron a los protagonistas de la sublevación militar del 21 de enero del 2000 en el Ecuador, se los analizará como procesos sociales y políticos, desarrollados en un contexto histórico, donde juegan un papel fundamental los procesos de enseñanza aprendizaje impartidos por los institutos militares, y, la interacción humana entre la sociedad civil y militar.

Integración humana, entendida no como un concepto, sino como un nivel articulador de concepciones: individuo-sociedad, lo cual permite introducir la discusión de la relación humana emparentada con el contexto social (Porrás Velasco 2005).

Esta investigación nos ayudará a entender el accionar de los militares, frente a las crisis sociales y políticas en el Ecuador; enfatizando como inciden en este accionar las políticas de relaciones cívico-militares y sus respectivos programas de apoyo al desarrollo, ejecutados por los miembros de las Fuerzas Armadas, en coordinación con la población civil, en la última década del siglo XX, en el Ecuador. Acciones ejecutadas en concordancia a la educación militar impartida desde inicios de la década de los noventa, en la cual se priorizaba la fusión de los uniformados con su pueblo.

Esta investigación nos permitirá también, sacar conclusiones tanto en el campo académico como social.

En el campo académico, podremos establecer cómo influyó *la reformulación de educación militar ecuatoriana en base a los procesos históricos vividos desde 1990*, en los oficiales de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, especialmente en los protagonistas de la sublevación militar de enero del 2000.

En el aspecto social, analizaremos *como fue percibida por la ciudadanía ecuatoriana, la aplicación de los conocimientos de los militares en las acciones de apoyo al desarrollo*, ejecutadas con el propósito de unir a los uniformados con su pueblo. Tomaremos para ello como casos de análisis: el apoyo de la ciudadanía durante las operaciones militares ejecutadas en la Guerra del Cenepa y el apoyo popular a las acciones ejecutadas por el grupo de oficiales académicos el 21 de enero del 2000, durante el proceso que provocó el derrocamiento del presidente de la República.

En el ámbito político; planteamos que, se ha dado una cierta convergencia, en la percepción por parte de la ciudadanía, que los uniformados no deben volver a ocupar el poder político, y, que no existen en la actualidad dentro de las instituciones militares proyectos para ejercer directamente las funciones de gobierno (D'Araujo 2013). Pero la realidad es diferente, ya que los militares siguen siendo actores políticos y sociales; (D'Araujo, María), tomamos como ejemplo el caso de Ecuador, donde las Fuerzas Armadas han tenido un rol de árbitro, ante disputas políticas y porque no decirlo han sido quienes marcaron el rumbo de las crisis de Estado; ejemplo de ello, el 21 de enero del 2000, donde se evidenció que si bien los militares dejaron el ejercicio directo del poder, permanecieron como actores políticos relevantes, readaptándose a los tiempos de la democracia para cumplir su misión de defensa y hacer valer sus intereses corporativos (D'Araujo 2013) ³.

Teniendo estos referentes, para el proceso de investigación; ejecutaremos un balance analítico, de los planes y programas de apoyo al desarrollo, ejecutados con mayor interés por el Ejército del Ecuador a partir de 1990, considerándoles como hito de partida, para el estudio las nuevas misiones asignadas a las Fuerzas Armadas y sus resultados obtenidos en la sociedad civil y en beneficio de la sociedad militar.

Al plantearse nuevas misiones, también se han generado nuevos escenarios ante la sociedad civil y especialmente en los períodos de gobiernos con características populistas y estructura partidaria es débil, direccionando de esta manera a que las Fuerzas Armadas se conviertan en garantes del Estado; por ende, pasan a ser también parte del poder político, asumiendo roles contrapuestos a su misión principal y establecida en las leyes constitucionales, tales como:

“el de fuerzas nacionalistas que luchan para derrocar a un régimen u oligarquía explotadora; el de fuerza conciliadora entre posturas extremas; el de redentores de una condición social malsana o deteriorante; el de directores de un sistema político; el de grupo de presión que expresa las aspiraciones de una determinada clase social o que plantea las aspiraciones populares” (Manpreet 2019).

Motivaciones, que han incitado a que las Fuerzas Armadas adopten funciones que no están en el régimen constitucional. Respondiendo de ésta manera, a las complejas realidades y problemáticas, socio-económico-políticas del Estado, como las vividas en el

³ Un ejemplo muy reciente es la declaración y posicionamiento de los jefes de las Fuerzas Armadas de Bolivia, retirando el apoyo al Presidente Evo Morales; convirtiéndose en actores políticos relevantes de una crisis con múltiples factores, en noviembre del 2019.

Ecuador durante la década de los noventa y que son analizadas a detalle en la presente investigación.

Al ser la finalidad de esta investigación, estudiar y entender, las dinámicas que incentivaron a los oficiales de la Escuela Politécnica del Ejército, sublevarse contra el poder político y los altos mandos militares, como consecuencia del cambiante papel de las fuerzas militares, al tenor de una profunda y continua metamorfosis de la economía y la política en el Ecuador, en el marco histórico de la década de los noventa del siglo XX; analizaremos los trabajos de investigadores como (García, Bertha); quien en el documento titulado: “¿Por qué no prospera el diálogo Civil-Militar en el Ecuador?”, manifiesta textualmente:

“Las relaciones civil-militares son esencialmente políticas y demuestran la existencia de una tensión; constituyen una relación inestable de fuerza entre quienes detentan el poder directo de las armas y los gobiernos que representan la autoridad del Estado” (García Gallegos 2003).

En el mismo documento cita también el tema del 21 de enero del 2000, objeto de nuestra investigación.

Los nuevos procesos de apoyo al desarrollo, ejecutados con mayor interés por el Ejército ecuatoriano a partir de 1990, para tratar de contrarrestar los procesos de exacerbación social protagonizados especialmente por el movimiento indígena, como manifesté en líneas anteriores tienen como hito de inicio los procesos de cambio en la educación militar impartida en los institutos de formación castrense; para lo cual, tenemos que reflexionar sobre: los procesos de formación y capacitación militar vigentes en la década 1990 – 2000, aplicados especialmente en la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro”, instituto de formación de los oficiales de la Fuerza Terrestre y relacionar estos procesos con los estudios realizados por (Janowitz, Morris), en su obra “El soldado profesional” (Janowitz 1960), donde se puede observar que dicho investigador impulsaba las tres peculiaridades, también establecidas por (Huntington, Samuel), para definir la profesión militar: sus dimensiones, técnica y moral.

Cabe destacar que (Janowitz, Morris), no dio prioridad a la autonomía profesional militar, como lo hizo (Huntington, Samuel); más bien, se centró en examinar las características “socio-económicas-políticas-culturales”, que los uniformados compartían con otras fracciones de la sociedad a la que pertenecían y que ayudaban a definir su profesionalismo. (Janowitz, Morris) a estos los procesos de profesionalización de las Fuerzas Armadas, los llamó “formas de civilización de las Fuerzas Armadas”; esto es,

la incorporación de lógicas y prácticas del mundo civil en el ámbito militar. (Soprano 2013).

Luego de estudiar brevemente los escritos de (Janowitz, Morris), y establecer una relación con nuestro caso de investigación, examinaremos: el “Análisis del perfil profesional vigente del subteniente de la fuerza terrestre y sus prácticas profesionales en los repartos militares” del Ecuador (Cueva, Campana y Abarca 2000), de los autores (Campana, Patricia), (Cueva, Fernando) y (Abarca, Hernán), documento que analiza el perfil profesional, con el cual fueron formados de los oficiales subalternos del ejército ecuatoriano, actores de la sublevación militar del 21 de enero del 2000.

Este análisis, lo complementaremos relacionándole con la aplicación de los conocimientos adquiridos por los uniformados en el desarrollo del país, en aspectos como: educación, salud, forestación, agroindustria, seguridad interna; y como esto influyó en la sociedad civil, para generar un vínculo entre la sociedad civil y los militares.

Previo a la lectura los debates planteados desde al menos la década del 50 hasta finales del siglo pasado y al análisis de los procesos de cambio en la educación militar; se examinará, el contexto socio-político-económico del Ecuador en la década de los noventa y como influyó ésta realidad que vivió el Ecuador en este período de tiempo, en los oficiales de la Escuela Politécnica del Ejército, para que ellos, en conjunción con el pueblo indígena y la sociedad civil, ejecuten la toma del Congreso Nacional del Ecuador, en Enero del 2000, en clara contraposición al poder político y al Alto Mando militar.

Para ello, revisaremos los escritos de autores como (Lucas, Kinto); quien, relata los hechos de la historia contemporánea del Ecuador, de una manera cronológica, con especial referencia desde 1990 hasta el año 2001, período que se caracterizó por las luchas sociales, las cuales generaron cambios políticos en el Ecuador (Lucas, Ecuador cara y cruz - Del levantamiento de los noventa a la Revolución Ciudadana 2015).

En este contexto, se estudiará de manera cronológica los hechos históricos que de una u otra manera influenciaron para la reorientación de la educación y entrenamiento militar; como también, los antecedentes que incentivaron en las futuras decisiones tomadas por los oficiales de rangos medios de la Escuela Politécnica del Ejército, ante la crisis del Estado, el 21 de enero del 2000.

Estos hechos que nos ayudarán a comprender el proceso social por el cual las Fuerzas Armadas hacen un giro en su educación y formación militar en la última década del siglo XX, tomando como hito de inicio los levantamientos indígenas y sociales a inicios de la década de los noventa.

Para los cual se tomará el 28 de mayo de 1990, como fecha de inicio de nuestra investigación por ser el día del primer hecho simbólico, que determina la incursión del movimiento indígena en la política ecuatoriana, cuando sus representantes, en coordinación con las organizaciones populares de Quito, se toman la iglesia de Santo Domingo, demandando el derecho a la tierra y criticando el modelo económico regentado por el presidente Rodrigo Borja.

La toma de la iglesia de Santo Domingo, fue la acción que precedió al primer levantamiento indígena de la historia moderna del Ecuador, ejecutado entre el 4 y el 8 de junio de 1990, es decir una semana después de la toma de Santo Domingo; medida de hecho, ejecutada por el movimiento indígena, que marca un antes y un después de la interculturalidad ecuatoriana, naciendo el concepto de estado plurinacional, mediante la lucha en las carreteras de la serranía del Ecuador; pronunciamiento al que se unieron también los sectores sociales pobres de la sociedad ecuatoriana (Andrade 2009).

El primer levantamiento indígena nacional del 4 de junio de 1990, es nombrado para la historia como “levantamiento del Inti Raymi”; denominado así por la cercanía al solsticio de invierno, que de acuerdo a la tradición y cosmovisión indígena se celebra con la “fiesta del sol”, en varias poblaciones de la serranía ecuatoriana y región andina.

Este hecho, no solo constituyó el ingreso de las organizaciones indígenas en la política nacional, sino también obligo a que las Fuerzas Armadas analicen y replanteen sus escenarios, su educación y entrenamiento militar, para asumir con firmeza los nuevos retos que la sociedad civil, el movimiento indígena y los movimientos sociales les planteaban.

La toma de la iglesia de Santo Domingo y el denominado “levantamiento del Inti Raymi”, para nuestro estudio los consideramos como hitos de inicio en nuestra investigación, ya que éstos, no solo causaron un remezón en el Estado ecuatoriano, sino también dentro de la institución militar, obligando a los uniformados a ejecutar procesos de cambio en su educación y entrenamientos, orientándolos a los nuevos escenarios de conflictividad social que en el país se avizoraban.

Las Fuerzas Armadas, inician desde ese momento histórico (levantamiento del Inti Raymi), un proceso de acercamiento de los uniformados, tanto oficiales y tropa, con la comunidad, los grupos sociales y especialmente con el movimiento indígena; cambios en la educación, entrenamiento militar y accionar de los uniformados, que una década después generarían una simbiosis entre la sangre guerrera de nuestro movimiento indígena y el amor a la Patria de los jóvenes oficiales del ejército ecuatoriano alumnos de

la ESPE, al tomarse el edificio del Congreso Nacional del Ecuador, el 21 de enero del 2000, en claro apoyo al pueblo ecuatoriano y en rechazo a las élites políticas.

El levantamiento del Inti Raymi dio la pauta para las futuras movilizaciones y levantamientos indígenas, como es el caso de las movilizaciones relacionadas con los “500 años de resistencia indígena”, en el año 1992; año en el cual se generaron dos acciones de hecho. La primera durante el gobierno del Dr. Rodrigo Borja Cevallos (*10 de agosto de 1988 al 10 de agosto de 1992*) y la segunda en el gobierno recién posesionado del Arq. Sixto Durán Ballén (*10 de agosto de 1992 y el 10 de agosto de 1996*).

La primera en el mes de abril de 1992, conocida como la “marcha por los territorios” denominada también “la caminata”; en la cual los pueblos indígenas de la provincia de Pastaza caminaron desde la región amazónica a partir del 11 de abril de 1992, hasta llegar a la Capital trece días después (Becker 2015). En Quito los indígenas amazónicos permanecieron 20 días a la espera de la entrega de por parte del Presidente Rodrigo Borja de los documentos que legalizaban la propiedad de sus territorios (Porras Velasco 2005).

La segunda en el mes de octubre de 1992, denominada “marcha indígena hacia Quito”; en la cual la capital del Ecuador fue el lugar de confluencia de diversas movilizaciones indígenas, convocadas por la CONAIE el 4 de octubre de 1992, en protesta a la celebración de los “500 años de conquista” española y reivindicando más bien los “500 años de resistencia” indígena a celebrarse el 12 de octubre de 1992. La movilización indígena concentró en la Plaza de San Francisco de Quito a cerca de 10000 indígenas, mientras que en todo el país especialmente en la Sierra Central se generaban bloqueos de vías, concentraciones y manifestaciones. Estas acciones de protesta indígena por la celebración de los “500 años de conquista” se alargaron hasta el 15 de octubre en algunos sectores del país.

Si bien la CONAIE tenía como bandera de lucha el rechazo a la celebración de los “500 años de conquista”; la conflictividad y los reclamos al Gobierno durante las acciones de hecho, demostraron también la disconformidad del movimiento indígena y de los sindicatos públicos, ante los procesos de privatizaciones e incrementos de los costos de energía eléctrica y derivados del petróleo; como también se evidenció la exigencia indígena a la extensión de la seguridad social para los campesinos (Ramírez Gallegos y Ramírez, *La estampida migratoria ecuatoriana: crisis, redes transnacionales, y repertorios de acción migratoria* 2005).

El levantamiento del Inti Raymi, también fue el ejemplo que siguió el movimiento indígena para otras acciones de hecho y movilizaciones durante la década de los noventa como: la “movilización por la vida” de junio de 1994 y la caída de Bucarán de 1997. Estos procesos son antecedentes que preceden a la movilización indígena del 15 de enero del 2000 y la revuelta militar del 21 de enero del 2000; hechos que serán analizados a detalle en el segundo capítulo de esta investigación.

La denominada movilización por la vida de 1994, fue una acción de hecho generada por los pueblos indígenas, censurando una nueva ley propuesta por el presidente Durán Ballén, que permitía hipotecar o vender las tierras catalogadas como comunales, poniendo de esta manera según el movimiento indígena fin a la reforma agraria, la cual había sido resultado de una lucha de 30 años. Estas medidas, según el movimiento indígena, serían una puerta abierta para la aplicación de políticas neoliberales (Becker 2015).

El movimiento indígena exigió dialogar con el presidente, mismo que se rehusó a aceptar las propuestas de los grupos antagónicos; generando el rechazo de los pueblos indígenas, que en protesta bloquearon carreteras y paralizaron al país, por aproximadamente 10 días. Pese a ello el gobierno central procedió a promulgar una nueva Ley de Desarrollo Agrario (Becker 2015).

Los levantamientos de 1990, 1992 y 1994; en su orden: Levantamiento del Inti Raymi, la marcha por los territorios (la caminata), marcha a Quito y la movilización por la vida, le dieron a los pueblos indígenas del Ecuador la notoriedad de ser el movimiento más fuerte y organizado de América (Becker 2015).

Siguiendo un orden cronológico, uno de los antecedentes históricos, que influenció en los jóvenes oficiales protagonistas de la Revuelta Militar del 21 de enero del 2000 y que no podemos dejar de mencionar es: la Guerra del Cenepa; conflicto armado entre Ecuador y Perú, que inició oficialmente el 26 de enero de 1995, en medio de una crisis gubernamental por denuncias de corrupción e intenciones de implementar políticas de privatizaciones, por parte del Estado ecuatoriano.

La Guerra del Cenepa, puso en claro que las Fuerzas Armadas es una de las instituciones del Estado ecuatoriano más fortalecidas por la democracia (Verdesoto Custode 2014); además, durante el conflicto bélico se evidenció con mayor claridad el “pacto cívico-militar”, que no solo comprometía a las élites políticas, sino a los movimientos sociales, pueblos y nacionalidades indígenas, sociedad civil en general y las Fuerzas Armadas. Esto fue una consecuencia directa de la educación y doctrina

militar, que marcaba las relaciones cívico-militares, puesta en ejecución desde inicio de los años noventa y germinada durante los procesos de apoyo al desarrollo, ejecutados en el Ecuador, con mayor interés a partir de 1990.

Como manifiesta un analista; “las guerras dejan secuelas importantes en sus actores”, para los triunfadores prima la cohesión y en los perdedores asedia la crisis; pero en el caso ecuatoriano, pese a haber triunfado en la guerra, era tan grande la crisis que remolcaba, que la victoria no pudo contrarestar a la ola de descontento entre los sectores de la sociedad civil e inclusive de los miembros de las fuerzas armadas, para con el poder político, el cual claramente demostraba su notable ineficacia e incapacidad de imponer políticas y ejecutar estrategias contra la corrupción (Verdesoto Custode 2014).

Pese a la conflictividad social y la Guerra del Cenepa, en el período (1992 – 1996), los datos macroeconómicos arrojaron cifras superiores al período (1988 – 1992), con un promedio de crecimiento anual de la economía del 3%, reducción de la inflación y aumentos tanto del salario real como del empleo; factores que ayudaron para que en el período (1992 – 1997), se genere una reducción de la pobreza de ingresos (Ramírez Gallegos y Ramírez, La estampida migratoria ecuatoriana: crisis, redes transnacionales, y repertorios de acción migratoria 2005).

El balance positivo registrado en las cifras macroeconómicas en el período de post-liberación y triunfo en las operaciones militares durante la Guerra del Cenepa, no mitigaron el descontento y la desconfianza de la sociedad con los gestores estatales, responsables de la inestabilidad y una crisis generalizada del poder político, como también del sistema de partidos; consecuencia de ello el resurgimiento del populismo clásico.

La sociedad ecuatoriana buscaba formas de expresión que el desprestigiado sistema de partidos no permitía, apareciendo en la contienda política el Partido Rodosista Ecuatoriano (PRE) al estilo de la antigua organización política “Concentración de Fuerzas Populares”. El Partido Roldosista, en resumen, es la consecuencia de tres factores: el colapso del régimen de partidos políticos, la transición truncada del populismo hacia la modernidad planteada por extinto Jaime Roldos Aguilera, y, las ideas sembradas por los movimientos “CFP y Velasquismo” de tintes populistas (Verdesoto Custode 2014).

La nueva tendencia populista, representada por el Partido Roldosista Ecuatoriano, registra sus primeros resultados en las elecciones presidenciales de 1996, donde tres corrientes lideraron la votación popular: la derecha representada por Jaime Nebot Saadi,

la izquierda personificada por Freddy Ehlers, y, el populismo liderado por Abdalá Bucaram.

Las elecciones presidenciales de 1996 en su primera vuelta, determinaron como ganadores, al representante de la derecha y al candidato del populismo; los cuales debían disputar la presidencia de la República, en una segunda vuelta electoral.

Abdalá Bucaram, para la segunda vuelta genera varias alianzas con diversos actores políticos e inclusive con el movimiento indígena, estrategia que le permite triunfar en la contienda electoral, llegando al poder como Presidente Constitucional de la República del Ecuador, en agosto del 1996.

El Gobierno del líder populista Abdalá Bucaram, poseionado en agosto de 1996, planteó un plan económico que incluía varias reformas cuyos objetivos principales eran: la eliminación de subsidios, un esquema de privatizaciones, trasformaciones de la seguridad social, reformas en el sector petrolero y la implementación de un sistema monetario de convertibilidad inspirado en la propuesta argentina; es decir, la paridad entre la moneda nacional y el dólar norteamericano (Ramírez Gallegos y Ramírez, La estampida migratoria ecuatoriana: crisis, redes transnacionales, y repertorios de acción migratoria 2005).

El Gobierno de Abdalá Bucaram, no puso interés en implementar su plan de gobierno y más bien se caracterizó por el saqueo de fondos públicos, intimidaciones a los medios de comunicación, amenazas a los movimientos sociales y desarticulación de los sindicatos públicos (Porrás Velasco 2005), generando una aguda crisis de gobernabilidad, ya que desestructuró instituciones del sistema político, manoseó la opinión pública, atropelló todos los procedimientos, generando una crisis nacional.

Fue un gobierno corto que priorizó la corrupción, el clientelismo y autoritarismo (Porrás Velasco 2005). Esos procesos llevaron a que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la Coordinadora de Movimientos Sociales y el Frente Unitario de Trabajadores, convoquen a una movilización nacional en 1997; movilización que se unieron, las fuerzas políticas de diferentes tendencias, cámaras de comercio e industria, sindicatos, banqueros, alcaldías de todo el país, y la ciudadanía de todo el Ecuador.

En febrero de 1997, la crisis de gobernabilidad generada por el gobierno populista bucaramista, provoca una de las más grandes crisis políticas desde el inicio de la democracia. Paralizaciones, huelgas, levantamientos indígenas y manifestaciones populares, hacían tambalear al gobierno de Abdalá Bucaram, con la convocatoria a la

huelga general; denominada, “Paro Cívico Nacional” y “Jornadas Cívicas de Protesta por la Dignidad Nacional”.

La injerencia indígena durante la huelga general de febrero de 1997, se diferencia de las movilizaciones de 1990, 1992 y 1994; ya que las demandas movilizadoras no eran étnicas, sino más bien eran demandas compartidas con otros sectores de la sociedad y el pueblo en general. El pueblo indígena protestaba también por la molestia e indignación de haber sido manipulados por el gobierno, con el propósito de dividirlos (Porrás Velasco 2005), pese a que por su apoyo y las alianzas generadas en el periodo de campaña electoral, le llevaron al poder a Abdalá Bucaram.

Tras la movilización indígena junto a los sectores sociales y la presión popular, el Congreso Nacional del Ecuador toma la decisión de destituir al presidente de la República, argumentando incapacidad mental, con 44 votos, que constituía la mayoría simple y nombran como presidente interino a Fabián Alarcón, que a esa fecha era presidente del Congreso Nacional del Ecuador (Lucas, Ecuador cara y cruz - Del levantamiento de los noventa a la Revolución Ciudadana 2015).

Tras la destitución del presidente de la República, ejecutada por una coalición golpista de fuerzas parlamentarias y secundada por el Alto Mando militar, la pugna por el poder se hizo visible; Rosalía Arteaga, vicepresidente de la República, se autoproclama presidenta, por considerarse sucesora legal del presidente depuesto, Abdalá Bucaram negaba la resolución del Congreso Nacional y Fabián Alarcón por otro lado asumía el poder por mandato del Congreso Nacional (Lucas, Ecuador cara y cruz - Del levantamiento de los noventa a la Revolución Ciudadana 2015). Desde ese momento, como lo afirma el escritor y periodista (Lucas, Kintto); en su libro, “Ecuador Cara y Cruz – del levantamiento del noventa a la Revolución Ciudadana”: *“al mejor estilo del realismo mágico, Ecuador tenía tres presidentes, aunque ninguno tenía poder”* (Lucas, Ecuador cara y cruz - Del levantamiento de los noventa a la Revolución Ciudadana 2015).

Al final, quien asuma el mandato presidencial sería definido por los militares, que como se manifestó al inicio de este documento: “siguen siendo actores políticos y sociales con un rol de árbitro ante disputas políticas”, marcando de esta manera el rumbo de las crisis del Estado.

El Jefe del Comando Conjunto, General Paco Moncayo Gallegos, hace un pronunciamiento público: las Fuerzas Armadas del Ecuador *“no podían estar con ninguna de las partes, ni asumir el poder, porque sería Golpe de Estado* (Lucas, Ecuador cara y cruz - Del levantamiento de los noventa a la Revolución Ciudadana 2015)”;

avalando así la resolución del Congreso Nacional, ya que con dicho pronunciamiento, las Fuerzas Armadas le quitan el respaldo al presidente Abdalá Bucarán.

Fabián Alarcón, asumió el poder como presidente de la República, durante el resto del período que debía haber cumplido Abdalá Bucaram; con el apoyo de los movimientos indígenas. Apoyo condicionado a la convocatoria a asamblea constituyente, con el objetivo de redactar una nueva Constitución, que permita crear leyes para afianzar un sistema político incluyente (Becker 2015). En esta nueva Constitución, el movimiento indígena pedía incluir la definición del Ecuador como un “Estado Plurinacional y Multiétnico”, demanda que había motivado las movilizaciones en 1990, 1992 y 1994.

En agosto de 1998, Jamil Mahuad luego de triunfar en las elecciones presidenciales, asume el poder; generando en la sociedad ecuatoriana amplias expectativas. Pero poco tiempo después, se presentó otra realidad; en los primeros meses de mandato, Mahuad centró sus esfuerzos únicamente en los procesos de negociación territorial con el Perú, dejando a un lado temas importantes para el Estado, como los relacionados al manejo económico y fiscal del Ecuador.

Jamil Mahuad durante su gobierno prefirió evadir la creación y aplicación de políticas de reforma financiera; más bien, aplicó un masivo salvataje bancario (Verdesoto Custode 2014), concediendo créditos millonarios a través del Banco Central del Ecuador y de instituciones públicas, sustentándose en la Ley de la AGD (Lucas, Ecuador cara y cruz - Del levantamiento de los noventa a la Revolución Ciudadana 2015). Con este instrumento legal, se entregaron más de mil cuatrocientos millones de dólares, un equivalente al 24% del PIB, a los bancos en problemas (Ramírez Gallegos y Ramírez, La estampida migratoria ecuatoriana: crisis, redes transnacionales, y repertorios de acción migratoria 2005). Esta medida que provocó el derrumbe económico y desató una crisis bancaria insostenible.

Con el afán de seguir beneficiando a los financistas de la campaña electoral que le llevó al poder (banqueros), el gobierno de Jamil Mahuad recurre a una medida extrema: decreta un feriado bancario y el congelamiento de los depósitos de los ahorristas, el lunes 8 de marzo de 1999.

En reacción a las medidas tomadas y contra el mal manejo económico del Gobierno, el movimiento indígena, organizaciones sociales, sindicatos y partidos políticos de oposición, convocaron a un paro general por 48 horas.

Ante la crisis del Estado y con un país convulsionado, Mahuad el jueves 11 de marzo de 1999, anuncia medidas económicas y el envío de 10 proyectos de ley urgentes;

medidas y proyectos de ley, que, según su discurso, serán implementados para combatir la hiperinflación en la que se encontraba inmerso el Ecuador. Proyectos de ley que permitirían al Ejecutivo (Gobierno Nacional) la privatización de empresas de los sectores estratégicos, como: telecomunicaciones (empresas telefónicas), petróleos, electricidad, puertos, aeropuertos y correos (Lucas, Ecuador cara y cruz - Del levantamiento de los noventa a la Revolución Ciudadana 2015).

El feriado bancario aplicado el 8 de marzo se extendió hasta el lunes 15 de marzo de 2009, período en que el gobierno decreta el congelamiento de las cuentas corrientes, ahorros y plazo fijo, prohibiendo el retiro por un año del 50% del saldo de las cuentas con valores superiores a 200 dólares y el total del valor depositado en cuentas de moneda extranjera mayores a 500 dólares (Lucas, Ecuador cara y cruz - Del levantamiento de los noventa a la Revolución Ciudadana 2015).

Jamil Mahuad afirmó que estas medidas económicas “*sentarán las bases para implantar una futura convertibilidad o directamente dolarización de la economía ecuatoriana (Mahuad, Jamil)*” (Lucas, Ecuador cara y cruz - Del levantamiento de los noventa a la Revolución Ciudadana 2015).

El discurso del presidente y las medidas aplicadas, provocaron que las organizaciones sociales, sindicales y el movimiento indígena se auto convoquen a una movilización nacional, y, a la desobediencia civil; acción, a la que se unió el sector del transporte.

Ante las presiones generadas por la movilización nacional, Jamil Mahuad anuncia la derogación de parte de las medidas anunciadas el 11 de marzo de 1999 e inmediatamente rebaja los precios de los combustibles, y, anuncia la flexibilización del congelamiento bancario, como también el retiro de los proyectos de ley de privatizaciones de los bienes del Estado.

Las Fuerzas Armadas nuevamente juegan un rol de árbitro ante las disputas políticas, y, marcan el rumbo de las crisis de Estado. Emiten un comunicado declarando que se oponían a aumentar la represión, y, a “cualquier salida que vaya contra el sistema democrático (Lucas, Ecuador cara y cruz - Del levantamiento de los noventa a la Revolución Ciudadana 2015)”.

En el plano internacional, también existió un pronunciamiento de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, oponiéndose a cualquier salida dictatorial, ante las aseveraciones de ciertos grupos de poder, quienes afirmaban que Jamil Mahuad gestaba un auto-golpe de Estado.

En el período marzo - julio de 1999, el movimiento indígena, se retira del escenario político y de confrontación. El gobierno por su parte se centró únicamente a gestionar la aprobación del presupuesto del Estado, y, en la suscripción de un acuerdo con el FMI (Fondo Monetario Internacional) (Verdesoto Custode 2014).

El movimiento indígena en el corto período que se alejó del escenario político, logró generar vínculos con los movimientos sociales opuestos a las políticas de modernización del Gobierno, y, también con fracciones de las Fuerzas Armadas que demostraron su descontento e inconformidad con el gobierno de Jamil Mahuad.

En el mes de Julio de 1999, después del incumplimiento de los acuerdos aceptados en marzo por el gobierno y la decisión de aumentar nuevamente el costo de la gasolina, e, insistir con el proyecto de privatizaciones de bienes del Estado; las manifestaciones populares colocan al gobierno en una situación de extrema fragilidad.

Los dirigentes sociales, taxistas, afiliados del seguro campesino, trabajadores petroleros, trabajadores de la salud, profesores, vendedores ambulantes y el movimiento indígena, exigen que se deje sin efecto la subida de precios de los combustibles, y, que se archive definitivamente la ley que autorizaría al ejecutivo iniciar los procesos de venta de activos y privatización de empresas del Estado. Estas protestas, generaron una convulsión social, similar a la que vivió el país en febrero de 1997, cuando fue destituido el presidente Abdala Bucaram.

La inestabilidad social y económica, se alargó en el segundo semestre de 1999, mientras el sector empresarial de la costa, especialmente de Guayaquil, presionaba al presidente para que implemente políticas de liberalización radical, acorralándolo de esta manera al gobierno, y, obligándolo a decretar la dolarización de la economía ecuatoriana, el 9 de enero del 2000.

Esta acción tardía, de apoyo a los empresarios de la costa y sierra, no logró evitar el avance de la insurgencia indígena con apoyo de los mandos medios de las Fuerzas Armadas; misma que, desembocaría en la caída del gobierno de Jamil Mahuad, el 21 de enero del 2000.

En resumen, las acciones sociales, y, los cambios políticos acaecidos en la última década del siglo XX, los estudiaremos segmentados en dos períodos históricos: *el primero, desde inicios de 1990 hasta finales 1996*, etapa caracterizada por una exacerbación social protagonizada por el movimiento indígena, y, *el segundo desde inicios de 1997 hasta inicios del 2000*, período caracterizado por una crisis política que desembocaría en una crisis económica de grandes proporciones.

Los cambios políticos los analizaremos tomando como referencia los estudios sobre liberalismo, política de la cultura y reforma institucional de (Andrade, Pablo); académico que, toma como caso de investigación al Ecuador en el período 1997 – 2000, fundamentado sus estudios en las teorías institucionalistas sobre la democracia (Andrade 2009).

Nos centraremos también para el análisis de los antecedentes socio-político-militares-económicos, que incentivaron a los oficiales subalternos de la ESPE a participar en la revuelta militar de enero del 2000. Sucesos que ocurrieron cronológicamente en el período 1997 – enero 2000; tomando como hito, la crisis institucional política del Ecuador, evidenciada durante el golpe de Estado de febrero de 1997, que dio como resultado la instauración de un gobierno interino hasta 1998, el cual planteó como objetivos: un proceso de reforma política que organice las instituciones para mejorar la representación política, desbloquear el sistema político y garantizar un proceso de gobernabilidad en el Estado ecuatoriano (Andrade 2009).

Otra fuente de consulta, serán las investigaciones y publicaciones de (Pachano, Simón), pensador político, mismo que planteó que una de las soluciones era el cambio en las relaciones entre el Estado y la sociedad, mediante la creación de mecanismos institucionales y legales, que garanticen la participación de todos los sectores sociales (S. Pachano 1997).

En base a la cronología de los hechos, detallados en los dos períodos antes mencionados, debemos mencionar que: mientras en el Ecuador de 1997 se trataba de re-institucionalizar el Estado, por otro lado, se iniciaba una de las más execrables crisis bancarias del Ecuador, como resultado de la falta de control del Estado y la Superintendencia de Bancos del Ecuador, en el otorgamiento de créditos vinculados, especialmente a compañías fantasmas, que resultaron ser propiedad de los mismos banqueros o de sus familiares, afectando con ello a miles de depositantes, que confiaron en el sistema bancario nacional y especialmente en la banca privada (Mendoza Calamarco 2002).

Fraudulento fenómeno financiero que, acarreó serias consecuencias políticas, económicas y sociales para el Ecuador, las cuales serían los detonantes principales, que incitaron a que los oficiales de rangos medios alumnos de la Escuela Politécnica del Ejército, en pleno apoyo a su pueblo y especialmente a los afectados por la banca privada, se unieran a los movimientos sociales, para luchar juntos, en contra del poder político, que defendía a los intereses de la banca privada, en enero del 2000.

Durante el último semestre de 1997 e inicios del año 1998, el Ecuador comenzó la etapa más crítica, en su historia republicana; el proceso de insolvencia se intensificó en el periodo 1997-1998 y alcanzó proporciones efectivamente alarmantes para el año 1999, cuando la crisis bancaria afectó a un 40% el sistema financiero e hizo que el Estado ecuatoriano concediera auxilios financieros por un monto mayor a lo esperado, generando la mayor crisis financiera registrada en el Ecuador (Mendoza Calamarco 2002).

La crisis financiera, generó a la vez, la más grande oleada migratoria que vivió el Ecuador, a consecuencia del colapso del sistema financiero, el feriado bancario, congelamiento de las cuentas y la dolarización.

Luego de estudiar y analizar los antecedentes históricos, como también los procesos de cambio en la educación militar, ejecutados por parte de las Fuerzas Armadas desde el año 1990, y, que de acuerdo a nuestra hipótesis serían los detonantes de la revuelta militar del 21 de enero del 2000; para dar cumplimiento al segundo objetivo específico planteado en este trabajo de investigación, nos centraremos en el análisis de los procesos del 21 de enero del 2000, sus actores y las dinámicas.

Proceso que, lo estudiaremos en base al análisis de las primeras acciones, del desarrollo de los acontecimientos, y, su desenlace. Para lo cual, se revisarán y analizarán, los hechos ocurridos antes, durante y después de la toma del Congreso Nacional del Ecuador; apoyándonos como fuentes de investigación en las experiencias personales vividas aquel día, en los relatos de los actores principales, y, en los trabajos publicados por diferentes autores, entre ellos: (Hernández, José) (Hernández, Aráuz, y otros 2000), (Saad, Pedro) (Saad Herrería 2000), (Dieterich, Heinz) (Chomsky, y otros 2000), (Lucas, Kintto) (Lucas, La rebelión de los indios 2000), (Álvarez, Vladimiro) (Álvarez Grau 2001), (Herrera, Francisco) (Herrera Aráuz 2001), (Paz y Miño, Juan) (Paz y Miño Cepeda 2002), (Molina, Alberto) (Molina Flores 2005), y otros...

Adicional a los documentos, investigaciones y libros antes mencionados, nos apoyaremos también en los documentales y archivos de prensa, de los diferentes medios de comunicación que cubrieron la noticia de la revuelta militar del 21 de enero del 2000; con especial atención a, los testimonios y documentales recopilados en el libro: *“21 de enero – la vorágine que acabó a Mahuad”* (Hernández, Aráuz, y otros 2000).

La investigación de los procesos del 21 de enero del 2000, tomando como base fundamental del análisis la educación militar y los hechos históricos desarrollados en la década de los noventa; tendrán como marco disciplinario: al “nacionalismo”, el “militarismo”, el “nuevo militarismo”, y, las tendencias globales de las “relaciones

civiles-militares”, enmarcadas en los cambios de la concepción de “seguridad y nación”, y, en el papel de las Fuerzas Armadas frente a las nuevas amenazas y sus relaciones con la sociedad civil, plasmadas en los planes y programas de apoyo al desarrollo, ejecutadas por los uniformados como parte de su estrategia de fusión del ejército con su pueblo.

Entre los conceptos nucleares más importantes para dar cuenta a la pregunta de investigación tenemos:

1. Hechos históricos: que presionaron a la Fuerzas Armadas a un cambio en su educación y entrenamiento militar
2. Movilizaciones indígenas
3. Inestabilidad política
4. Guerra del Cenepa
5. Derrocamiento presidencial
6. Gobierno interino
7. Asamblea Constituyente del Pueblo
8. Crisis: especialmente la económica y social vivida en el Ecuador a finales de los años noventa
9. Educación y doctrina militar
10. Nacionalismo
11. Militarismo
12. Estado – nación
13. Seguridad nacional
14. Desarrollo nacional
15. Política nacional
16. Relaciones civiles-militares: en particular los planes y programas de apoyo al desarrollo
17. Sublevación militar

La metodología utilizada en esta investigación se divide en dos partes: a) el análisis históricamente contextualizado de la evidencia documental, detallada en la bibliografía y análisis documental de la prensa escrita; y, b) la técnica de la entrevista, diálogos grupales y relato de vivencias personales del autor de la investigación.

El análisis históricamente contextualizado de la evidencia documental, nos servirá para determinar los hechos socio-políticos vividos en el Ecuador que obligaron a ejecutar cambios en la educación y entrenamiento de las Fuerzas Armadas, durante la última

década del siglo XX; para ello, nos regiremos a los manuales de instrucción y doctrina militar vigentes para el período de investigación 1990-2000.

Adicional a los documentos, investigaciones, libros y manuales antes mencionados, el análisis también se basará en los documentales y archivos de prensa, de los diferentes medios de comunicación, que cubrieron las noticias tanto de los antecedentes históricos como de la revuelta militar del 21 de enero del 2000.

La técnica de la entrevista, diálogos grupales y relato de vivencias personales del autor de la investigación, se la aplicará para obtener información y datos históricos, que no se encuentren documentados. Nos basaremos en los relatos de los uniformados que fueron parte de la sublevación militar, con especial importancia, los oficiales y ex oficiales del Ejército ecuatoriano, que el 21 de enero del 2000 formaban parte de la Escuela Politécnica del Ejército, como alumnos becados en las diferentes ingenierías, de este instituto de educación superior.

Para el cumplimiento de los objetivos planteados en la investigación, la evidencia se procesará ordenando toda la información obtenida, luego se la sistematizará, y, así evaluaremos los documentos y evidencias; para, por último, analizar la información y generar el documento resultado de la investigación. En resumen, se seguirá los siguientes pasos:

1. Ordenar
2. Sistematizar
3. Evaluar
4. Analizar

Dando como resultado, el documento consolidado en tres capítulos que cumplen los objetivos específicos planteados para la presente investigación.

El primer capítulo, *“Ecuador en década de los 90: procesos sociales - militares - políticos – económicos”*; capítulo en el cual, se estudiará las primeras movilizaciones indígenas, la inestabilidad política, la Guerra del Cenepa, el derrocamiento presidencial de Abdalá Bucaram, la instauración de un gobierno interino presidido por Fabián Alarcón, y, la conformación de la Asamblea Constituyente del Pueblo, en medio de la crisis sistémica que vivió el Ecuador a finales de los noventa; preámbulos, del derrocamiento de Jamil Mahuad el 21 de enero del 2000.

El segundo capítulo, *“Procesos de cambio en la educación y entrenamiento militar, ejecutados en la década de los noventa, en respuesta a los procesos sociales -*

militares - políticos - económicos, vividos desde 1990 en el Ecuador"; capítulo en el cual, se analizará la influencia de los aspectos sociales, militares, políticos, económicos y tecnológicos, en la nueva educación militar; basada en la profesionalización de sus miembros y orientada a la ejecución de "planes y programas de apoyo al desarrollo", en función de las relaciones civiles-militares. Además, se estudiará como influenciaron en los procesos de formación académica de los miembros de las Fuerzas Armadas el nacionalismo, el militarismo y el nuevo militarismo, encuadrados en los enfoques conceptuales de la nación y su seguridad.

El tercer capítulo, *"La revuelta militar del 21 de enero del 2000, motivaciones y protagonistas, primeras acciones, desarrollo de los acontecimientos y desenlace"*; capítulo en el cual, se analizará las motivaciones, y, se presentará a los verdaderos protagonistas de la sublevación militar del 21 de enero del 2000. Además, se narrará las primeras acciones, los hechos acaecidos durante la sublevación militar de los oficiales subalternos de las Fuerzas Armadas del Ecuador, y, desenlace de la sublevación, el 21 de enero del 2000.

Capítulo primero:

Ecuador en década de los 90: procesos sociales - militares - políticos - económicos

Los cambios políticos en la última década del siglo XX (1990 – 2000) y sus consecuencias serán analizados, sistematizando los estudios disponibles sobre liberalismo, política de la cultura y reforma institucional del Ecuador (Andrade 2009); nos centraremos especialmente, en los antecedentes socio-político-económicos de la revuelta militar de enero del 2000, con especial atención a: los primeros levantamientos indígenas de “1990, 1992 y 1994”, el conflicto bélico del Alto Cenepa entre Ecuador y Perú, la crisis institucional política del Ecuador evidenciada durante el golpe de Estado de febrero de 1997 que dio como resultado la instauración de un gobierno interino hasta 1998 (Andrade 2009), la negociación territorial y firma de la paz con el Perú, el salvataje bancario y creación de la Agencia de Garantía de Depósitos, el feriado Bancario y congelamiento de los depósitos de los cuenta-ahorristas, y, la dolarización.

Esta realidad del Ecuador, vivida en los años noventa, nos permitirá determinar las razones por las cuales los oficiales del Ejército alumnos de la Escuela Politécnica del Ejército, en conjunción con el pueblo indígena y la sociedad civil, ejecutaron luego de una década de luchas sociales e inestabilidad política, la toma del Congreso Nacional del Ecuador en enero del 2000, en clara contraposición al poder político y el Alto Mando militar.

Para ello; revisaremos en resumen la historia contemporánea del Ecuador de una manera cronológica (1990 - 2000), segmentada ésta en cuatro períodos:

- Primer período, enero 1990 – julio 1992: Momento histórico en que reaparecieron los movimientos indígenas, después de medio siglo, protagonizando luchas sociales y las primeras movilizaciones indígenas, durante el gobierno del Dr. Rodrigo Borja Cevallos; en su orden, las movilizaciones de junio de 1990 evidenciadas en el primer levantamiento indígena nacional denominado “levantamiento del Inti Raimy”, y, en abril de 1992 la marcha indígena denominadas “Por los territorios (la caminata)” (Porras Velasco 2005).

- Segundo período, agosto 1992 – julio 1996: Etapa de nuestra historia caracterizada por una inestabilidad política y el desarrollo del conflicto bélico entre Ecuador y Perú.

En este período, el Arq. Sixto Durán Ballén asume la Presidencia de la República en agosto de 1992, luego de ganar las elecciones representando al partido de Unidad Republicana, con una orientación ideológica neoliberal.

Durante ésta fase de aplicación de un modelo neoliberal moderado, los movimientos indígenas y sociales también generaron protestas y levantamientos. La más emblemática fue la movilizaciones por los 500 años de resistencia indígena y protesta en contra de las celebraciones del V Centenario del Descubrimiento del América, de octubre de 1992 (Porrás Velasco 2005).

El movimiento indígena nuevamente rompe relaciones con el gobierno central en 1994, por la aprobación de la Ley Agraria, que proponía el libre mercado de tierras y la privatización de los recursos naturales (Lucas, Ecuador cara y cruz - Del levantamiento de los noventa a la Revolución Ciudadana 2015); generándose un nuevo levantamiento liderado por la CONAIE, que provocó movilizaciones y paralizaciones en toda la sierra ecuatoriana, en Junio de 1994, denominada “movilización por la vida”.

En medio de una inestabilidad política, el Ecuador tuvo que enfrentar el conflicto militar del Alto Cenepa contra el Perú. Las operaciones militares iniciaron a finales de 1994 y desembocaron en un conflicto bélico en los primeros meses de 1995.

La Guerra del Cenepa, marcó un antes y un después en la historia militar ecuatoriana, momento en el cual se evidenció el nacionalismo como una ideología de la nación y una motivación colectiva para despertar los sentimientos primordiales que ligaron a los ecuatorianos a todo lo que para ellos representaba la nación y la integridad territorial.

- Tercer período, agosto 1996 – julio 1998: Momento histórico en el cual se ejecuta el primer derrocamiento presidencial y se materializa un gobierno interino.

En este período, el líder populista Ab. Abdalá Bucaram, asume la presidencia en agosto de 1996, luego de ganar las elecciones representando al “Partido Roldosista Ecuatoriano” (PRE); su gobierno se caracterizó por mantener un discurso que confrontaba al pueblo contra la oligarquía, aunque su proyecto

económico iba orientado a profundizar las propuestas neoliberales de su antecesor Sixto Durán y el establecimiento de un sistema monetario de convertibilidad.

Ante esa dicotomía entre el discurso y su modelo económico; el movimiento indígena, los sindicatos, estudiantes y el pueblo en general, declaran su rechazo al gobierno generando movilizaciones y acciones de hecho en febrero de 1997, mismas que desembocaron en la caída del gobierno de Abdala Bucaram y en el establecimiento de la Asamblea Constituyente del Pueblo (Porrás Velasco 2005).

El Congreso Nacional del Ecuador, aprovechando la convulsión social y sin respetar la sucesión presidencial, nombra a Fabián Alarcón como presidente interino, en reemplazo de Abdalá Bucaram quien escapó al exilio a Panamá, para evitar ser juzgado por la justicia del Ecuador.

- Cuarto período, agosto 1998 – enero 2000: Caracterizado por una crisis sistémica generalizada que desencadenaría en el segundo derrocamiento presidencial.

En este período, Jamil Mahuad triunfa en las elecciones presidenciales y asume el poder en agosto de 1998, representando al partido Democracia Popular, con una propuesta de gobierno orientado a consolidar un programa neoliberal moderno (Ramírez Gallegos y Ramírez, La estampida migratoria ecuatoriana: crisis, redes transnacionales, y repertorios de acción migratoria 2005).

Durante el período de gobierno de Jamil Mahuad, podemos destacar los siguientes procesos: negociación territorial con el Perú y firma de la paz, salvataje bancario y creación de la Agencia de Garantía de Depósitos, feriado bancario y congelamiento de los depósitos de los cuenta-ahorristas; procesos, que desembocaron en las movilizaciones nacionales contra el gobierno de Jamil Mahuad de marzo y julio de 1999, mismas que estuvieron acompañadas de levantamientos indígenas y descontento social. Sin olvidar la última acción presidencial que sería el detonante para su derrocamiento, la dolarización oficial de la economía ecuatoriana en enero del 2000.

Durante este período se generó la peor crisis del Ecuador, como resultado del mal manejo económico y de la quiebra del sistema bancario; entre sus principales consecuencias se incluye la más grande estampida migratoria de la historia republicana del Ecuador, tratando de escapar de la pobreza y el desempleo.

Éstas son algunas de las principales motivaciones que incentivaron a los oficiales subalternos de las Fuerzas Armadas del Ecuador a revelarse contra el Alto Mando militar y el poder ejecutivo, el 21 de enero del 2000; acción que desembocaría en la tan anunciada sucesión presidencial maquinada por la derecha política ecuatoriana (Lucas, Ecuador cara y cruz - Del levantamiento de los noventa a la Revolución Ciudadana 2015).

1. Primer período, enero 1990 – julio 1992: primeras movilizaciones indígenas

Las movilizaciones indígenas en el Ecuador, históricamente no son exclusivas de la última década del siglo XX (Porrás Velasco 2005); pero es en los noventa, cuando el movimiento indígena ecuatoriano da inicio a un proceso de restauración y revalorización de su identidad, forjada en una resistencia de más de 500 años.

Quinientos años de resistencia, en los cuales podemos destacar las múltiples sublevaciones desde la época de la colonia; las primeras, durante el siglo XVI como acciones defensivas en contra de la conquista española, las siguientes en el siglo XVII en contra de los abusos de las instituciones coloniales, seguidas por las protestas en toda la zona andina en los años treinta del siglo XVIII contra de la hegemonía de la monarquía española.

Ya en el siglo XIX, pese haber sido los grupos campesinos e indios parte de las tropas independentistas, las élites criollas luego del triunfo y declaración de la independencia, traicionando la colaboración indígena, mantuvieron la misma sociedad estratificada de la colonia, pero través del Estado y la ideología de la iglesia. Acciones que a futuro incentivarían importantes rebeliones indias, como la liderada por Fernando Daquilema en 1871.

Desde ese momento y bajo la figura de Daquilema, los levantamientos indígenas en contra de los abusos fueron más frecuentes, llegando incluso al nivel de movilizaciones generalizadas en exigencia de la tan anhelada Reforma Agraria (Porrás Velasco 2005).

Dolores Cacuangó (mamá Dolores), ya en 1926 incitaba los levantamientos indígenas y la rebelión popular en Cayambe; luego en 1930 en Pesillo y Moyurco, para posteriormente en 1931 con su compañero de lucha Jesús Gualavisí convocar al primer congreso de comunidades indígenas del Ecuador.

Dolores Cacuangó, el 28 de mayo de 1944 encabezó el asalto al cuartel de carabineros de Cayambe; esta y otras acciones, mostraban su bravura y sus características de lideresa aguerrida, heredera de la sangre Kayambi y representante de la resistencia del pueblo indígena, siguiendo el ejemplo de Fernando Daquilema.

Por otro lado hay que resaltar que el movimiento indígena también tuvo injerencia en la nacionalización de las tierras de la Iglesia Católica, apoyada por la Revolución Liberal; estas tierras pasaron a formar parte del Estado, como activos de la Asistencia Social y luego en los años cincuenta del siglo XX se entregaron a organizaciones campesinas dentro del proceso de reforma agraria, como respuesta parcial ante las primeras movilizaciones indígenas que demandaban la propiedad de tierra para los campesinos y exigían educación para el pueblo indígena (Verdesoto Custode 2014).

En 1986 el movimiento indígena ecuatoriano, conforma la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), aglutinado a la CONFENIAE y la ECUARUNARI, para luego adherir a esta organización a muchas más agrupaciones que antes no apoyaban a la organización indígena por considerarle afín a ciertos partidos políticos (Porrás Velasco 2005).

En 1990, el movimiento indígena agrupado en la CONAIE, marca una presencia pública importante en el Ecuador al organizar y liderar el primer levantamiento indio nacional.

Las movilizaciones y acciones tomadas por el pueblo indígena a inicios de la década de los noventa, constituyó una nueva expresión de la reivindicación indígena en la sociedad ecuatoriana y marco su presencia en el escenario político del Ecuador (Porrás Velasco 2005).

1.1.Movilizaciones de 1990 y el primer levantamiento indígena nacional

“Levantamiento del Inti Raimy”

A éstas movilizaciones de los años noventa, especialmente la denominada “levantamiento del Inti Raymi”, autores como (Porrás Velasco, Angélica X.), académicos como (Becker, Marc.) y otros analistas, la han calificada como la primera acción que marcó la presencia del movimiento indígena en el espacio político ecuatoriano.

La primera acción indígena en la década de los noventa se registra el 25 de abril de 1990, cuando la CONAIE en Asamblea Nacional y con apoyo de todas sus filiales, en la ciudad de Pujilí Provincia de Cotopaxi, acuerdan el “Levantamiento Indígena Nacional”, a ejecutarse los días 4, 5 y 6 de junio de 1990 (Porrás Velasco 2005). Este levantamiento se ejecutaría para exigir la solución a los conflictos de tierras en las provincias de: Imbabura, Cotopaxi Bolívar y Chimborazo; como también: para exigir la declaratoria de Estado Plurinacional, reformas de varias leyes y exoneraciones tributarias en beneficio de las organizaciones y comunidades indígenas (Porrás Velasco 2005).

El 19 de mayo de 1990, en Otavalo provincia de Imbabura, la población indígena de San Pablo, se toman la hacienda “La Clementina”.

Acto seguido, 28 de mayo de 1990, el pueblo indígena representado por la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), ECUARUNARI (Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador) y otras organizaciones de la sociedad civil como la CEDHU (Comisión Ecuémica de Derechos Humanos), ejecutan la toma de la iglesia de Santo Domingo, con varios petitorios a la Presidencia de la República del Ecuador, representada por el Dr. Rodrigo Borja Cevallos; entre estos: las peticiones ya consensuadas en la Asamblea Nacional de Pujilí, demandas de apoyo al sector agrícola, asignación de recursos económicos para la educación, entre otros...

El gobierno del Dr. Rodrigo Borja Cevallos no cedió posiciones y más bien declaró que no negociaría, mientras no declinen las acciones tomadas por dichas organizaciones; acto que generó la ratificación y ejecución de la convocatoria al levantamiento indígena nacional, acordado por la CONAIE, representada por Luis Macas, en la Asamblea Nacional de Pujilí, para 4 de junio de 1990.

El 4 de julio de 1990, marca un antes y un después para la interculturalidad ecuatoriana; nace el concepto de estado plurinacional mediante la lucha en las carreteras de la serranía por parte del pueblo indígena, siguiendo el ejemplo de su líder y lideresas históricas: Fernando Daquilema, Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña.

El levantamiento del Inti Raymi, denominado así por la cercanía al solsticio de invierno, período de tiempo en el cual de acuerdo a la cosmovisión indígena se celebra las “fiestas del sol” en varias poblaciones de la serranía ecuatoriana y de la región andina, constituyó el ingreso de las organizaciones indígenas en la política nacional, permitiendo que la población mestiza y las élites de la zona urbana, tomaran conciencia de que compartían el espacio nacional con el pueblo indígena.

Esta convocatoria a un levantamiento indígena, generó medidas de hecho en varias provincias de la sierra, iniciando el 5 de junio en Imbabura, al ejecutarse movilizaciones especialmente en el cantón Otavalo, las mismas que generaron bloqueos de las rutas de comunicación entre Otavalo-Cayambe-Tabacundo; especialmente la vía panamericana.

Mientras en Pichincha, específicamente en la ciudad de Quito, se mantenía tomada la iglesia de Santo Domingo por los miembros de la Coordinadora de Movimientos de Tierras.

En Cotopaxi, se evidenció un cierre total de las vías y la Policía Nacional repelió una marcha de aproximadamente tres mil indígenas, mientras en Tungurahua las organizaciones indígenas se preparaban para subsiguientes acciones de hecho a ejecutarse los siguientes días.

En Chimborazo, se registraron hechos de violencia; provincia en la cual, durante el transcurso de la movilización por la agresividad de las manifestaciones y de las acciones antimotines ejecutadas por el ejército y la policía, murió el dirigente indígena Oswaldo Cuvi Paguay, representante de la comunidad de Gatazo Grande. El movimiento indígena en represalia capturó a 14 policías y 16 militares, los mismos que fueron trasladados a la comunidad de Achupallas.

En Bolívar, el movimiento indígena se tomó la capital de la provincia Guaranda, mientras en Cañar y Azuay se evidenció cierres de carreteras.
(Porras Velasco 2005)

El 6 de junio en Tungurahua, luego de ejecutar bloqueos de vías en el primer día de manifestaciones (5 de junio), aproximadamente diez mil indígenas protagonizaron una marcha por la capital de la provincia, generando saqueos, en locales especialmente de venta de alimentos en Ambato (Porras Velasco 2005).

El gobierno de Rodrigo Borja, el 6 de junio de 1990, ante la presión del movimiento indígena, que con sus acciones de hecho mantenía bloqueado gran parte del país; anuncia el inicio de las conversaciones. Ante esta decisión presidencial, los indígenas que mantenían tomada la iglesia de Santo Domingo abandonan dicho predio patrimonial y liberaron en la provincia de Chimborazo a los militares y policías que se les mantenía secuestrados en la localidad de Achupallas.

El 7 de junio en Cotopaxi, el movimiento indígena provincial, ejecuta una concentración con aproximadamente veinte mil personas; acción que obliga a la Gobernadora de la Provincia a firmar un acuerdo con los dirigentes del movimiento, denominado “Mandato por la defensa de la vida y por los derechos de los indígenas” (Porras Velasco 2005).

El 8 de junio en Chimborazo, alrededor de treinta mil indígenas marcharon por la ciudad de Riobamba, con el propósito de despedir a su compañero indígena Oswaldo Cuvi, fallecido durante las manifestaciones y la represión de la fuerza pública, el 5 de junio (Porras Velasco 2005).

El 6 de junio de 1990 el Gobierno anuncia el inicio de las conversaciones, pero los diálogos con mediación de la Iglesia Católica se desarrollaron con muchos problemas

y confrontaciones, lo cual no permitió que progresen las negociaciones y se concreten acuerdos; rompiéndose el proceso de negociación en agosto de 1990.

El principal motivo para la disolución de las negociaciones, fue la presentación de la propuesta de la “Organización de Pueblos Indígenas del Pastaza” (OPIP) y de la “Confederación de Nacionalidades Indígenas Amazónicas del Ecuador” (CONFENIAE) con el respaldo de la CONAIE, denominada “Acuerdo sobre el Derecho Territorial de los pueblos Kichwa, Shuar y Achuar de la Provincia de Pastaza a suscribirse con el Estado ecuatoriano”, misma que planteaba que el Estado transfiera el control del 90% de las tierras de la Provincia de Pastaza (Becker 2015), incluidos todos sus recursos e infraestructura (pozos petroleros), a las comunidades indígenas de dicha región; además, se proponía la autodeterminación y gobierno autónomo de las nacionalidades Kichwa, Shuar y Achar (Porrás Velasco 2005).

El levantamiento del Inti Raymi dio la pauta para las futuras movilizaciones y levantamientos indígenas como es el caso de las marchas indígenas denominadas “Por los territorios (la caminata)” de abril de 1992 y las movilizaciones relacionadas con los “500 años de resistencia indígena” en octubre del mismo año.

1.2. Marcha indígena por los territorios denominada “la caminata”, abril de 1992

Dos años después del levantamiento del Inti Raimy y ante el rechazo frontal del Gobierno de Rodrigo Borja, a la propuesta presentada por la Organización de Pueblos Indígenas del Pastaza (OPIP), en agosto de 1990, en la que se planteaba que el Estado Ecuatoriano transfiera el control del 90% de las tierras de la Provincia de Pastaza, a las comunidades indígenas de dicha región, generando de esta manera una suerte de desmembración territorial y la creación de un Estado paralelo (Becker 2015); la OPIP, en asamblea extraordinaria ejecutada el 2 y 3 de marzo de 1992, acuerdan realizar una gran marcha a Quito para obligar al Gobierno a legalizar sus territorios y el reconocimiento constitucional de un “Estado plurinacional, pluricultural y multiétnico” (Porrás Velasco 2005).

Las comunidades amazónicas de Pastaza se organizan y movilizan desde sus territorios, desde inicios de abril del 2009; pero emprenden “La Caminata” desde la ciudad del Puyo con destino a Quito, el 11 de abril de 1992.

La Movilización de los pueblos amazónicos inició con dos mil indígenas de varias nacionalidades, entre ellas: Shuar, Achar y Kichwa. El 21 de abril de 1992, durante la

marcha se une la comunidad Salasaca de la Sierra; llegando a Quito más de cinco mil indígenas, a partir del 23 de abril de 1992.

Los manifestantes armaron su campamento en el espacio autorizado por el Municipio de Quito; el parque “El Ejido”.

El Gobierno utilizó una estrategia de engaño y distracción, para mantener tranquilos a los indígenas que se encontraban en Quito y también para retrasar los diálogos; el Presidente Rodrigo Borja, desarrolló un discurso que afirmaba estar de acuerdo con las exigencias de los marchantes, pero al final negó la entrega de los títulos de propiedad de la tierra, aduciendo motivos de Seguridad Nacional, al estar dichos territorios en la frontera no delimitada con el Perú.

Ante esta posición gubernamental, los movimientos indígenas amazónicos amenazaron con radicalizar su protesta, para lo cual hicieron pública la decisión de tomarse las instalaciones del Ministerio de Bienestar Social y así presionar para que el gobierno de paso a las exigencias de los indígenas amazónicos.

El Gobierno Nacional ante las amenazas de radicalizar las protestas, cedió parcialmente a las demandas de la OPIP, el 6 de mayo de 1992; adjudicando una concesión territorial de un millón de hectáreas a las nacionalidades pertenecientes a la Organización de Pueblos Indígenas del Pastaza, con el condicionante que los derechos del subsuelo y sus recursos naturales se mantendrán bajo la prerrogativa del Estado ecuatoriano (Becker 2015).

Los indígenas amazónicos retornaron a la ciudad del Puyo el 14 de mayo de 1992, para celebrar la victoria alcanzada ante el Gobierno, al haber obtenido el 65% por ciento del territorio solicitado inicialmente en el *“Acuerdo sobre el Derecho Territorial de los pueblos Kichwa, Shuar y Achuar de la Provincia de Pastaza a suscribirse con el Estado ecuatoriano”*, de junio de 1990.

Aunque fue una aceptación parcial de las demandas del pueblo indígena amazónico por parte del Gobierno, la movilización denominada “La Caminata”, es considerada por varios analistas y académicos como una de las acciones más exitosas que ha ejecutado el movimiento indígena.

2. Segundo período, agosto 1992 – julio 1996: inestabilidad política y Guerra del Cenepa

La derecha neoliberal representada por el Arq. Sixto Durán Ballén, asume el poder en agosto de 1992; su gobierno que se caracterizó por un distanciamiento del Estado de los escenarios políticos, tanto en el plano nacional como en el contexto internacional.

En ésta administración, como lo manifiesta (Lucas, Kintto), en su obra *“Ecuador Cara y Cruz, del levantamiento de los 90 a la Revolución Ciudadana”*, se crearon las bases para la futura crisis financiera del Ecuador del año 1999, al aprobar la “Ley General de Instituciones del Sistema financiero”, que reemplazó a la “Ley General de Bancos de 1974”, misma que si mantenía ciertos controles sobre los bancos y entidades financieras (Lucas, Ecuador cara y cruz - Del levantamiento de los noventa a la Revolución Ciudadana 2015).

La nueva ley que regularía desde mayo de 1994 a las instituciones del Sistema Financiero Nacional, permitía la libre circulación de capitales y restringía el control de la “Supertintendencia de Bancos y Seguros” a dichas entidades; generando una suerte de autoregulación, de la cual se aprovecharon los dueños y administradores de los bancos privados, para otorgar de créditos vinculados en grandes cantidades, lo cual sería una de las principales causas de la crisis bancaria y financiera, de finales de los años noventa (Lucas, Ecuador cara y cruz - Del levantamiento de los noventa a la Revolución Ciudadana 2015).

En el campo internacional, el gobierno del Arq. Sixto Durán Ballén abandonó el proceso de negociación limítrofe con el Perú; lo cual contribuyó en parte para que en los primeros meses de 1995 se agudice el conflicto armado, en la zona no delimitada, desembocándose en la “Guerra del Cenepa”.

El gobierno de Durán Ballén, mostró una clara tendencia neo-liberal; en el ámbito económico, logró evadir los impactos de la crisis internacional y las cifras macroeconómicas del Ecuador mostraron datos favorables, reflejándose un crecimiento del producto interno bruto, reducción de la tasa de inflación, una balanza comercial positiva y una reserva monetaria holgada. Pese a ello, se mantuvieron los niveles de pobreza, se contrajo el mercado y se disminuyó la demanda de trabajo (Verdesoto Custode 2014).

Los movimientos sociales e indígenas mantuvieron su protesta; actitud que se reflejó especialmente en las acciones tomadas por el movimiento indígena en rechazo a los festejos de los quinientos años del descubrimiento de América, en octubre de 1992; y, en el levantamiento indígena denominada “la movilización por la vida”, contra la aprobación de la Ley Agraria, en junio de 1994, que, de acuerdo a la percepción del movimiento indígena, prácticamente sepultaba a la reforma agraria.

2.1.Movilizaciones por los 500 años de resistencia, en octubre de 1992

El 4 de octubre del 1992, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), hace público su decisión de ejecutar una marcha indígena hacia Quito, que llegaría el 12 de octubre del 1992; ésta marcha era parte de las acciones de protesta contra los festejos de los 500 años de conquista española y como muestra de la resistencia indígena ante 500 años de opresión.

No todas las organizaciones indígenas apoyaron a la decisión de la CONAIE, como es el caso de la organización de indígenas evangélicos del Ecuador (FEINE) y la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas (FENOC); pese a ello, esta convocatoria a un levantamiento indígena, generó medidas de hecho en varias provincias de la sierra, es así que:

El 9 de octubre del 1992, en las ciudades como también en carreteras de toda la Sierra norte y centro del país, se registraron cierres, bloqueos y acciones de hecho, generando desabastecimiento en las principales ciudades.

En Imbabura, se realizó una marcha para solicitar el apoyo del gobierno y la medicación del gobernador de la provincia en los litigios de tierras que mantenían las comunidades indígenas en dicha provincia.

A la par, en Cotopaxi doscientos indígenas se preparaban para movilizarse a Quito, para asistir como delegados a la marcha y concentración indígena del 12 de octubre.

El mismo día, las comunidades indígenas del Tungurahua ejecutan cierres de carreteras y una marcha en el cantón Pillaro en homenaje a Rumiñahui, considerado el símbolo de la resistencia indígena ante la conquista española; mientras que en Chimborazo se mantiene bloqueos de carreteras y en Cañar los indígenas se concentraron en vigilia en la catedral

El 10 y 11 de octubre del 1992, en las carreteras a lo largo de toda la Sierra del país se ejecutaron cierres, bloqueos y marchas, por parte de los pobladores de las comunidades indígenas.

El 12 de octubre del 1992, en Pichincha, aproximadamente diez mil indígenas de todas las comunidades y organizaciones del país, agrupadas en la CONAIE, llegaron a la ciudad de Quito, para concentrarse en la Plaza de San Francisco y manifestar su rechazo a las celebraciones de los 500 años del “descubrimiento de América”. Los dirigentes indígenas en sendos discursos manifestaban el rechazo al colonialismo y la discriminación predominante en América Latina.

A la par en Azuay, aproximadamente cinco mil indígenas marcharon por la ciudad de Cuenca y se concentraron en el parque Calderón; lanzando proclamas de protesta similares a las emitidas por la dirigencia indígena de la CONAIE en Quito.

En Loja se mantuvieron las manifestaciones hasta el 14 de octubre, mientras que los indígenas representados por la CONAIE y el Gobierno Nacional, anunciaban el inicio de diálogos.

El mismo 14 de octubre de 1992, los grupos movilizados dan por terminado sus acciones de hecho y sus dirigentes inician una nueva negociación con las autoridades nacionales. Proceso que no daría ningún logro positivo para los pueblos y comunidades indígenas, dejando nuevamente pendientes asuntos importantes, como: por ejemplo, las pretensiones de los grupos terratenientes de la derecha para normar un libre mercado de tierras y las privatizaciones de los recursos naturales; cuestiones que generarían futuros rompimientos de las relaciones entre el poder estatal y los movimientos indígenas en junio de 1994.

2.2. Levantamiento indígena contra la aprobación de la Ley Agraria denominada “Movilización por la vida”, en junio de 1994

La aprobación de la Ley Agraria en el mes de junio de 1994, que recoge las tesis de los grupos de terratenientes, secundadas por los partidos políticos de derecha; legaliza el libre mercado de tierras y la privatización de los recursos naturales, siendo el agua uno de ellos. Como respuesta los movimientos indígenas liderados por la CONAIE, toman la decisión de convocar a una movilización el 15 de junio de 1994, denominada como “Movilización por la vida”.

El levantamiento se desarrolla desde el 15 hasta el 24 de junio de 1994; los pueblos y nacionalidades indígenas utilizan la misma táctica de bloqueo de vías, aplicada en las anteriores acciones de hecho ejecutadas en 1990 y 1992, generando desabastecimientos de productos de primera necesidad, combustibles e inclusive gas de uso doméstico. En respuesta, el Gobierno Nacional decretó Estado de Emergencia, amenazando al movimiento indígena con ejecutar operaciones militares para terminar con las protestas (Becker 2015).

El Gobierno, para evitar una mayor radicalización de las acciones emprendidas por el movimiento indígena, decide retroceder en las decisiones tomadas e invita a un diálogo con la dirigencia indígena.

Los indígenas representados por la CONAIE y el Gobierno Nacional, anuncian el inicio de los diálogos y el 24 de octubre de 1992 dan por terminadas sus acciones de hecho, luego de conseguir que se modifiquen los términos de la Ley Agraria, tomando en cuenta las reivindicaciones del pueblo indígena.

Pese a las protestas que paralizaron al Ecuador por diez días y al proceso de diálogo iniciado con el Gobierno; el presidente Sixto Durán Ballén promulga la denominada “Ley de Desarrollo Agrario”, que elimina el “Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización” IERAC y en su reemplazo crea mediante ley, el “Instituto Nacional de Desarrollo Agrario” INDA.

2.3. Guerra del Cenepa, en enero y febrero de 1995

El Gobierno de Sixto Durán Ballén, enfrentaba una elevada conflictividad social y estaba disminuido políticamente por la pugna desarrollada con el Poder Legislativo, luego del rechazo de los ecuatorianos a las propuestas planteadas en la Consulta Popular celebrada en 1994, en la que esbozaba reformas constitucionales que le permitan al Poder Ejecutivo tener la capacidad de disolver el Congreso Nacional y así fortalecer el poder presidencial para cuando tenga que medir fuerzas con el Poder Legislativo.

El conflicto bélico con el Perú, en enero y febrero de 1995, fue la oportunidad que aprovechó Sixto Durán Ballén para recuperar su imagen de estadista; valiéndose del prestigio que tenían las Fuerzas Armadas y el apoyo brindado por todos los ciudadanos ecuatorianos, a los soldados que se encontraban desplegados en toda la frontera sur, dispuestos a entregar sus vidas, para defender la integridad territorial.

La situación del país en los meses anteriores al conflicto era de una elevada inestabilidad política y social, que amenazaba convertirse en una crisis generalizada; situación que fue provocada por la pérdida de legitimidad del poder Ejecutivo y la pugna con el Poder Legislativo.

La Guerra del Cenepa, generó un efecto de distracción para la ciudadanía, ante la realidad política del país y sus conflictos al interno de los poderes y entre los poderes del Estado.

Las Fuerzas Armadas, al contrario de los poderes del Estado; demostraron ser la institución con mayor credibilidad ante la ciudadanía y la institución más fortalecida por la democracia (Verdesoto Custode 2014).

El conflicto bélico y las Fuerzas Armadas, lograron lo que todos los gobiernos desde el inicio de la democracia a finales de los setenta, no lo lograron; unir a los mestizos

e indios, con un solo propósito: lealtad con el territorio étnico-cultural. Durante los meses del conflicto, los ecuatorianos olvidaron sus diferencias étnicas, culturales y sociales; desplegando un sentimiento nacional popular de apoyo absoluto a sus Fuerzas Armadas.

Las Fuerzas Armadas en la Guerra del Cenepa, registraron los frutos del cambio en su doctrina militar y del proceso de acercamiento con la sociedad civil mediante la aplicación de las políticas de apoyo al desarrollo; es decir, su formación militar en base a la nueva doctrina de relaciones cívico-militares que prioriza el trabajo social con la comunidad, bajo el eslogan: “El ejército y su pueblo”, se vio reflejado en el apoyo total de la ciudadanía, durante los meses del conflicto armado.

Los cambios en los procesos de capacitación de las Fuerzas Armadas, implementados a partir de los años noventa en los institutos de formación militar y la preparación profesional de los oficiales y tropa, permitieron que los soldados del Ecuador estén preparados para defender la integridad territorial y triunfar en la Guerra del Cenepa; permitiendo desde aquel momento histórico, que los ciudadanos ecuatorianos, dejemos de percibirnos como eternos perdedores y podamos empezar a pensar como triunfadores y herederos de la “Generación de la Victoria”.

Durante los meses del conflicto militar, el término “soberanía” fue utilizado por las dos fuerzas en combate. Las fuerzas peruanas y su gobierno, para justificar la agresión; y, por otro lado las Fuerzas Armadas ecuatorianas, para justificar la resistencia ante los ataques peruanos (Lucas, Ecuador cara y cruz - Del levantamiento de los noventa a la Revolución Ciudadana 2015).

Como dice el académico, (Verdesoto, Luis); *“las guerras dejan secuelas importantes en los actores. Mientras en los ganadores prima la cohesión, en los perdedores, invade la crisis”* (Verdesoto Custode 2014). Sin embargo, en el caso de Ecuatoriano fue diferente; ya que, pese ser el triunfador en las operaciones militares, la crisis política y social que prevalecía desde antes del conflicto, era tan grande, que solo bastó el fin de la guerra y la demovilización de las Fuerzas Armadas, para que nuevamente resurja las dificultades, y, el poder político actúe mientras el pueblo festejaba la victoria.

Mientras el presidente Arq. Sixto Duran Ballén manejaba el discurso de “ni un paso atrás”, su vicepresidente ejecutaba manibras políticas para instituir el modelo neoliberal en el Ecuador, de manera que la post-guerra sea el escudo de las privatizaciones. Todo esto a puertas del proceso electoral de 1996.

3. Tercer período, agosto 1996 – julio 1998: Primer derrocamiento presidencial, gobierno interino y Asamblea Constituyente del Pueblo

El abogado Abdalá Bucaram, luego de ganar las elecciones presidenciales, se posesiona en agosto de 1996; al poco tiempo su mandato generó una aguda crisis de gobernabilidad al desestructurar las instituciones del sistema político, generando una crisis nacional producto de su irracionalidad y mala gestión.

Fue un gobierno corto, que priorizó la corrupción, el clientelismo y el autoritarismo (Porrás Velasco 2005); causales para que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la Coordinadora de Movimientos Sociales y el Frente Unitario de Trabajadores, convoquen a la movilización nacional de febrero de 1997.

3.1. Movilizaciones y caída del gobierno de Abdalá Bucaram, en febrero de 1997

El autoritarismo, ineficiencia, corrupción y nepotismo; fueron las características que causaron un desgaste acelerado del gobierno populista de Abdalá Bucaram. A enero de 1997, según las encuestas, tenía un 92% de rechazo ciudadano.

En menos de seis meses de ejercicio presidencial y en contraposición a su discurso de “ayuda a los pobres”, el presidente ejecutó medidas neoliberales, como el aumento del costo de pasajes del transporte público y del gas de uso domiciliario; medidas que, en conjunción con las características anárquicas y desatinadas del gobierno, serían los detonantes, para que el país entero levante su voz de protesta.

El 5 de febrero de 1997, las calles y espacios públicos eran tomados por ciudadanos de todo el país. El pueblo indígena y mestizo, representado por los trabajadores públicos y privados, sindicatos, cámaras de la industria, partidos políticos de oposición, organizaciones sociales e inclusive banqueros y cámaras de comercio, se unieron para exigir la salida del presidente de la República.

El país entero se sumó a la convocatoria al “Paro Cívico Nacional”, ejecutada por: la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), la Coordinadora de Movimientos Sociales, Frente Unitario de Trabajadores (FUT), entre otras organizaciones de la sociedad civil; que con demostraciones en las calles de todas las ciudades, bloqueos en las carreteras ejecutados por el pueblo indígena y toma de edificios estatales por los movimientos populares, activaron las denominadas “Jornadas Cívicas del Protesta Nacional por la Dignidad”.

Como parte de las “Jornadas Cívicas de Protesta Nacional por la Dignidad”, aproximadamente cien mil manifestantes marcharon al Palacio de Gobierno; mismos que fueron reprimidos por la Fuerza Pública en cumpliendo las órdenes del Gobierno. Mientras en toda la ciudad de Quito, más de un millón de personas participaban de cacerolazos en todos los barrios y a la par las vías especialmente de la Sierra eran bloqueadas por el pueblo indígena; todo esto en rechazo al Gobierno y exigiendo la salida del Presidente de la República.

Ante la magnitud del repudio popular, Abdalá Bucarán y su círculo de colaboradores, deciden abandonar el Palacio de Carondelet en la noche del 5 de febrero y viajar a Guayaquil; desde donde Bucaram asegura seguir siendo el Presidente de la República y alega que no ha abandonado el poder.

El 6 de febrero de 1997, ante la presión ciudadana, el Congreso Nacional destituye al Presidente Abdalá Bucaram, alegando ‘incapacidad mental para gobernar’ y aplicando el artículo cien de la Constitución de la República.

Con la destitución presidencial, aprobada por mayoría simple de 44 votos, el Congreso Nacional nombra como Presidente Interino al que hasta ese momento era Presidente del Congreso Nacional, el abogado Fabián Ernesto Alarcón Rivera (Lucas, Ecuador cara y cruz - Del levantamiento de los noventa a la Revolución Ciudadana 2015).

Luego del dictamen del Congreso Nacional, tres actores batallaban por la Presidencia de la República: Abdala Bucaram, que no aceptaba la decisión legislativa y aseguraba que seguía siendo el Presidente, la Vicepresidente Rosalía Arteaga, reclamaba la sucesión presidencial como lo dictaba la Constitución, y, Fabián Alarcón, se aferraba a la decisión del Congreso Nacional.

Nuevamente las Fuerzas Armadas actúan como árbitro, ante esta disputa; pero el Alto Mando militar al apoyar a uno de los tres actores políticos que luchaban por la Presidencia de la República, corrían el riesgo de generar una división interna dentro de sus filas y también generar la pérdida de prestigio ganado ante el pueblo ecuatoriano, en la gesta del Cenepa de 1995. El Jefe del Comando Conjunto, General de Ejército Paco Moncayo Gallegos, en nombre de la institución militar emite un pronunciamiento público, en el cual manifiesta: que “Las Fuerzas Armadas del Ecuador no podían estar con ninguna de las partes, ni asumir el poder, porque sería un Golpe de Estado” (Lucas, Ecuador cara y cruz - Del levantamiento de los noventa a la Revolución Ciudadana 2015).

Las Fuerzas Armadas, al no respaldar a ninguno de los actores que luchaban por la presidencia de la República, indirectamente retiran el apoyo al presidente Abdalá

Bucarán; ratificando su rol de árbitro ante disputas políticas y porque no decirlo marcando el rumbo en la crisis del Estado.

Ante el pronunciamiento de Fuerzas Armadas, los actores políticos acuerdan, encargar la presidencia por un día, a la Vicepresidenta Rosalía Arteaga y así sortear el vacío legal de la sucesión presidencial, que dictaba la Constitución; luego de esta jugada jurídica constitucional, ejecutada por el poder político, el Congreso Nacional pudo ratificar como Presidente Interino a Fabián Alarcón, por un lapso de 18 meses, luego de los cuales se llamaría a elecciones presidenciales (Porrás Velasco 2005).

3.2. Gobierno interino de Fabián Alarcón

Fabián Alarcón del partido “Frente Radical Alfarista”, luego de la crisis política que llevó a la destitución de Abdalá Bucarán, es posesionado como Presidente Interino del Ecuador, por designación del Congreso Nacional, el 11 de febrero de 1997.

Los rendimientos de la gestión económica durante este gobierno, estuvieron atados a una insuficiente voluntad del Ejecutivo para mantener una política fiscal coherente y así lograr una gestión económica ordenada (Ramírez Gallegos y Ramírez, La estampida migratoria ecuatoriana: crisis, redes transnacionales, y repertorios de acción migratoria 2005).

El gobierno de Fabián Alarcón estuvo caracterizado por un nulo apoyo del poder legislativo a su gestión, que unido a los bajos rendimientos económicos sus primeros meses de interinazgo, hicieron que el año 1997 cierre con cifras macroeconómicas poco alentadoras: inflación del 30.7%, decrecimiento de las reservas internacionales, incremento del crédito interno neto del sector público y un déficit fiscal del 2.4% del PIB (Araujo 1999).

Siguiendo la cronología de los hechos, mientras en 1997 se trataba de re-institucionalizar el Estado; por otro lado, se iniciaba una de las más execrables crisis bancarias, como resultado de la falta de control por parte de la Superintendencia de Bancos del Ecuador, en el otorgamiento de créditos vinculados a compañías fantasmas, que resultaron ser propiedad de los mismos banqueros o de sus familiares. Afectando con ello a miles de depositantes, que confiaron en el sistema bancario nacional; este fraudulento fenómeno financiero acarreó serias consecuencias políticas, económicas y sociales (Mendoza Calamarco 2002).

En el último semestre de 1997 y a inicios del año 1998, comenzó la etapa más crítica; el proceso de insolvencia de los bancos privados se intensificó en el periodo 1997-

1998 y alcanzó proporciones alarmantes en 1999, cuando la crisis bancaria afectó a un 40% el sistema financiero. Ante esta contingencia, el Estado ecuatoriano concedió auxilios financieros por un monto mayor a lo esperado, generando la mayor crisis financiera registrada en la historia republicana del Ecuador (Mendoza Calamarco 2002).

Los ofrecimientos y promesas del gobierno interino, solo quedaron en el discurso; Fabián Alarcón intentó alargar su período de gobierno, más tiempo de lo dispuesto por el Congreso Nacional, cuando fue nombrado presidente interino, como también pretendió no llamar a elecciones presidenciales anticipadas o convocar a una Asamblea Constituyente (Porrás Velasco 2005). En reemplazo de todo lo anterior, convocó una consulta popular, que se ejecutó en mayo de 1998, en la cual el pueblo ecuatoriano decidió ratificar lo actuado por el Congreso Nacional en 1997 y proceder a una convocatoria a Asamblea Nacional, con el exclusivo propósito de reformar la Constitución Política; propuesta que en las urnas tuvo el apoyo del 64 % de los votantes a nivel nacional.

Esto genera un nuevo conflicto político con los movimientos sociales e indígenas, ya que el acuerdo era una convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente, que redacte una nueva Constitución y no una Asamblea Nacional que solo reforme la Constitución vigente.

El incumplimiento de los acuerdos de febrero de 1997, provoca que la dirigencia indígena convoque a una nueva marcha en octubre de 1997 y decidan instalar de la denominada Asamblea Nacional Constituyente del Pueblo, el 12 de octubre de 1997 (Porrás Velasco 2005).

3.3. Asamblea Constituyente del Pueblo, en octubre de 1997; y, Asamblea Nacional Constituyente, en diciembre de 1997

La denominada Asamblea Constituyente del Pueblo, es una consecuencia directa de las Movilizaciones de febrero de 1997, en las cuales el movimiento indígena ecuatoriano y sus dirigentes asumen el rol de líderes de los sectores sociales e impulsan la idea que la organización de los sectores populares puede impulsar un proyecto alternativo de ejercicio de poder (Porrás Velasco 2005).

Por otro lado la Asamblea Nacional Constituyente, instalada en diciembre de 1997, tuvo como misión principal la reforma política del Ecuador, con el objetivo de establecer un nuevo modelo institucional capaz de lograr una transición a un modelo de desarrollo, para de esta manera mejorar la economía ecuatoriana en beneficio de la

sociedad y así evitar que la crisis institucional debilite los procesos económicos que pudiera desembocar en una crisis sistémica (Becker 2015).

3.3.1. Asamblea Constituyente del Pueblo

La llamada “Asamblea Constituyente del Pueblo”, se da como resultado del incumplimiento de los acuerdos generados luego de la destitución de Abdalá Bucaram y el nombramiento como presidente interino de Fabián Alarcón; acuerdos que fueron los condicionantes para el apoyo al gobierno interino por parte del movimiento indígena.

La “Asamblea Nacional Constituyente del Pueblo”, se auto convoca para el 12 de octubre de 1997 y ejecuta su primera reunión el 13 de octubre, con la participación de cuatrocientos sesenta asambleístas; motivados todos por la grave situación económica del país y la apreciación de que el poder gubernamental seguía marcado por actos de corrupción y quebrantaba continuamente las leyes establecidas en el marco jurídico ecuatoriano.

En las primeras de reuniones se recogieron las propuestas de todos los sectores auto-convocados; estas formulaciones serían analizadas y complementadas con nuevos aportes, en la segunda reunión a celebrarse entre el 21 y 23 de noviembre de 1997. El objetivo de la segunda reunión fue la elaboración de la propuesta que sería entregada a la Asamblea Nacional Constituyente el 9 de enero de 1998, misma que se instalaría a partir de diciembre de 1997 por mandato de la consulta popular.

3.2.2. Asamblea Nacional Constituyente

La Asamblea Nacional Constituyente se instaló en diciembre de 1997 con el propósito de crear una nueva estructura institucional la misma que permita al Estado ecuatoriano la estabilización de la economía y generar logros sociales de largo plazo; es decir, su misión principal era construir un modelo institucional que permita sostener un compromiso nacional contra la pobreza y dote de herramientas para una lucha abierta contra la corrupción y la impunidad (Verdesoto Custode 2014).

Pese a los loables propósitos y mandatos, sobre los cuales se desarrollaría la Asamblea Nacional Constituyente, la realidad fue diferente por la reiterada falta de consensos y el exceso de pragmatismo de los actores; evidenciándose durante el desarrollo de esta Asamblea una equilibrada correlación de fuerzas que impidió la existencia de una mayoría, además fue muy notorio la inexistencia de una agenda consensuada entre todos participantes.

Pese que una de las demandas principales de las organizaciones indígenas agremiadas en la CONAIE y representadas políticamente en la Asamblea Nacional Constituyente por Pachakutik, era la de incluir en el artículo primero de la Constitución la definición de Ecuador como un país plurinacional; éstas, no se concretaron, ya que el bloque de centro izquierda, al cual se encontraban adheridos los representantes del movimiento indígena, no lograron declarar al Ecuador como un Estado “*plurinacional y multiétnico*”, sino únicamente se lo reconoció al Estado ecuatoriano como “*pluricultural y multiétnico*”. Aspecto que se lo consideró como una victoria parcial del movimiento indígena ya que la intención de declarar al Ecuador como estado plurinacional seguiría siendo una meta difícil de alcanzar.

Los resultados en las elecciones presidenciales posteriores a la Asamblea Nacional Constituyente, en el año de 1998, fueron favorables a la fracción del partido “Democracia Popular” que no comulgaba con el segmento que había liderado la Asamblea Nacional Constituyente, desde diciembre de 1997, pese a pertenecer a la misma agrupación política, evidenciándose con este antecedente que la reforma política del Estado ecuatoriano seguía inconclusa.

4. Cuarto período, agosto 1998 – enero 2000: crisis y derrocamiento de Jamil Mahuad

Jorge Jamil Mahuad Witt, asume la Presidencia de la República del Ecuador, el 10 de agosto de 1998, con el patrocinio del partido de centro derecha “Democracia Popular-Unión Demócrata Cristiana”; partido que amalgamaba a la derecha de tendencia neo-conservadora de la costa, con la neoliberal de la sierra.

Jamil Mahuad, como resultado de la campaña electoral fortalecida por su imagen y gestión como alcalde de Quito, recibió el apoyo de la clase media, de tendencia política de centro izquierda; este apoyo y las alianzas ejecutadas, le permitieron triunfar en las elecciones presidenciales de 1998, en segunda vuelta electoral, ante el empresario guayaquileño Álvaro Novoa.

El 10 de agosto de 1998 asume el poder con una buena aceptación, generando en la sociedad ecuatoriana expectativas por las garantías que a este gobierno le daban la banca multilateral y el apoyo del gobierno de los Estados Unidos.

Poco tiempo después se vivió otra realidad, la población constató que era un gobierno que no tenía un programa estructurado hacia la liberalización y apertura, como

había ofrecido en campaña; más bien, se evidenció un liderazgo dubitativo y una alta dependencia del capital financiero (Verdesoto Custode 2014).

Jamil Mahuad, el tecnócrata graduado en Harvard, se rodeó de un gabinete con personas afines al sistema financiero privado, cuyo trabajo iba orientado a consolidar políticas de resguardo a la banca, encaminadas a un “salvataje bancario”; es decir, su objetivo principal era buscar salidas fácticas, para salvaguardar los intereses del capital financiero.

En resumen, los bancos vuelven a manejar los destinos del país, ya que el gobierno debía pagar los favores de campaña, especialmente al Banco del Progreso de Fernando Aspiazu, quien había financiado la campaña electoral del partido “Democracia Popular-Unión Demócrata Cristiana” y su candidato presidencial.

Jamil Mahuad, sin un programa estructurado y capturado por los poderes fácticos del capital financiero, durante sus primeros meses de gobierno se dedica al proceso de negociación territorial con el Perú, dejando en segundo plano temas prioritarios para el Estado, especialmente referentes al déficit fiscal. El descuido en el manejo fiscal por parte del Ejecutivo, durante los primeros meses de gobierno, genera un deterioro de la balanza de pagos, un tipo de cambio volátil y altas tasas de interés; factores que generarían un desequilibrio en el sistema financiero nacional (A. Pachano 2002).

4.1. Primeros meses de gobierno - negociación territorial con el Perú

La opinión pública orientó su atención en los primeros meses del gobierno de Jamil Mahuad, al proceso de negociación de la paz con el Perú, dándole una tregua al gobierno en el ámbito político.

Jamil Mahuad, en sus primeros meses de mandato centró sus esfuerzos en la negociación territorial con el Perú, olvidándose de la solución de problemas esenciales para el país, como déficit fiscal. El gobierno y su frente económico se dedicaron únicamente a aplicar soluciones superficiales como subterfugios contables, créditos de emisión y más endeudamiento; hechos que a futuro profundizarían la crisis fiscal, monetaria y financiera del Estado ecuatoriano (Ramírez Gallegos y Ramírez, La estampida migratoria ecuatoriana: crisis, redes transnacionales, y repertorios de acción migratoria 2005).

El 26 de octubre de 1998, luego de un proceso de negociaciones se suscribe el Acta de Brasilia, misma en la que se ratifica todos los puntos del Protocolo de Río de

Janeiro de 1942 y así se define la frontera entre Ecuador y Perú, en los territorios en disputa.

Acuerdo que no avaló la ciudadanía generando un descontento en los miembros de las Fuerzas Armadas del Ecuador y un rechazo al gobierno; sentimiento que meses después se vería reflejado en los hechos del 21 de enero del 2000, cuando los mandos medios y la tropa quitan el apoyo al presidente Jamil Mahuad y provocan su destitución.

4.2.Salvataje bancario y creación de la Agencia de Garantía de Depósitos

El gobierno de Jamil Mahuad, recién a inicios del año 1999 bajo la lupa del Fondo Monetario Internacional (FMI), logra entender que los problemas graves que tenía la economía ecuatoriana y necesitaban ser resueltos eran: la fragilidad del sistema financiero y la debilidad fiscal (Ramírez Gallegos y Ramírez, La estampida migratoria ecuatoriana: crisis, redes transnacionales, y repertorios de acción migratoria 2005). Ante esta premisa, el frente económico del gobierno de manera equivocada no puso límites a la ayuda por parte del Estado a los bancos en problemas; medida que también había sido tomada por gobiernos anteriores como es el caso del salvataje al Banco Continental en el año 1996.

Jamil Mahuad prefirió evadir la creación y aplicación de políticas de reformas financieras y más bien se centró en la aplicación de medidas de salvataje bancario, bajo la premisa de que se debía apalancar la confianza en el sistema financiero y así evitar el derrumbe económico y político del Estado (Verdesoto Custode 2014).

El proceso de salvataje del Estado a la banca privada, ejecutado desde el Gobierno, viabilizó la creación de la denominada Agencia de Garantías de Depósitos (AGD), institución creada para administrar los bancos que por el mal manejo de los depósitos entraron en quiebra.

El salvataje bancario aplicado por el gobierno de Jamil Mahuad, permitía adjudicar créditos millonarios a través de instituciones públicas y a la vez mediante la Ley de la Agencia de Garantía de Depósitos, el Estado ecuatoriano podía hacerse cargo de las deudas de la banca privada (Lucas, Ecuador cara y cruz - Del levantamiento de los noventa a la Revolución Ciudadana 2015). Es así que, hasta agosto de 1999, los recursos entregados por el Estado a la banca en problemas superaban los 1400 millones de dólares (Ramírez Gallegos y Ramírez, La estampida migratoria ecuatoriana: crisis, redes transnacionales, y repertorios de acción migratoria 2005); estimándose que los recursos destinados a éste propósito, fueron aproximadamente el equivalente al 24% del PIB (Romero 1999).

En éste contexto, la Junta Bancaria resuelve pasar a manos del Estado el banco “Filanbanco”, bajo el control de la AGD, con la justificación de que dicho banco entraba en proceso de restructuración (Lucas, Ecuador cara y cruz - Del levantamiento de los noventa a la Revolución Ciudadana 2015). Ante tal decisión, el Ministerio de Finanzas a solicitud de la AGD, ejecuta una emisión de bonos de deuda interna, para cancelar los créditos del “Filanbanco” con el Banco Central del Ecuador y a la vez capitalizarlo con un monto de quinientos cuarenta millones de dólares y así evitar su quiebra.

Pese a las medidas de salvataje bancario, el derrumbe económico y la crisis eran irreversibles ya que estaba asociadas a la más grande corrupción bancaria de la vida republicana del Ecuador, los banqueros habían recurrido a maniobras como “créditos vinculados”, “balances manipulados”, “falsificación de documentos” y “salida de capitales”, entre otras maniobras financieras y bancarias; causando el cierre de varios bancos privados, entre diciembre de 1998 y marzo de 1999.

En resumen, el gobierno de Jamil Mahuad y sus autoridades del frente económico, no pusieron límites a la ayuda a los bancos en problemas; causando graves perjuicios al Estado, por la entrega de altos montos de dinero para el salvataje bancario, siendo esto, una de las principales causas que detonó la crisis financiera nacional.

4.3.Feriado Bancario y congelamiento de los depósitos de los cuenta-ahorristas

La crisis financiera y bancaria al volverse insostenibles y con el afán de seguir beneficiando a los financistas, de la campaña electoral que le llevó al poder a Jamil Mahuad, es decir los banqueros, el gobierno recurre a medidas extremas, el lunes 8 de marzo de 1999 Mahuad decreta feriado bancario y el 11 de marzo de 1999 el congelamiento de los depósitos de los ahorristas; es decir, la incautación de todo el ahorro interno, con el afán de congelar la crisis y trasladar los costos a los depositantes de la banca y a los ciudadanos. Medida que en la población generó un absoluto antagonismo con el gobierno representado por Jamil Mahuad.

El feriado bancario aplicado el 8 de marzo de 1999, que inicialmente se informó sería por 24 horas, se extendió hasta el lunes 15 de marzo de 1999 por decisión de la Superintendencia de Bancos.

“La desesperación ciudadana ante la falta de respuestas se tradujo en protestas, disturbios, saqueos y movilizaciones hacia las instalaciones de los bancos. Había caos. Incluso, los medios de comunicación registraron suicidios” (DIARIO EL TELEGRAFO 2019).

El 11 de marzo de 1999, el Gobierno Nacional informó al país el levantamiento del feriado bancario; pero, para evitar el retiro masivo de dinero del sistema financiero nacional, decretó el mismo día el congelamiento de las cuentas corrientes, de ahorros y depósitos a plazo fijo, prohibiendo el retiro por un año el 50% del saldo de cuentas con valores superiores a 200 dólares y el total del valor depositado en cuentas de moneda extranjera mayores a 500 dólares (Lucas, Ecuador cara y cruz - Del levantamiento de los noventa a la Revolución Ciudadana 2015).

A la par del congelamiento de las cuentas, el gobierno anunció medidas y proyectos de ley, que, según su discurso, serán implementados para combatir la hiperinflación en la que se encontraba inmerso el Ecuador.

Las medidas económicas anunciadas, estaban orientadas a la subida del 163% en los costos de los combustibles y en el área tributaria con los proyectos de Ley enviados al Congreso Nacional, el gobierno pretendía elevar el impuesto del valor agregado (IVA), del 10 al 15%, y, crear otros impuestos, como el que se pretendía aplicar a los automotores que sobrepasen un avalúo de 15000 dólares. Entre otras.

En respuesta inmediata a las decisiones tomadas por el Presidente de la República, las organizaciones indígenas y sindicales llamaron a “desobediencia civil” a toda la ciudadanía; en un ambiente generalizado de protestas, disturbios, saqueos y movilizaciones, amenazaron con un paro nacional indefinido (Lucas, Ecuador cara y cruz - Del levantamiento de los noventa a la Revolución Ciudadana 2015).

4.4.Movilización nacional y levantamiento indígena, contra el gobierno de Jamil

Mahuad, marzo de 1999

Posterior al decreto del 8 de marzo de 1999, con el cual se ordenaba un feriado bancario; el 11 de marzo el Presidente Jamil Mahuad anuncia el congelamiento del dinero de los cuenta-ahorristas, nuevas medidas económicas y el envío de 10 proyectos de ley urgentes.

El Gobierno exhortaba al Congreso para tratar con carácter urgente, los proyectos de ley que permitirían al Ejecutivo (Gobierno Nacional) tener una base jurídica para la inmediata privatización de empresas de los sectores estratégicos, como son: telecomunicaciones, petróleos, electricidad, puertos, aeropuertos y correos (Lucas, Ecuador cara y cruz - Del levantamiento de los noventa a la Revolución Ciudadana 2015).

Jamil Mahuad, con estas decisiones preparaba el camino para la futura dolarización de la economía ecuatoriana.

Mahuad afirmó en su alocución:

Estas medidas económicas “*sentarán las bases para implantar una futura convertibilidad o directamente dolarización de la economía ecuatoriana (Mahuad, Jamil)*” (Lucas, Ecuador cara y cruz - Del levantamiento de los noventa a la Revolución Ciudadana 2015).

En reacción al mal manejo económico del Gobierno y en rechazo a las medidas tomadas por el Presidente de la República, el 8 y 11 de marzo de 1999; el movimiento indígena, las organizaciones sociales, sindicatos y los partidos políticos de oposición, convocaron a un paro general de 48 horas.

Ante un país convulsionado por el anuncio de las medidas que ejecutaría el Gobierno Nacional, para aplacar la crisis; el lunes 15 de marzo de 1999 el gremio de los taxistas expresó su disconformidad bloqueando toda la ciudad de Quito. Medida a la que el martes 16 de marzo de 1999 se sumarían los transportistas urbanos, interprovinciales y el transporte pesado de todo el país (Lucas, Ecuador cara y cruz - Del levantamiento de los noventa a la Revolución Ciudadana 2015).

La huelga convocada por los taxistas, a la que se unió todo el gremio de transportistas y otros sectores sociales; mantenía paralizado el país. La sociedad ecuatoriana se allanaba a una “Desobediencia Civil” y el movimiento indígena representado por la CONAIE, la Coordinadora de Movimientos Sociales, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y otras organizaciones, anunciaban radicalizar sus protestas; el Gobierno enfrentaba una situación de ingobernabilidad.

Las Fuerzas Armadas, ante los rumores de un Auto-Golpe de Estado y una posible disolución del Poder Legislativo, por parte del Ejecutivo; emiten un comunicado, en el cual dejaban muy claro que: - se oponían a incrementar la represión al pueblo y estaban en contra de “cualquier salida que vaya contra el sistema democrático” - (Lucas, Ecuador cara y cruz - Del levantamiento de los noventa a la Revolución Ciudadana 2015).

Ante tal situación y en medio de un país convulsionado, el Gobierno de Jamil Mahuad el 18 de marzo de 1999, toma la decisión de derogar parte de las medidas económicas decretadas el 11 de marzo de 1999; rebajando el costo de los combustibles, comprometiéndose a retirar los Proyectos de Ley de privatizaciones y a flexibilizar el congelamiento de las cuentas bancarias (Lucas, Ecuador cara y cruz - Del levantamiento de los noventa a la Revolución Ciudadana 2015).

Pese a los anuncios por parte del gobierno de flexibilizar sus medidas, el pueblo ecuatoriano se mantuvo en protesta y vigilia; es así que, en la ciudad de Cuenca se ejecutó

una marcha con aproximadamente treinta mil manifestantes, exigiendo la derogación total de las medidas económicas y la salida del presidente de la República.

Los pueblos indígenas por su parte, mantenían la ocupación y bloqueo de las vías; planteaban que se mantendrían en protesta, hasta que el gobierno decreta el descongelamiento de los depósitos y atienda a las exigencias del movimiento indígena. Radicalizando sus acciones en la provincia de Tungurahua el viernes 19 de marzo del 1999, al tomarse una central hidroeléctrica y cortar el suministro de energía a varias zonas del país.

4.5. Período inter-crisis, marzo 1999 – julio 1999

En el Ecuador se había consolidado ya la más grande e integral “Crisis Financiera” de la vida republicana (Verdesoto Custode 2014). En medio de una crisis social, manifestaciones populares, sindicales y acciones radicales del movimiento indígena; se produce otro hecho que reafirmaría la crisis del sistema financiero nacional: la quiebra del Banco del Progreso, el 22 de marzo de 1999.

El Gobierno Nacional por intermedio de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), asume el saneamiento del Banco del Progreso, en contraposición de las exigencias de las cámaras de comercio e industria de Guayaquil y las élites políticas de la Costa, representadas por León Febres Cordero, que presionaban la reestructuración del banco, es decir una nueva inyección de dinero por parte del Estado.

El cierre, salvataje y la negativa a la inyección de fondos adicionales en el Banco del Progreso, entidad financiera guayaquileña; amplificaron el deseo histórico de autonomía de las élites oligárquicas de los guayaquileños y el rechazo al centralismo. Fue muy claro el sentimiento regionalista y el antagonismo entre el pueblo de Quito y de Guayaquil.

En un contexto de crisis y regionalismo, el Ecuador entró en el camino de la hiperinflación y depresión económica; factores que incrementaron significativamente el desempleo nacional llegando al 18,1%, el subempleo 54,4% (Lucas, Ecuador cara y cruz - Del levantamiento de los noventa a la Revolución Ciudadana 2015), la pobreza al 56% a nivel nacional y la extrema pobreza al 21% (8 de cada 10 ecuatorianos de las áreas rurales vivían en la pobreza es decir el 77 % y 4 de cada 10 ósea el 38% vivían en la extrema pobreza) (Ramírez Gallegos y Ramírez, La estampida migratoria ecuatoriana: crisis, redes transnacionales, y repertorios de acción migratoria 2005).

El movimiento indígena ante esta realidad, decide retirarse de escenario nacional para dar una tregua al Gobierno, esperando que se cumplan los acuerdos y ofrecimientos planteados. El movimiento indígena y los grupos sociales plantean elaborar un programa de concertación, compuesto por varias mesas de diálogo.

El Gobierno Nacional, en los meses posteriores no dio atención a los esfuerzos de concertación y tampoco cumplió los acuerdos logrados con el movimiento indígena; más bien centró sus esfuerzos en relaciones intrascendentes con los empresarios y miembros de los partidos políticos de la mayoría legislativa. Las políticas de gobierno, estaban únicamente orientadas a la aprobación del presupuesto del Estado y la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (Verdesoto Custode 2014).

El movimiento indígena ante el incumplimiento de los acuerdos y los ofrecimientos del gobierno, entra en un proceso de acumulación interna de fuerzas, estrechando vínculos con los movimientos sociales y emprendiendo relaciones con miembros de las Fuerzas Armadas que demostraban su inconformidad con el gobierno y su entorno (Verdesoto Custode 2014).

Los miembros de las Fuerzas Armadas, que habían participado en la Guerra del Cenepa, aumentaban su inconformidad con el gobierno y especialmente con el presidente Jamil Mahuad, el 12 de mayo de 1999, cuando Ecuador capitula formalmente las negociaciones limítrofes contra Perú (Lucas, Ecuador cara y cruz - Del levantamiento de los noventa a la Revolución Ciudadana 2015).

El 13 de mayo de 1999, los presidentes Jamil Mahuad y Alberto Fujimori, declaran formalmente a sus respectivos países el establecimiento definitivo de la frontera, en la zona no delimitada (Lucas, Ecuador cara y cruz - Del levantamiento de los noventa a la Revolución Ciudadana 2015); acto que fue considerado una ofensa por los soldados ecuatorianos, ya que lo que se ganó en el Valle del Cenepa con sangre, fue entregado en la mesa de negociaciones, por Jamil Mahuad.

4.6.Movilización nacional y levantamiento indígena, contra el gobierno de Jamil Mahuad, julio de 1999

El movimiento indígena, entró nuevamente a la lucha con el apoyo de la clase media ecuatoriana, planteando los denominados “parlamento popular nacional” y “parlamentos populares provinciales”, para deslegitimar la institucionalidad que regía en el Estado ecuatoriano (Verdesoto Custode 2014).

Ante la decisión del gobierno, de nuevamente subir el precio de los combustibles, mediante el decreto emitido el viernes 2 de julio de 1999; el gremio de los taxistas retoma las acciones de hecho, bloqueando las carreteras a nivel nacional, el 5 de julio de 1999.

El día siguiente (6 de julio de 1999), el movimiento indígena se une a las acciones del gremio de taxistas, en contra de la subida de los costos de los combustibles, y, ante la pretensión del gobierno de privatizar las empresas públicas, con el envío de un proyecto de ley al Legislativo por parte del Ejecutivo, que le otorgaría al presidente poderes especiales que le permitan vender las empresas del Estado.

En las provincias especialmente de la Sierra los indígenas se unieron a la protesta de los taxistas; la CONAIE decreta oficialmente un levantamiento indígena nacional, con la intención de que el gobierno al igual que lo hizo en el mes de marzo, derogue las medidas tomadas.

El Gobierno Nacional decreta Estado de Emergencia, mientras los rumores de auto-golpe vuelven a reaparecer, con mayor fuerza que en el mes de marzo.

Las protestas se radicalizaban y a la par se unían a las movilizaciones los afiliados del Seguro Campesino, maestros, trabajadores petroleros, vendedores ambulantes y la ciudadanía en general (Lucas, Ecuador cara y cruz - Del levantamiento de los noventa a la Revolución Ciudadana 2015).

La dirigencia indígena, planteaba que la única alternativa para que el movimiento indígena ceda posiciones y acepte dialogar con el gobierno, era: que se derogue el decreto de Estado de Emergencia y todos los detenidos en las protestas sean liberados (Lucas, Ecuador cara y cruz - Del levantamiento de los noventa a la Revolución Ciudadana 2015).

Esta convocatoria a un levantamiento indígena, generó medidas de hecho en varias provincias de la sierra, es así que el 9 de julio de 1999, en Tungurahua, aproximadamente tres mil indígenas cortaron la señal de radio y televisión, al tomarse las repetidoras de dichos medios de comunicación.

El 10 de julio de 1999, la CONAIE amenaza con un levantamiento indígena total a partir del lunes 12 de julio de 1999.

El 11 de julio de 1999, en Cotopaxi, la comunidad indígena del cantón Tigua, inicia una movilización a la ciudad de Latacunga, donde se reúnen con miles de indígenas de las diferentes comunidades de la provincia, para tomarse la ciudad, como parte de las acciones organizadas por la dirigencia indígena, en el marco del levantamiento indígena nacional.

El 12 de julio de 1999, en Imbabura, las mujeres indígenas lideradas por Blanca Chancoso, emprenden una movilización hacia Quito.

El 16 de julio de 1999, en Pichincha, más de quince mil indígenas procedentes de diferentes provincias de la Sierra, llegan a la capital de la República los mismos que manifiestan permanecerán en Quito.

Las acciones ejecutadas por el pueblo indígena en diferentes ciudades, especialmente de la Sierra Central, se centraron en bloqueos de las vías de comunicación, toma de infraestructura de agua potable y energía eléctrica, repetidoras de radio y televisión; lo cual generó represión de la fuerza pública.

El 17 de julio de 1999, el Gobierno ante la presión de gremios de transportistas, grupos sociales y el movimiento indígena; se compromete satisfacer varias exigencias del movimiento indígena, como también congelar los precios de los combustibles y el gas de uso doméstico, en los valores anteriores a la subida decretada el 01 de julio de 1999 (Lucas, Ecuador cara y cruz - Del levantamiento de los noventa a la Revolución Ciudadana 2015).

Las dirigencias de los transportistas y del movimiento indígena, ante las decisiones y ofrecimientos del Gobierno, deciden terminar las acciones de protesta; tanto la huelga de taxistas como el levantamiento indígena.

Durante las movilizaciones, el gobierno de Jamil Mahuad ejecuta una maniobra de distracción para el pueblo ecuatoriano: dispone la prisión del banquero Fernando Aspiazu, acusado de mal manejo de los fondos del banco del Progreso.

Fernando Aspiazu contrata al gobierno y desde la prisión ejecuta acciones legales, con el propósito de exigir que Mahuad rinda cuentas sobre el destino de tres millones cien mil dólares (\$ 3'100.000), aportados a la campaña presidencial, por su grupo financiero; además hizo pública una lista de banqueros y empresarios, aportantes a la campaña electoral de Jamil Mahuad.

Esta información dio aval a las acusaciones que se vertían contra el gobierno, de haber recibido más de diez millones de dólares para la campaña presidencial, por parte de los banqueros (Lucas, Ecuador cara y cruz - Del levantamiento de los noventa a la Revolución Ciudadana 2015).

Jamil Mahuad, el segundo semestre del año 1999, dirigió la presidencia en medio del escándalo financiero producto de las acusaciones del banquero Fernando Aspiazu y con la economía ecuatoriana en medio de una devaluación incontrolable de la moneda

nacional (Sucre), frente al dólar norteamericano; esto provocaría, que el Ecuador entre en un camino hacia la hiperinflación.

Los analistas económicos, entraron en el dilema, si este efecto devaluatorio fue provocado intencionalmente por los agentes financieros, con el objetivo de forzar la convertibilidad o la dolarización la economía ecuatoriana, o fue un efecto generado por la compra de dólares, por parte de los bancos, para solventar el descongelamiento de las cuentas bancarias acordado por el Gobierno, luego de las movilizaciones indígenas del mes de julio de 1999.

Mahuad cerraría el año 1999, con intercambios de favores con los partidos políticos, con la finalidad de tener apoyo en el Congreso Nacional y lograr que sea aprobado el presupuesto del Estado, para el año 2000. El favor más claro percibido por la opinión pública, fue el pactado con el “Partido Roldosista Ecuatoriano” (PRE), al ejecutar la reforma del Código Penal, con auspicio de Jamil Mahuad; intención que generaría un rechazo total del pueblo ecuatoriano.

Esta Reforma permitiría, que todos los procesos legales, que el ex presidente Abdalá Bucaram mantenía por peculado, sean anulados y pueda regresar al Ecuador, sin ningún problema.

Así se cerraría una década de inestabilidad social, crisis de los partidos políticos y una crisis económica generalizada; factores que obligarían al Gobierno Nacional a inicios del año 2000, tomar la decisión de dolarizar la economía ecuatoriana.

4.7.Dolarización de la economía ecuatoriana

Si bien es cierto la dolarización se ejecutó el 9 de enero del 2000, es el resultado de los procesos y el mal manejo económico del Gobierno de Jamil Mahuad durante el año 1999. Por lo tanto, se le ha considerado como el penúltimo hecho del “Cuarto período, agosto 1998 – enero del 2000”, dentro del análisis del Ecuador en década de los noventa.

Hecho que antecedería al levantamiento indígena del 15 de enero del 2000, preámbulo del derrocamiento presidencial de Jamil Mahuad el 21 de enero del mismo año.

Jamil Mahuad, el 9 de enero del 2000, en cadena nacional del radio y televisión textualmente dice:

“Tras dos meses de análisis, de reuniones y de escuchar a expertos, he llegado a la conclusión de que la dolarización es un sistema conveniente y necesario para el Ecuador” (Mahuad, Jamil).

El plan económico, planteado por el Presidente Jamil Mahuad, consistía en hacer uso de la reserva monetaria líquida del Ecuador, que a inicios del año 2000 era de quinientos millones de dólares, para sustituir a la moneda nacional “El Sucre”, que hasta esa fecha era la moneda oficial y se encontraba en circulación (Lucas, Ecuador cara y cruz - Del levantamiento de los noventa a la Revolución Ciudadana 2015).

“El Sucre”, sería remplazado por el dólar norteamericano, a una cotización de veinticinco mil sucres por unidad de dólar. El banco Central del Ecuador, sería el encargado de ejecutar el proceso de cambio de la moneda nacional por el dólar norteamericano y luego pasaría a ser un organismo encargado de la reestructuración de la banca y el reordenamiento fiscal del Ecuador (Lucas, Ecuador cara y cruz - Del levantamiento de los noventa a la Revolución Ciudadana 2015).

El objetivo del Gobierno al implantar la dolarización, era en el lapso de un año lograr que la inflación del Ecuador se sitúe en niveles internacionales; es decir, con valores que borden el 10% anual.

La decisión presidencial tuvo el beneplácito del sector empresarial tanto de la costa como de la Sierra, pero no de las organizaciones sociales, movimiento indígena y cierto sector de la oficialidad joven de las Fuerzas Armadas.

Las reacciones de las organizaciones sociales y del movimiento indígena, fueron inmediatas; iniciaron acciones de protesta nacional, con carácter de indefinido, exigiendo el cese de los tres poderes del Estado (Lucas, Ecuador cara y cruz - Del levantamiento de los noventa a la Revolución Ciudadana 2015).

Los indígenas agremiados en la CONAIE, bloqueaban carreteras a lo largo de la Serranía y anunciaban la movilización de más de cinco mil indígenas a partir del sábado 15 de enero del 2000, con el objetivo de tomar la ciudad de Quito. La Coordinadora de Movimientos Sociales, anunciaba que las protestas iniciadas, no terminarían, hasta que se derogue el decreto de dolarización de la economía ecuatoriana.

4.8. Levantamiento y movilización indígena, 15 de enero del 2000

El período pre-dolarización (julio 1999 – diciembre 1999), estuvo caracterizado por la ejecución de maniobras de recomposición de la fuerza política por parte del gobierno, para lograr acuerdos con las mayorías parlamentarias a fin de concretar el objetivo de privatizar las empresas del Estado y neutralizar la capacidad de movilización tanto de los indígenas como de los movimientos sociales y sindicales (Dávalos 2000).

Pero la realidad fue diferente, quienes tomaron fuerza fueron los movimientos sociales e indígenas y quien perdió capacidad de maniobra fue el gobierno; a tal punto que, el régimen no pudo cumplir su programa de ajuste neo-liberal, se vio obligado a declarar la moratoria de la deuda externa y tampoco pudo ejecutar la privatización de las empresas estatales (Dávalos 2000). Estas circunstancias indujeron al presidente a decretar la dolarización de la economía ecuatoriana, preámbulo del levantamiento y movilización indígena del 15 de enero del 2000.

La dolarización encendió la mecha de la insurrección. La CONAIE, en respuesta a anuncio del presidente del 9 de enero del 2000, en el cual se decretaba la dolarización de la economía ecuatoriana; advierte la toma de la ciudad de Quito por parte del movimiento indígena para el 15 de enero del 2000 y convoca a la instauración del “Parlamento de los Pueblos del Ecuador”, el mismo que durante su desarrollo, resuelve exigir la disolución de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), por medio del levantamiento popular (Ciriza 2000).

Ante tal anuncio y en medio de un país convulsionado, el presidente decreta Estado de Emergencia, con la base legal de la Ley de Seguridad Nacional; disponiendo a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ejecuten operativos de bloqueo al avance de las comunidades indígenas a la ciudad de Quito, en todas las carreteras, con especial atención a la vía panamericana.

El operativo dispuesto por la Presidencia de la República, fue ejecutado con un alto nivel de represión; los indígenas que transitaban en buses de pasajeros a lo largo de la vía panamericana, que une las provincias de la Sierra con la Capital, eran obligados a desembarcar y regresar a sus comunidades.

Pese a la represión, los controles viales y los bloqueos al avance de los indígenas en su movilización a Quito, los indígenas lograron llegar a la Capital sorteando los controles militares y policiales dispuestos por el Gobierno. Su peregrinaje lo realizaron utilizando vías alternas y en pequeños grupos, hasta cumplir la disposición emitida por la dirigencia de la CONAIE, de llegar al parque El Arbolito y al Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana; lugar de concentración y centro de operaciones de la dirigencia indígena.

Aunque los militares cumplían lo dispuesto por el Gobierno Nacional, frenar el avance de los indígenas hacia Quito; ya corrían rumores, que algunos oficiales comulgaban con las propuestas de la CONAIE y mantenían reuniones conspiratorias con los grupos antagónicos al régimen de Mahuad.

En el interior de las Fuerzas Armadas, existía una clara división: mientras los militares de las unidades operativas bloqueaban el avance del pueblo indígena, los oficiales académicos que formaban parte de los institutos militares mantenían conversaciones con los dirigentes de la CONAIE y el Concejo Ampliado de Generales y Almirantes emitía comunicados rechazando todo intento de ruptura del ordenamiento jurídico del Estado ecuatoriano, en clara oposición a un posible auto-golpe de Estado, pretendido por Mahuad (Lucas, Ecuador cara y cruz - Del levantamiento de los noventa a la Revolución Ciudadana 2015).

Los dirigentes Indígenas, liderados por Antonio Vargas; el 18 de enero del 2000, hacían público, que el levantamiento indígena no declinará su accionar, mientras no se cumpla lo dispuesto por el Parlamento de los Pueblos del Ecuador, instaurado desde el 12 de enero del 2000, es decir, la disolución de los tres poderes del Estado.

Antonio Vargas, presidente de la CONAIE, en su alocución amenazó con radicalizar las protestas e informó que el levantamiento será progresivo y resistirán semanas o meses, si fuere necesario; hasta alcanzar el objetivo de instaurar un Gobierno Patriótico de Unidad Nacional, que se preocupe por los intereses del pueblo, con colaboración de las Fuerzas Armadas, grupos sociales y profesionales independientes (Lucas, Ecuador cara y cruz - Del levantamiento de los noventa a la Revolución Ciudadana 2015).

El lunes 17 de enero, en medio de un Estado de Emergencia decretado por el Ejecutivo, que suspendía todas las garantías individuales de los ciudadanos ecuatorianos, seis mil quinientos trabajadores de Petroecuador, agremiados en la FETRAPEC (Federación Nacional de Trabajadores Petroleros del Ecuador), sumaron su apoyo al levantamiento indígena. Los trabajadores de la Empresa Estatal de Petroleros del Ecuador (Petroecuador), amenazaban con paralizar todo el proceso petrolero ecuatoriano; es decir: dejar de extraer, transportar y embarcar el petróleo para su exportación. Ejecutaban esta medida en oposición a la dolarización y la pretendida privatización del Petroecuador, por parte del Gobierno de Jamil Mahuad.

Desde el 17 de enero hasta el 20 de enero del 2000, llegaron a la capital aproximadamente cinco mil indígenas, con la consigna de exigir la renuncia del Presidente Mahuad, de los miembros de la función judicial y la disolución del Congreso Nacional.

A la protesta indígena se sumaron: los transportistas, campesinos y movimientos sociales; todos ellos en rechazo al incumplimiento de los acuerdos y promesas derivadas de las mesas de dialogo, establecidas luego de las protestas del mes de julio de 1999.

Esta convocatoria a un levantamiento indígena, generó medidas de hecho en varias provincias de la sierra, amazonia y costa ecuatoriana; es así que, el 17 y 18 de enero del 2000, en Morona Santiago, los indígenas amazónicos, mantuvieron bloqueadas las vías de comunicación de la provincia, al igual que en Cañar, Azuay, Loja, también los movimientos indígenas y campesinos, ejecutaron bloqueos de las carreteras (Lucas, Ecuador cara y cruz - Del levantamiento de los noventa a la Revolución Ciudadana 2015).

En Imbabura, los movimientos sociales e indígenas, convocaron a una multitudinaria marcha por la ciudad de Ibarra, en la cual se estima participaron tres mil personas, entre indígenas y mestizos. De la misma manera en Azuay, miles de mujeres de la sociedad civil, formaron parte de la marcha “de las cacerolas vacías” (Lucas, Ecuador cara y cruz - Del levantamiento de los noventa a la Revolución Ciudadana 2015).

El 19 de enero del 2000, en Pichincha, doce mil indígenas llegaron hasta la capital, como parte de la movilización convocada por la CONAIE, para la toma de Quito. A la par, en la costa ecuatoriana especialmente en Esmeraldas, Manabí, El Oro y Los Ríos se vivió obstaculización de carreteras similares a las ejecutadas en Imbabura, Cañar, Azuay, Loja, Napo, Morona Santiago, Pastaza y Zamora Chinchipe; acompañadas éstas por movilizaciones de los campesinos (Lucas, Ecuador cara y cruz - Del levantamiento de los noventa a la Revolución Ciudadana 2015).

El mismo día en Sucumbíos, pobladores de la ciudad de Lago Agrio se tomaron el aeropuerto, bloqueando toda operación de tráfico aéreo (Lucas, Ecuador cara y cruz - Del levantamiento de los noventa a la Revolución Ciudadana 2015).

El 20 de enero del 2000, en Pichincha, doce mil indígenas, mantuvieron rodeados los edificios del Congreso Nacional y de la Corte Suprema de Justicia mientras toda la Sierra, Costa y Amazonía ecuatorianas, se mantuvieron obstaculizadas las carreteras en especial en Imbabura, Cañar, Azuay, Loja, El Oro, Los Ríos y Guayas (Lucas, Ecuador cara y cruz - Del levantamiento de los noventa a la Revolución Ciudadana 2015).

En Manabí, la ciudad de Portoviejo fue tomada por aproximadamente cuatro mil campesinos (Lucas, Ecuador cara y cruz - Del levantamiento de los noventa a la Revolución Ciudadana 2015).

En Sucumbíos, los pobladores de la ciudad de Lago Agrio, mantuvieron el aeropuerto bloqueando (Lucas, Ecuador cara y cruz - Del levantamiento de los noventa a la Revolución Ciudadana 2015).

En Napo, se registró la destrucción del oleoducto de conducción de agua para la ciudad del Tena (Lucas, Ecuador cara y cruz - Del levantamiento de los noventa a la Revolución Ciudadana 2015).

En el Sur Oriente ecuatoriano específicamente en Morona Santiago, Pastaza y Zamora Chinchipe, campesinos mantuvieron bloqueadas las vías de comunicación, ejecutaron movilizaciones paralizando el comercio totalmente (Lucas, Ecuador cara y cruz - Del levantamiento de los noventa a la Revolución Ciudadana 2015).

Ante la contundente manifestación ciudadana a lo largo de todo el territorio nacional y con un país semiparalizado; el Gobierno, por intermedio de su portavoz presidencial, Carlos Larreátegui, propone dialogar con los dirigentes del movimiento indígena, bajo el único condicionamiento que éstos depongan su pretensión de cesar los tres poderes del Estado (Lucas, Ecuador cara y cruz - Del levantamiento de los noventa a la Revolución Ciudadana 2015).

Mientras el portavoz presidencial trataba de alcanzar el diálogo con el movimiento indígena, los miembros del Ejecutivo planificaban enviar el viernes 21 de enero del 2000, al Congreso Nacional del Ecuador, los proyectos de ley necesarios, para ratificar la imposición de la dolarización de la economía ecuatoriana (Lucas, Ecuador cara y cruz - Del levantamiento de los noventa a la Revolución Ciudadana 2015).

La dirigencia del movimiento indígena, no prestó atención a los pedidos de diálogo por parte del Gobierno y más bien planteó al Alto Mando militar la instauración de un “Gobierno del Salvación Nacional”, conformado por miembros las instituciones que mayor credibilidad del País; es decir: la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas. Gobierno que estaría apoyado y fiscalizado por miembros notables de la sociedad civil.

En resumen, luego de hacer un análisis pormenorizado de los procesos “sociales - militares – políticos – económicos” del Ecuador, podemos concluir, afirmando que:

Las Fuerzas Armadas, han intervenido de diversas maneras en los procesos políticos en la década de los noventa y posteriores; ratificando en este estudio, que los militares siguen siendo actores políticos y sociales.

Al relatar los hechos históricos es visible que las Fuerzas Armadas al ser garantes del Estado, también pasan a ser parte del poder político; asumiendo roles contrapuestos

con su misión principal, establecida en las leyes constitucionales, como se pudo ver en los siguientes procesos políticos:

- En febrero de 1997, cuando el Jefe del Comando Conjunto, General de Ejército Paco Moncayo Gallegos, indirectamente retiran el apoyo al presidente Abdalá Bucarán.
- En enero del 2000, cuando el Alto Mando de las Fuerzas Armadas, en medio de la insubordinación militar de oficiales de rangos medios, piden la renuncia del Presidente Jamil Mahuad, manteniendo la tesis de la sucesión presidencial, como única salida ante la crisis de gobernabilidad.

La revuelta militar del 21 de enero del 2000, es el claro ejemplo de la insatisfacción militar, frente a la inoperancia y corrupción en el poder político, que desembocó en una crisis económica y social a finales de la década de los noventa.

Capítulo segundo:

Procesos de cambio en la educación y entrenamiento militar, ejecutados en la década de los noventa, en respuesta a los procesos sociales - militares - políticos – económicos, vividos desde 1990 en el Ecuador

Antes de hacer un análisis de los procesos de cambio en la educación y entrenamiento militar de las Fuerzas Armadas del Ecuador, ejecutados desde inicios de los años noventa, y, entender los resultados obtenidos luego de una década de ejecución de dichos procesos, inicialmente en medio de un país convulsionado por la reaparición los movimientos indígenas, quienes protagonizaron luchas sociales y levantamientos populares; para luego, en medio de una inestabilidad política, enfrentar el conflicto militar del Alto Cenepa contra el Perú; posteriormente, vivir un derrocamiento presidencial y aceptar un gobierno interino, preámbulos de la peor crisis vivida por el Ecuador, producto del mal manejo económico y la quiebra del sistema bancario; analizaremos: como influenciaron los aspectos sociales, militares, políticos, económicos y tecnológicos, en la reorientación de la educación militar, ejecutada por sus ideólogos bajo el principio que el conocimiento es la clave del progreso, y, conscientes ellos que se vivía un tiempo de oportunidades, pero también de grandes amenazas.

Analizaremos también, los conceptos ideológicos sobre los cuales se basó la doctrina militar ecuatoriana, en los años noventa; conceptos que, tuvieron la influencia ideológica del “nacionalismo”, “militarismo” y “nuevo militarismo”. Ideologías que se habían venido manifestando en el contexto del fenómeno militarista latinoamericano desde los años sesenta y que para el caso ecuatoriano tendría una importante influencia desde la década de los setenta.

Posterior a dicho análisis, ejecutaremos un enfoque conceptual de la Nación y su seguridad; conocimientos que nos permitirán entender la problemática de la seguridad nacional y como la educación militar impartida especialmente en las escuelas de formación de oficiales de las Fuerzas Armadas, permitió entrenar a los futuros comandantes para el planeamiento integrado de la seguridad y del desarrollo nacional.

Desarrollo Nacional que las Fuerzas Armadas impulsaría en base a la profesionalización de sus miembros y a la ejecución de “planes y programas de apoyo al

desarrollo” a lo largo de todo el territorio nacional ecuatoriano, especialmente en las áreas más descuidadas por el gobierno central; acciones ejecutadas en la década de los noventa y basadas en los estudios y debates planteados desde al menos la década de los cincuenta hasta finales del siglo pasado, por autores como: (Huntington, Samuel P), (Janowitz, Morris), (Stepan, Alfred), (Finer, Samuel), entre otros, mismos que priorizan la relaciones civiles-militares y la profesionalización militar.

Debates que, en concordancia con un análisis conceptual de los términos “seguridad” y “nación”, nos permitirán entender los vínculos entre la “seguridad nacional”, el “desarrollo nacional” y la “política nacional”, y, como estos conceptos vinculados influyeron en los procesos de formación de los oficiales de las Fuerzas Armadas.

1. La influencia de los aspectos sociales, militares, políticos, económicos y tecnológicos, en la nueva educación militar; basada en la profesionalización de sus miembros y orientada a la ejecución de “planes y programas de apoyo al desarrollo” en función de las relaciones civiles-militares

(Huntington, Samuel); en su teoría y política de las relaciones cívico-militares desarrollada en su obra “El soldado y el Estado”, plantea que el punto clave de estas relaciones reside en los patrones que asumen la correlación entre el Alto Mando del cuerpo de oficiales y las elites gobernantes. Por otro lado, también concibe un control objetivo de las Fuerzas Armadas por parte del poder civil, mediante su profesionalización, de manera que reconozcan los límites a los cuales están sometidas, y mantengan la subordinación al poder civil, pero a la vez reconoce una autonomía para los militares; de esta manera se logra el respeto mutuo entre los dos poderes, es decir: reducir la intrusión de los militares en temas políticos y de los políticos en temas militares y de seguridad (Huntington 1957).

Al analizar los antecedentes que incentivaron a los miembros de las Fuerzas Armadas del Ecuador a revelarse contra el poder constituido y apoyar a los grupos sociales en el año 2000, llegamos a la conclusión que: las relaciones civiles militares en la década de los noventa del siglo XX, se manifestaron como un conjunto complejo de interacciones, conflictos y coaliciones, entre militares, elites gobernantes y grupos de la sociedad.

Dado que las relaciones cívico militares se articularon en contextos específicos de los regímenes políticos particulares, los patrones que adquirieron dependían -no

exclusivamente de la voluntad de los militares- sino de las capacidades administrativas y de gobernabilidad de los regímenes que se encontraban en el poder (Castañeda 2004).

Las relaciones cívico militares fueron la base fundamental del proceso de cambio doctrinario e ideológico, a inicios de la última década del siglo XX, en las Fuerzas Armadas ecuatorianas y con mayor interés en la fuerza terrestre (ejército); en este proceso se destacó la existencia de patrones en las relaciones de las sociedades sudamericanas y sus Fuerzas Armadas, especialmente en el respeto la sociedad a sus instituciones de seguridad.

En este período de tiempo, las Fuerzas Armadas delinearon nuevas misiones a cumplir por sus miembros, substancialmente en la parte social; llegando a generarse un vínculo más fuerte entre la sociedad civil y los uniformados. Criterio que se afirma en las ponencias de autores contemporáneos como (D'Araujo, María) y su investigación titulada: “Matices de las visiones sobre militares y sociedad en América del Sur” (D'Araujo 2013).

Siguiendo esta línea de investigación, al plantearse nuevas misiones para las Fuerzas Armadas ecuatorianas, también se generaron nuevos escenarios en las relaciones civiles-militares, especialmente, por causa del ascenso al poder de gobiernos con características populistas y estructura partidaria débil; esto provocó que en la segunda mitad de la década de los noventa, nuevamente las Fuerzas Armadas se conviertan en garantes del Estado, y, por ende, pasen a ser también parte del poder político; asumiendo roles contrapuestos con su misión principal y establecida en las leyes constitucionales del país, tales como:

“el de fuerzas nacionalistas que luchan para derrocar a un régimen u oligarquía explotadora; el de fuerza conciliadora entre posturas extremas; el de redentores de una condición social malsana o deteriorante; el de directores de un sistema político; el de grupo de presión que expresa las aspiraciones de una determinada clase social o que plantea las aspiraciones populares” (Manpreet 2019).

La nueva doctrina, producto de nuevas misiones encomendadas a los miembros de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, aplicada en la educación militar a partir de los años noventa, estaba guiada por los profundos cambios en los sistemas y estructuras económicas, y, en las relaciones políticas tanto nacionales, regionales y mundiales; cambios que, presionaban para una re-conceptualización de la persona, la sociedad y el Estado, dentro de una cultura de globalización.

Estos aspectos obligaron a una reformulación de los conceptos de “nación”, “seguridad”, “desarrollo”, “política” y “soberanía”, vinculados con: “seguridad nacional”, política de desarrollo”, “política nacional” y sobretodo con las “relaciones cívico-militares”.

Conceptos que se incorporaron en la nueva doctrina militar en respuesta a las complejas realidades y problemáticas socio-político-económicas de la última década del siglo XX y a los retos del siglo XXI.

Por otro lado, desde el ámbito político se planteaba que en la región (Sudamérica), se había generado una cierta convergencia en la percepción por parte de la ciudadanía, que los uniformados no deben volver a ocupar el poder político, y, que no existían en las instituciones militares proyectos para ejercer directamente las funciones de gobierno (D'Araujo 2013).

Pero, como se afirmó a inicios de esta investigación, la realidad es diferente, ya que los militares fueron y siguen siendo “actores políticos y sociales”; por lo tanto, la formación académica y el entrenamiento militar que recibieron, a partir de los años noventa, en los institutos de formación militar del Ecuador, se basaron en paradigmas, que permitieron a los uniformados insertarse en el mundo del desarrollo, de la ciencia y la tecnología; de tal manera que, los egresados de estos institutos, sean ellos oficiales o tropa, satisfagan las necesidades sociales de la última década del siglo XX y enfrenten los retos para responder a las necesidades del siglo XXI.

Las nuevas relaciones Civiles-Militares, como manifesté en líneas anteriores, en el caso ecuatoriano fueron la principal motivación para ejecutar los procesos de cambio en la doctrina de las Fuerzas Armadas, en los años noventa; para examinar estas nuevas relaciones, debemos reflexionar sobre los procesos de formación y capacitación militar, vigentes en la década 1990-2000, aplicados especialmente en la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro”, instituto de formación superior de los oficiales de la Fuerza Terrestre.

Estos procesos tienen similitud con estudios realizados por (Janowitz, Morris); en su obra “El soldado profesional” (Janowitz 1960), donde se puede observar que dicho investigador impulsaba las tres peculiaridades también establecidas por (Huntington, Samuel), para definir la profesión militar: sus dimensiones, técnica y moral.

Debemos destacar que (Janowitz, Morris), no dio prioridad a la autonomía profesional militar, como lo hizo (Huntington, Samuel); más bien se centró en examinar las características socio-económicas, políticas y culturales, que los uniformados compartían con otras fracciones de la sociedad a la que pertenecían y que ayudaban a

definir su profesionalismo. A estos procesos de profesionalización de las Fuerzas Armadas, (Janowitz, Morris) los llamó “formas de civilización de las Fuerzas Armadas”, es decir: la incorporación de lógicas y prácticas del mundo civil, en el ámbito militar (Soprano 2013).

El perfil profesional sobre el cual se aplicó la nueva doctrina militar en los años noventa, además de tener una fuente académica en los debates planteados desde los años cincuenta, trazaba como objetivo principal la formación de soldados profesionales “reflexivos, críticos y creativos”, capaces de asesorar, participar y liderar, los procesos de resolución de conflictos que se presenten en el medio socio-cultural en el cual desempeñen sus funciones.

Considerando, que muchos de los egresados de los institutos militares prestarán sus servicios en sectores alejados de las grandes ciudades, las Fuerzas Armadas y en especial el Ejército, aprovecharon esta particularidad y la orientaron como una fortaleza institucional, en el marco de las relaciones cívico-militares, con el objetivo que sus miembros, especialmente los nuevos oficiales, sean entes transformadores del entorno, en el cual presten sus servicios, respetando a las etnias, sus culturas e ideologías, para así lograr la integración del ejército y su pueblo; y, a la vez lograr un progreso regional dentro de una estrategia nacional de “integración social” y “desarrollo nacional”.

La doctrina militar priorizaba los conceptos de “nación”, “seguridad”, “desarrollo”, “política” y “soberanía”, vinculados con: “seguridad nacional”, política de desarrollo”, “política nacional”, articulados con la nueva política de relaciones civiles-militares, para cumplir con la estrategia de integración del “Ejército y su pueblo”, y, contribuir con desarrollo nacional; la nueva doctrina planteaba como objetivos:

- Impartir conocimientos, destrezas y valores; con los cuales el militar pueda interactuar con el medio social en que se desenvuelve, permitiéndole vincular la formación militar profesional con la realidad social y su entorno geográfico.
- Capacitar profesionalmente al militar para que actúe en situaciones de:
 - Prevención:
 - Disuasión de cualquier amenaza interna o externa
 - Apoyo a la comunidad en caso de desastres naturales
 - Apoyo al desarrollo social y económico de la población
 - Represión:
 - Impedir cualquier amenaza interna o externa, que represente un peligro al sistema democrático.

La doctrina y educación militar, debía adaptarse a las nuevas exigencias de la sociedad ecuatoriana, priorizando: altos estándares de conocimientos, valores éticos y morales, destrezas físicas y militares. De esta manera, los miembros de las Fuerzas Armadas se convertirían en entes de apoyo al desarrollo, a la soberanía y a la unidad nacional.

La educación militar se basaba fundamentalmente en estudios de la historia y la realidad nacional; para que el militar al terminar sus estudios y ser asignado a las unidades militares, oriente su trabajo a contribuir positivamente al desarrollo nacional.

La doctrina militar aplicada en los años noventa, consideraba a la profesión militar como una estructura social; por lo tanto, la educación y el entrenamiento militar se basaban en directrices para su desarrollo, entre otras: conocimiento especializado, directriz investigativa, sociológica, psicológica, técnica y axiológica (Cueva, Campana y Abarca 2000).

En resumen, la doctrina y educación militar impartidas desde los años noventa, tenía como nuevo objetivo, la vinculación de los miembros de las Fuerzas Armadas con su entorno y con la sociedad, sin descuidar su objetivo fundamental, que es preparar a los soldados para la guerra, y así, en caso que sea necesario, ellos estén listos a aplicar su entrenamiento para defender la soberanía territorial.

En tiempo de paz, el militar debía estar preparado para aportar al desarrollo nacional, en áreas como salud, educación, seguridad interna y apoyo ante desastres naturales, y, otras actividades delineadas en las políticas de relaciones cívico-militares y de seguridad nacional.

Las Fuerzas Armadas para poder aportar al desarrollo nacional y cumplir con las actividades descritas en las políticas de relaciones cívico-militares, desde los años noventa, pusieron a la educación como uno de los pilares fundamentales de la modernización institucional (Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador 2002).

Es así que, la educación integral del militar se la orientó a la formación profesional, científica, humanista, de capacidad física y al fortalecimiento de su liderazgo; para que sea un ente que aporte en la consecución de los objetivos institucionales y nacionales, en el marco de las políticas de relaciones cívico-militares. En este contexto, la educación integral militar buscaba que el profesional militar capitalice su vocación en valores éticos y morales, afianzada con una formación tecnológica que le permita

desempeñarse eficientemente y contribuir a la misión de la institución (Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador 2002).

El proceso de enseñanza aprendizaje, aplicado especialmente en la Escuela Superior Militar "Eloy Alfaro", de la cual egresan los alumnos cadetes con el grado de subtenientes de arma y servicios, así como los tenientes especialistas que la institución militar recluta para satisfacer las necesidades técnico profesionales de la Fuerza Terrestre; se basó en los años noventa especialmente en el estudio de las siguientes materias académicas y militares:

Primer año de formación militar:

Materias académicas civiles	Materias militares
Álgebra	Conocimiento de armas
Inglés I	Conocimiento de armas y tiro
Introducción a la economía	Disturbios y motines
Trigonometría	Don de mando
Geometría	Escuadra de fusileros
Derecho territorial I	Ética militar
Métodos y técnicas de estudio	Historia militar I
	Instrucción individual de combate
	Leyes y reglamentos militares
	Primeros auxilios
	Símbolos y abreviaturas militares
	Educación física

Referencia: Escuela Superior Militar "Eloy Alfaro" año escolar 1992-1993

Segundo año de formación militar:

Materias académicas	Materias militares
Administración I	Cartografía
Computación	Comunicación
Derecho territorial II	Legislación militar II
Inglés II	Movimiento de tropas
Matemáticas I	Organización del terreno
Metodología de la investigación	Símbolos y abreviaturas militares
Psicología empresarial	Táctica general

Capacitación docente I	Liderazgo militar II
	Pelotón de fusileros
	Entrenamiento físico militar

Referencia: Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro” año escolar 1993-1994

Tercer año de formación militar:

Materias académicas	Materias militares
Ingles III	Educación física
Administración de personal I	Historia militar II
Administración II	Inteligencia y contrainteligencia
Capacitación docente II	Legislación laboral
Derecho territorial III	Legislación militar III
Matemática II	Observación avanzada
	Ejercicios tácticos
	Explosivos y demoliciones
	Liderazgo
	Pistas militares
	Orientación de selva y contraguerrilla
	Patrullas
	Pelotón A.C.
	Pelotón policía militar
	Entrenamiento físico militar

Referencia: Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro” año escolar 1994-1995

Cuarto año de formación militar:

Materias académicas	Materias militares
Ingles IV	Introducción a la estrategia
Práctica docente	Conocimiento de Fuerzas Opuestas
	Legislación militar IV
	Entrenamiento físico militar
	Materias de especialidad ⁴

Referencia: Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro” año escolar 1995-1996

⁴ La Escuela Superior Militar del Ecuador, instituto de formación de los oficiales de arma, servicios y especialistas, del Ejército, en las siguientes especialidades: Infantería, Caballería Blindada, Artillería, Comunicaciones, Inteligencia Militar, Aviación del Ejército, Intendencia, Transportes, Material de Guerra, Justicia, Sanidad.

La formación profesional de los oficiales del ejército y de las otras ramas de las Fuerzas Armadas del Ecuador, se desarrolla a lo largo de toda la carrera, considerando como principio fundamental la educación permanente.

Con esta premisa, los oficiales toman los cursos de especialización como requisito fundamental para su ascenso; iniciando su capacitación en la Escuela Superior Militar, para luego continuar su perfeccionamiento en la Academia de Guerra de la Fuerza Terrestre, instituto militar que instruye a sus alumnos para desempeñar las funciones de Comando y Estado Mayor, a nivel de brigada y división, preparándoles profesionalmente para la administración de las unidades militares en tiempo de paz, su mando militar en tiempo de guerra y fundamentalmente para la participación en las acciones de defensa interna y apoyo al desarrollo, como componente fundamental de las relaciones civiles-militares (Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador 2002).

Las acciones de apoyo al desarrollo consideradas parte de la nueva doctrina militar, impartida en la década de los noventa, fueron ejecutadas como una estrategia de prevención de conflictos, coincidente con los conceptos de seguridad preventiva; mismas que, fueron ejecutadas para aplacar las acciones desestabilizadoras de los movimientos sociales e indígenas a partir de junio de 1990.

Las acciones de apoyo al desarrollo se centraron en el cumplimiento de los objetivos estratégicos, plantados por la institución militar, y así: lograr el desarrollo de las áreas rurales y fronterizas, proteger el medio ambiente y desarrollar proyectos interinstitucionales.

El apoyo al desarrollo ejecutado por las Fuerzas Armadas, cumpliendo su doctrina militar, los objetivos, y, los lineamientos estratégicos institucionales, se vieron reflejados en: obras básicas de infraestructura vial y de vivienda, campañas de salud en comunidades remotas, campañas de forestación, acciones de control y protección del régimen forestal y de las áreas naturales, educación básica en áreas apartadas, construcción de aulas en lugares marginales, y, apoyo en la mitigación de desastres naturales y ante problemas ambientales (Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador 2002).

Las Fuerzas Armadas, para cumplir con éxito su misión estratégica de apoyo al desarrollo, y, rigiéndose a su doctrina de profesionalización militar, inserta desde mediados de la década de los noventa, a los mejores oficiales de rangos medios, en un proceso intensivo de educación superior.

Dichos oficiales, son enviados como alumnos de las diferentes ingenierías en Escuela Politécnica del Ejército (ESPE), con el objetivo que a corto plazo las Fuerzas

Armadas dispongan de oficiales profesionales e investigadores, con pensamiento crítico y alta conciencia ciudadana, capaces de generar, aplicar y difundir el conocimiento, y, proporcionar e implementar alternativas de solución a los problemas de la colectividad, para promover el desarrollo integral del Ecuador, en el marco de las relaciones cívico-militares (Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador 2002).

Oficiales con pensamiento crítico y alta conciencia ciudadana, que serían los principales actores de la sublevación militar y gestores del derrocamiento del Presidente Jamil Mahuad, el 21 de enero del 2000, influenciados por el nacionalismo, el militarismo, el nuevo militarismo y guiados por los enfoques conceptuales de “nación”, “seguridad”, “desarrollo”, “política” y “soberanía”. Oficiales cuya formación académica-militar, los vinculados con la “seguridad nacional”, la política de desarrollo” y la “política nacional”; profesionales militares cuyo único propósito se centró en la integración del “Ejército y su pueblo”, y, su objetivo fundamental era contribuir con desarrollo nacional.

2. El nacionalismo y su influencia en los procesos de formación académica de los miembros de las Fuerzas Armadas

Los antiguos y nuevos conflictos, tienen sus raíces en las viejas confrontaciones de carácter histórico, en las luchas étnicas y religiosas, pero la principal causa son los nacionalismos exacerbados. Nacionalismos que, al repuntar los factores antagónicos al desarrollo, como la pobreza, la corrupción, la ausencia de modelos y políticas de desarrollo nacional, han incentivado las intervenciones de los militares en los asuntos políticos de los Estados.

El “nacionalismo” y el “militarismo” en Latinoamérica, tienen una estrecha relación, ya que, la ausencia de modelos y políticas consecuentes con el desarrollo nacional, incentivaron el auge del “militarismo”, como una solución nacionalista a los conflictos. Es decir:

“El nacionalismo se presenta como una falsa ideología del desarrollo y el militarismo como una falsa solución para los problemas” (Costa Pinto 1974)

El nacionalismo, a finales del siglo XX, en los países denominados “periféricos” o del “tercer mundo”, aparece como una maniobra dirigida por los poderes conservadores con el propósito de oponerse a los cambios estructurales que se avizoraban en América Latina. Estos poderes incentivaron que el nacionalismo se convierta en la ideología del desarrollo, para asegurarse que la burguesía empresarial tenga el control de los procesos políticos de los Estados.

El término “nacionalismo” aparece cuando la nación-Estado pasa a ser la célula base sobre la cual se integra la comunidad política, mismos que convierten a la palabra “nacionalismo” un membrete que representaba las obligadas lealtades para con esa corporación política. Es decir, direccionan al nacionalismo como el marco de referencia de la solidaridad social y política, en el proceso de surgimiento de la nación.

El nacionalismo amalgama a todos los intereses, valores, lealtades expectativas y aspiraciones, comunes entre los miembros pertenecientes a una sociedad nacional; es decir, al tener como condición única gozar de una misma nacionalidad, el nacionalismo se convierte en la ideología de la nación (Costa Pinto 1974). En conclusión el nacionalismo no puede sobrevivir sin nación y no hay nación sin la existencia del nacionalismo.

El nacionalismo por definición implica sentimientos de identidad, solidaridad, como también la ejecución de acciones comunes entre los individuos miembros de una nación; es decir, entre ciudadanos y connacionales. Sin olvidar que el sentimiento de “patriotismo” presente en cada ciudadano, es el principal componente emocional del nacionalismo.

Desde la segunda mitad del siglo XX, en los países periféricos y especialmente en América Latina, se perdió el significado sociológico del nacionalismo, pasando a ser un confuso mosaico ideológico con pobreza teórica, utilizado para el uso y conveniencias propias de los partidos y corrientes políticas dentro de cada nación.

Es así que a partir de los años cincuenta en América Latina el nacionalismo en el plano ideológico fue adoptado por las corrientes de izquierda y por la insurgencia indígena; un ejemplo de ello, en el Ecuador bajo la bandera del nacionalismo, la resistencia indígena ejecuta las primeras acciones indias comandadas por Dolores Cacuango, lideresa aguerrida, heredera de la sangre Kayambi y representante de la resistencia del pueblo indígena.

Pese a que el nacionalismo fue adoptado con mayor énfasis por las corrientes de izquierda; en realidad permitió el encuentro y hasta llegar a compromisos entre corrientes ideológicas de derecha e izquierda, mismas que hallaron en la elasticidad del nacionalismo la forma de convivir y coexistir, pero no cooperar (Costa Pinto 1974).

A la par en el plano político al nacionalismo se lo intentó convertir en la “doctrina del desarrollo” y “de las reformas estructurales de la nación”; lo cual generó profundas contradicciones, ya que esta intención doctrinaria obligaría a ejecutar una discusión frontal de los temas programáticos y de las soluciones políticas, a partir de las cuales deben efectivamente resultar las reformas estructurales. Ante ello, el discurso político se

limitó únicamente a establecer una identidad artificial entre el nacionalismo y las reformas estructurales, carente esto en la realidad de fundamentos doctrinales e históricos, lo cual en la práctica llevaría al nacionalismo a un completo fracaso.

En conclusión, el nacionalismo es un fenómeno histórico y no una teoría política. En este contexto, la palabra “nacionalismo” se la utilizó para etiquetar a cualquier contenido doctrinal, como por ejemplo la palabra “radicalización”, utilizada frecuentemente en el argot político y que muchos la relacionan solo a la “radicalización por la izquierda”, sin darse cuenta que la “derecha radical” aparece como una de las alineaciones más exacerbadas del cuadro político contemporáneo (Costa Pinto 1974).

Este fenómeno histórico, ha servido para que distintos sistemas políticos y gobiernos en América Latina, generen una confusión intencionada entre el término “nacionalismo” y la acción de “nacionalizar” las fuentes, medios y recursos básicos de una nación, como por ejemplo las vías de comunicación, la tierra, el subsuelo y sus recursos naturales; para de esta manera, mantener el control de su exploración y explotación. Convirtiéndose en un instrumento político y de control económico.

En resumen, el nacionalismo no es una corriente política, un sistema de pensamiento económico y peor una doctrina social; es un fenómeno histórico que ha servido como una ideología de protesta, utilizada a conveniencia por los partidos y corrientes políticas dentro de cada nación: los conservadores con el propósito de oponerse a los cambios estructurales que se avizoran en el tiempo, y, las corrientes de izquierda e insurgencia indígena para protestar contra los sistemas sociales y económicos considerados arcaicos implantados en la sociedad nacional.

En consecuencia, a finales del siglo XX en pleno proceso de regreso y construcción de la democracia, el “nacionalismo” al haber fracasado como “ideología del desarrollo”, se transformó en el portavoz del “militarismo civil” que pretendía promover los materiales doctrinarios de las nuevas tendencias del “militarismo” en el Ecuador y en toda América Latina.

3. El militarismo en América Latina y su influencia en los procesos de formación académica de los miembros de las Fuerzas Armadas

Estudiar el “militarismo” en el contexto de la transición social de los Estados latinoamericanos, especialmente del ecuatoriano, nos ayudará entender la razón por la cual los militares han intervenido de diversas maneras en la política, gestando una fusión

entre el militarismo y la tecnocracia, en los diferentes momentos de la historia del Ecuador, con mayor interés en la década de los noventa del siglo XX.

Al analizar al “militarismo”, lograremos entender los factores que condicionan la intervención de los uniformados en los aspectos de la vida nacional que están fuera de las funciones dispuestas para las Fuerzas Armadas en la Constitución Política de sus Estados. Aspectos que se desarrollan en esferas de toma de decisiones; para el ejercicio de las cuales, los uniformados no tienen la formación especializada requerida.

Cabe señalar que la incursión de las Fuerzas Armadas en los procesos políticos de los Estados, es concomitante a los procesos de inestabilidad social, política y económica vividos por los ciudadanos en los diferentes países, consecuencia del mal manejo y las decisiones erráticas tomadas por sus gobiernos; surgiendo para la sociedad civil como única y desesperada solución, la intervención de los uniformados, como mecanismo de solución de sus problemas.

Ante este antecedente, para analizar las razones por las cuales las Fuerzas Armadas, han incursionado en los procesos políticos en las sociedades en transición, tenemos que plantearemos dos interrogantes:

1. ¿Por qué los procesos de transición de los Estados llevan a los uniformados a intervenir en los asuntos políticos?
2. ¿Por qué los militares son tan fácilmente atraídos por los factores que incentivan a esta participación en los procesos políticos de los Estados?

Los fenómenos de transición social, que han sufrido los Estados, implican procesos de desintegración de las formas prevalecientes e integración de los patrones emergentes. Durante la ejecución de estos procesos de “desintegración-reintegración”, la marginalidad de la estructura se manifiesta esencialmente por la inestabilidad política de los Estados.

Las fuerzas políticas que son parte de los procesos de “desintegración-reintegración” y tienen como característica principal la “debilidad” mientras actúan en los procesos gubernativos de sus Estados, especialmente en las sociedades marginadas, convierten a esta característica (debilidad), en el factor principal que origina la inestabilidad de los Estados. Un claro ejemplo de ello, es la crisis de los partidos políticos vivida durante los años noventa en el Ecuador, misma que generó enormes vacíos políticos, institucionales, ideológicos y éticos.

Estos vacíos, generan que las sociedades en transición, desprendidas ya de los antiguos esquemas, no logren integrarse a los nuevos patrones emergentes, generando una inestabilidad de coexistencia, entre lo antiguo y lo nuevo; por ende, causan una crisis del sistema.

Esta crisis de coexistencia y sus efectos negativos en la sociedad, se convierten en los factores principales, por los cuales las Fuerzas Armadas actúan por decisión institucional, como la única fuerza política organizada, pasando a ser la agencia integradora de la nación. Reflejándose con esta acción, que el Estado no solo se encuentra en una etapa de marginalidad estructural, sino también de decadencia política (Costa Pinto 1974).

Otro de los factores que ha inducido a que los militares intervengan en los asuntos políticos de los Estados, es la estimulación de la vocación mesiánica de los uniformados, por parte de las fuerzas políticas civiles que han perdido el control del poder, y, a la vez han generado un ambiente de caos que amenaza la estabilidad del Estado, situación que despierta en los miembros de las Fuerzas Armadas el ímpetu de salvadores de la Patria y defensores de su pueblo.

Esta estimulación planificada, se debe a una planificación estratégica a largo plazo, diseñada y ejecutada por grupos de poder político, mismos que después de un período de “restablecimiento del orden” ejecutado por las fuerzas militares e incentivado por su vocación mesiánica, retomarán el poder cedido a los militares durante los períodos de crisis, acción que la ejecutan bajo el eslogan de “restauración nacional constitucional” y el pretexto del “retorno a la normalidad democrática”.

Durante el período del “restablecimiento del orden”, bajo un régimen militarista, se corre el riesgo que quienes ostentan el poder entiendan como una sola cosa la “administración y represión”; convirtiéndose estos gobiernos en regímenes antidemocráticos.

Los miembros del Alto Mando que ostentan el poder gubernamental y dirigen la cosa pública durante los gobiernos militares, ya estando en el gobierno, se olvidan de la transitoriedad de este proceso y tratan de cultivar la condición de permanencia en el poder, bajo un discurso de salvación nacional.

En resumen y respondiendo a las interrogantes planteadas:

1. Los procesos de transición de los Estados, llevan a los uniformados a intervenir en los asuntos políticos, por la formación de vacíos institucionales, causados por la debilidad de los partidos políticos y su incapacidad de imponer valores. Es

decir, el fracaso del sistema de partidos y la incapacidad las instituciones del Estado para resolver los problemas nacionales, incentivan a los miembros de las Fuerzas Armadas a ocupar los espacios abiertos de gobernanza y manejo del Estado.

2. Los militares son fácilmente atraídos a la participación en los procesos políticos de los Estados, debido a la manipulación de las fuerzas políticas civiles, mismas que ceden el poder a los uniformados en los momentos de una “crisis sistémica”, hasta cuando las Fuerzas Armadas logran el restablecimiento del orden, momento en el cual bajo el pretexto de haber retornado el país a la normalidad, retoman el poder los civiles con el lema “restauración nacional constitucional” e invocando los derechos democráticos de la ciudadanía. En resumen, los militares son manipulados por los grupos de poder político, aprovechándose de su vocación mesiánica de salvadores y restauradores de la Patria.

3.1.El militarismo en durante los años noventa del siglo XX en el Ecuador

Las intervenciones de los militares en los asuntos políticos de los Estados, durante la segunda mitad del siglo XX en América Latina, y, con especial interés en el Ecuador durante los años noventa, son muy diferentes a las ejecutadas en la primera mitad del siglo, debido a las transformaciones ocurridas al interior de las Fuerzas Armadas, incentivadas por los procesos sociales, económicos y políticos, vividos en los países especialmente en el último cuarto de siglo; en építome, las intervenciones militares están estrechamente relacionadas con los procesos de cambio en la educación y entrenamiento militar, ejecutados en respuesta a los procesos “sociales-militares-políticos-económicos”, provocados por la burocracia y la administración civil del Estado, la misma que se resiste a cambiar sus propios patrones y estilos, llegando a ser por la ley de causa-efecto la fuente principal donde surgen los estímulos y las provocaciones antes indicadas, que incentivan a los uniformados asumir roles no estipulados para ellos en la Constitución Política de sus Estados.

Al analizar las transformaciones ocurridas al interior de las Fuerzas Armadas, especialmente en las estructuras de la institución militar, desde inicios de los años noventa en el Ecuador, hito de partida de nuestra investigación, observamos también claramente los cambios paralelos que ocurrieron en la socialización del militar, como persona y como profesional.

Considerando, que la socialización profesional del soldado, tiende a separarle de los demás sectores sociales, en el aspecto físico y psicológico; para comprender los cambios paralelos, tenemos que analizar las segregaciones físicas y psicológicas, a las que se han visto sometidos los uniformados desde el inicio de su formación militar, a muy temprana edad, en algunos casos desde la adolescencia.

La segregación física, se ve evidenciada claramente al delimitar las áreas de vivencia y convivencia social de los uniformados a los cuarteles, a la vivienda fiscal y hasta barrios residenciales militares; por otro lado, la ritualización de las relaciones personales y profesionales; como también, por los símbolos, los saludos, la postura y hasta el uniforme (Costa Pinto 1974).

La segregación psicológica, es el resultado de la educación y los valores específicos, que la capacitación y entrenamiento militar, imprimen en la personalidad de los soldados; generando como resultado de este proceso, que la mayoría de las relaciones de cada soldado se establecen con otros militares, dentro de los patrones definidos por códigos respectivos, mismos que predominan incluso en la vida privada de cada individuo (Costa Pinto 1974).

Estos dos factores (segregación física y psicológica), reflejan la dicotomía entre la vida militar llena de sacrificios y renunciaciones, regida por la disciplina y la subordinación, marcada por la jerarquía y el orden; contrastada completamente, con la vida civil, en la cual el derecho más valorado y defendido por los ciudadanos es la libertad, sobre el cual se desarrolla la vida, en ciertos casos llena de facilidades ventajas y oportunidades, a las cuales los militares no tienen acceso.

Esta segregación voluntaria, nos lleva a relacionar a los centros e institutos de formación militar con el concepto de “instituciones totales” planteado por el sociólogo (Goffman, Erving), que textualmente dice:

“Una institución total puede definirse como lugar de residencia y trabajo, donde un gran número de individuos en igual situación, aislados de la sociedad por un periodo de tiempo apreciable, comparten en su encierro, una rutina diaria, administrada formalmente” (Goffman 1961).

En resumen, la dicotomía entre la vida militar y civil, nos hace recordar que la segregación voluntaria y extremadamente ingenua, es resultado de la educación y los valores específicos, que la capacitación y entrenamiento militar, imprimen en la personalidad de los soldados, durante su formación académica en los institutos de educación militar.

La institución militar, caracterizada por ser una organización cerrada y voluntariamente segregada, distingue a sus miembros de los demás ciudadanos, por los valores inculcados en los institutos militares; pese a ello, los cambios ejecutados en la educación y entrenamiento militar, durante década de los noventa, en reacción a las hondas transformaciones sociales, producto de las tensiones y conflictos originados desde el Estado ecuatoriano, desembocaron en un cambio de la tónica de la instrucción militar luego del conflicto armado del Alto Cenepa de 1995.

Esta nueva instrucción y educación militar, implantada por la institución militar y ejecutada por sus institutos de formación, que en el pasado estaba basada en lo heroico, en el valor frente al enemigo y el éxito en el combate, pasó a ser una nueva formación, orientada a modernizar y profesionalizar a las fuerzas Armadas, en la cual la nueva educación militar estaba orientado a lo técnico; es decir, luego del conflicto armado de 1995, las Fuerzas Armadas ecuatorianas inician una nueva fase que la podríamos definir como militarismo tecnocrático.

Los militares ecuatorianos a mediados de la década de los noventa se embarcaban en el ascenso al militarismo tecnocrático, en el marco de una tendencia regional, con el objetivo de modernizar a las Fuerzas Armadas; pero, era evidente que cuando más especializada era la formación técnica, menor era el número de los uniformados que la recibían, lo que provocó que estos cuadros superiormente calificados, lleguen a constituirse una minoría culta y la élite profesional de la institución militar.

Élite profesional que, durante su formación militar, técnica y científica, desarrollaron altas aspiraciones de liderazgo, orientadas no solo a comandar su institución, sino también a la nación. Este es el caso de los oficiales subalternos de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, que luego de haberse distinguido en su formación militar y haber obtenido las primeras antigüedades en las diferentes especialidades y promociones, fueron becados para estudiar variadas ingenierías en la Escuela Superior Politécnica del Ejército (ESPE).

Oficiales especialmente del Ejército que, al convivir con el alumnado civil por varios años, durante el desarrollo de sus estudios universitarios, fuera de lo límites impuestos por la segregación física y psicológica que normalmente se encuentran sometidos los miembros de las fuerzas Armadas, cambiarían su mentalidad, reacciones y aspiraciones; haciéndoles cada vez más semejantes a los tecnócratas civiles.

Para el caso del presente estudio, muchos de los oficiales alumnos de la ESPE, luego de su fallida incursión en la política nacional, posterior a la sublevación militar del

21 de enero del 2000, fueron atraídos por propuestas para cumplir actividades más lucrativas en la vida civil, donde sus conocimientos especializados unidos a la disciplina adquirida en la institución militar, fueron muy bien remunerados y reconocidos sobre todo en la industria.

Mientras los que decidieron seguir en la institución militar, en la actualidad son considerados como los oficiales de la nueva generación, de formación y mentalidad tecnocrática, catalogados por muchos como los “progresistas” de la institución.

Como lo dijimos en párrafos anteriores, – *mientras más especializada era la formación técnica, menor era el número de los uniformados que la recibían, lo que provocó que estos cuadros superiormente calificados, lleguen a constituirse una minoría culta y la élite profesional de la institución militar* – minoría que se denominará como “tecnócratas”. Mientras a la par la institución armada también era constituida por una inmensa mayoría de oficiales, cuya actividad principal consiste en administrar, como ejecutivos, los repartos militares, apegándose al calificativo de “burócratas de uniforme”.

Esta división institucional entre “burócratas” y “tecnócratas” de uniforme, ha generado en el tiempo una competición y acusaciones reciprocas entre los dos grupos de haber perdido la agresividad característica del soldado, como también de haber dejado disolver por la rutina las virtudes militares, entre ellas: la disciplina, jerarquía y el autoritarismo. Pero lo único cierto de esta disputa es: que lo heroico predominó en el pasado y lo técnico lucha por predominar el presente (Costa Pinto 1974).

En conclusión, se evidencia en el presente estudio que, al interior de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, mismas que se encontraban en un proceso de importantes transformaciones a finales de la década de los noventa, el aspecto heroico declinó, los procesos gerenciales se estabilizaron y la tecnocracia de uniforme se expandió; aspectos que se consideran los ingredientes fundamentales del nuevo militarismo.

Nuevo militarismo que influiría en las decisiones tomadas por los oficiales alumnos de la Escuela Politécnica del Ejército, el 21 de enero del 2000; grupo profesional que era parte activa en los cambios estructurales a los que se estaba sometiendo las Fuerzas Armadas, desde mediados de la década de los noventa. Cambios que afectaron su composición, sus valores, su mentalidad, su ideología y por consiguiente la imagen que tenían de sí mismos y de la nación (Costa Pinto 1974).

Estos cambios a los que se sometieron al grupo de oficiales que a futuro serían denominados “oficiales académicos”, generaron consecuencias internas en la institución armada, mismas que podríamos analizarlas en base a los estudios de (Janowitz, Morris),

quien desde el punto de vista sociológico recalca que dos son los patrones sobre los cuales se desarrolla la carrera del militar profesional, definidos como “reglamentario” y “adaptativo”.

El “reglamentario”, corresponde al ascenso jerárquico al que se amparan los militares, desde el inicio de su carrera al graduarse de los institutos militares hasta su jubilación, acogéndose a sus promociones casi automáticas, en las cuales el tiempo de servicio en cada grado es el principal factor de ascenso en su jerarquía, sin tener como requisito indispensable una formación técnica profesional que avale las nuevas funciones asignadas en sus subsiguientes grados.

Por otro lado, está el modelo “adaptativo” al cual (Janowitz, Morris) lo define como un modelo adaptativo de carrera, en el cual al contrario que el modelo reglamentario, se produce en situaciones de cambio acelerado y las funciones que se asignan a los uniformados son en función a su preparación académica-profesional, extracurricular a su formación militar, abriéndose de esta manera situaciones no previstas en los reglamentos ordinarios.

Situaciones, que para el caso ecuatoriano y sus Fuerzas Armadas a inicios del siglo XXI, generaron un conflicto interno en las fuerzas Armadas, ya que la preparación profesional que habían adquirido los oficiales alumnos de las diferentes ingenierías de la Escuela Politécnica del Ejército, habían generado esperanzas para los más jóvenes oficiales e inseguridad para los más antiguos quienes veían amenazadas sus asignaciones, mismas que debían ser concedidas a los más preparados de la institución, es decir los denominados “oficiales académicos”.

Las Fuerzas Armadas ecuatorianas, históricamente al regirse a patrones “reglamentarios”, las esperanzas de los jóvenes oficiales de rangos medios en ocupar cargos directivos y aplicar sus conocimientos para el desarrollo nacional, se limitaron a factores extra-militares como las intervenciones violentas en la vida política y administrativa del Estado, en clara contraposición a la mala administración y las decisiones erráticas de los gobiernos de turno. Ejemplo de ello y caso de nuestro estudio, la intervención de los oficiales académicos en la sublevación militar del 21 de enero del 2000 y su futura participación en el gobierno constitucional posesionado el 15 de enero del 2003.

Gobierno en el cual se evidenció que las catalogadas “virtudes militares” propias de la profesión militar, fueron el principal obstáculo para encajar a los militares en las esferas políticas. En definitiva, se evidenció que pese a ser un proceso democrático la

elección del presidente Lucio Gutiérrez en el año 2003, y, ésta ser una consecuencia directa del apoyo de la población civil a los oficiales que fueron parte de la sublevación militar del 21 de enero del 2000, las características de la socialización del profesional militar fueron disfuncionales con relación a las reglas del juego político (Costa Pinto 1974).

Los factores extra-militares y las intervenciones en la vida política y administrativa del Estado, han dado luces a los uniformados de las enormes diferencias entre el comandar y gobernar; injerencias que, han sido justificadas por los militares presentando razones moralistas y mesiánicas, como base de las intervenciones.

Intervenciones que han reflejado claramente las disfuncionalidades de los estilos militaristas en los gobiernos políticos, y, para superarlas han generado los uniformados una fusión entre: la tecnocracia militar y la tecnocracia civil; fusión mediante la cual los militares gobiernan y los tecnócratas administran. Convergiendo de esta manera entre los dos grupos tecnócratas las aspiraciones comunes y las frustraciones compartidas (Costa Pinto 1974).

Los jóvenes oficiales, que se han acogido a factores extra-militares, para asumir funciones políticas, incentivados por su nueva formación profesional, se consideran elementos activos para contribuir con el desarrollo nacional y sus principios adquiridos durante su formación militar, se orientan contra: el materialismo, la corrupción y otras amenazas a la estabilidad Patria y la sobrevivencia de los ciudadanos.

En resumen, estos jóvenes uniformados conceptualizan su propio papel mesiánico, cubriendo sus acciones contra el poder democrático constituido o la ilegitimidad de sus acciones de sublevación, con las mistificaciones ideológicas de la “salvación nacional”, defensa de su pueblo o la lucha contra los poderes fácticos. Sin saber que, a la final ingenuamente han colaborado en la defensa de las estructuras de poder, quienes los han manipulado, utilizado en ciertos casos a sus altos mandos militares, mismos que han recibido de distintas formas una contrapartida por los servicios secretamente prestados a los grupos de poder, especialmente de la derecha política; ejemplo de ello, el accionar del Alto Mando militar en la noche del 21 de enero del 2000 y la madrugada del 22 de enero del 2000.

Papel mesiánico y mistificaciones ideológicas, lideradas por la “oficialidad joven” y “no corrompida”, quienes se auto-consideran como el único grupo humano profesional, capaz de exigir cambios apoyados por su pueblo, a los gobiernos de los Estados colapsados, producto de las crisis sistémicas causadas por las decisiones erráticas de sus

gobernantes. Este fenómeno, se pudo evidenciar en las acciones ejecutadas por los jóvenes oficiales ecuatorianos, alumnos de la Escuela Politécnica del Ejército, durante la toma del edificio del Congreso Nacional del Ecuador, el 21 de enero del 2000.

Acciones ejecutadas por una “vanguardia militar” apoyadas inclusive por la “vanguardia universitaria” y los movimientos sociales; convirtiendo de esta manera a las fuerzas militares, en la agencia integradora de la nación, bajo la bandera tecnocrática del “progresismo autoritario” y paternalista. Enmarcadas en las nuevas tendencias del nuevo militarismo contemporáneo (Costa Pinto 1974)

“Nuevo-militarismo”, que refleja las nuevas tendencias de la ideología militarista en América Latina, a finales de los años noventa del siglo XX, especialmente en el Ecuador; mismas que, correlacionaremos con las acciones tomadas por los jóvenes oficiales, alumnos de la Escuela Politécnica del Ejército del Ecuador, el 21 de enero del 2000.

3.2.El nuevo-militarismo a finales los años noventa del siglo XX e inicios del siglo XXI, en el Ecuador

El proceso ideológico denominado “nuevo militarismo”, se diferencia en varios aspectos del “militarismo”.

Como lo habíamos analizado en el literal anterior, el “militarismo” actuaba cuando los gobiernos empezaban a perder el control del poder estatal, consecuencia de una crisis política generalizada o a causa de una crisis sistémica del Estado; siendo las mismas fuerzas políticas, las promotoras para que las fuerzas armadas entren en el juego político, por medio de una intervención militar, y, así los soldados desempeñen el papel mesiánico de salvadores de la nación, librándola de la anarquía y restableciendo el orden, todo esto con la venia del poder político. Para luego de haberse cumplido los objetivos planteados a los militares y los actores políticos consideren que la tarea ya fue cumplida por los uniformados, los mismos políticos pidan el retorno al orden constitucional y presionen la vuelta de los militares a los cuarteles.

En resumen, la iniciativa de los golpes militares bajo la ideología del “militarismo”, era la instauración de regímenes provisionales de corta duración patrocinados por fuerzas políticas civiles y luego los mismos políticos presionaban el retorno de los militares a los cuarteles, bajo el discurso del retorno al orden constitucional.

Por el contrario, el “nuevo militarismo” plantea un programa político a largo plazo, sin límites de tiempo y sobre todo fuera del control y patrocinio de las fuerzas

política. Optando los militares llegar al poder, para permanecer en él, por lo menos hasta cumplir todos los planes y programas anunciados a los ciudadanos, y, haber reemplazado el viejo orden institucional considerado por ellos inadecuado y caduco.

Viejo orden institucional, criticado especialmente por: los altos niveles de corrupción, los abusos contra la libertad de prensa, la falta de transparencia electoral, la ineficiencia del poder legislativo, la falta de representación y decisiones erráticas del poder ejecutivo; críticas, entre otras, que se convierten para el “nuevo militarismo” en las razones principales, que justifican la ejecución de sus acciones conspiratorias y la toma del poder por la vía “no democrática”, poniendo como premisa ideológica, la eliminación de los intermediarios políticos entre el gobierno y el pueblo (Costa Pinto 1974).

El “nuevo militarismo”, se presenta como una ideología en la cual los militares al tomarse el poder por la vía “no-democrática”, pretenden convertirse en la fuerza dominante e integradora del nuevo orden social y político, con el propósito prioritario de integrar a las instituciones militares con la nación. Todo ello en un proceso a largo plazo, como ya lo habíamos dicho sin límites de tiempo y sobre todo fuera del control y patrocinio de las fuerzas política civil; comandada por un gobierno militar de oficiales tecnócratas.

Para el caso ecuatoriano, la aparición del “nuevo militarismo” a finales del siglo XX e inicios del XXI, representado por la oficialidad joven del Ejército ecuatoriano, especialmente por los alumnos de la Escuela Politécnica del Ejército, se debió a la crisis sistémica ocasionada por la debilidad enorme de las instituciones del Estado y de las fuerzas políticas, contra las cuales los jóvenes oficiales académicos se levantaron con el propósito de someterlas a la autoridad de los principios, normas y reglas institucionales de las Fuerzas Armadas ecuatorianas.

Las acciones de los jóvenes oficiales académicos embanderados por el “nuevo militarismo”, el 21 de enero del 2000, fue también una reacción a la incompetencia, demagogia, mala administración y corrupción de los gobiernos populistas de la década de los noventa, los cuales fueron incapaces de asegurar la efectiva participación en el proceso político a las nuevas fuerzas sociales especialmente al movimiento indígena ecuatoriano.

Las acciones de este grupo de militares, no solo tuvo apoyo del pueblo y de los movimientos sociales; sino también, de los cuadros tecnocráticos civiles, quienes eran piezas claves en el proceso de modernización y cambio estructural del Estado. Especialistas en los sectores productivos o del conocimiento, a los cuales los gobiernos populistas les habían sometido en un estado de frustración, ya que, cuando sus

recomendaciones daban buenos resultados las glorias se llevaban los políticos, y, por el contrario, cuando los resultados no eran satisfactorios la culpa los políticos la endosaban a los expertos tecnócratas.

La convergencia entre la mentalidad militar de los oficiales académicos y la mentalidad tecnocrática de los jóvenes expertos civiles, facilitó y solidificó la alianza de estos dos grupos dispuestos a gobernar en tiempos de crisis, en beneficio de la sociedad, convirtiéndose éstos en los “bourgeois conquérants”⁵ de la América Latina contemporánea (Costa Pinto 1974).

4. Enfoque de la nación y su seguridad en los procesos de formación académica de los miembros de las Fuerzas Armadas

La seguridad de la nación es una responsabilidad ineludible de los dirigentes civiles y de los mandos militares, tanto en el ámbito interno como en el contexto internacional. En el Estado moderno hay una premisa: “no puede haber civilización sin seguridad” (Lituma Arízaga 1974).

Ante esta premisa, la educación militar ecuatoriana trata de sentar las bases doctrinarias de la “seguridad y la nación”, proyectando a que las Fuerzas Armadas y sus soldados, sean el centro del círculo vital para la sobrevivencia y estabilidad de la ciudadanía; objetivo que será alcanzado incentivando a todos los ciudadanos y a los gobernantes a construir “la seguridad y el desarrollo nacional”.

La educación militar ecuatoriana, especialmente la aplicada en formación de los cadetes de la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro”, futuros oficiales de las Fuerzas Armadas, se centra en conocer a fondo las bases político-estratégicas en las que se fundamenta el sistema de seguridad nacional. Bases que, ayudarán a los futuros oficiales y comandantes de los diferentes repartos militares a entender a la seguridad como factor de polarización de las actividades dentro de la dinámica del Estado, y, así proyectar el alcance político-estratégico de la seguridad nacional para la consecución de los “objetivos nacionales permanentes”, base fundamental del desarrollo nacional.

En síntesis, la educación militar ecuatoriana sentó sus bases doctrinarias en conceptos como: “la seguridad y la nación”, “la seguridad y el desarrollo nacional”, “la seguridad y los objetivos nacionales permanentes” y “la seguridad y la política nacional”.

⁵ Expresión del idioma francés cuya traducción al español es: “conquistadores burgueses”

4.1. Conceptos de seguridad y nación, y, su influencia en los procesos de formación académica de los miembros de las Fuerzas Armadas

Las plataformas doctrinarias militares, que sustentan el sistema de seguridad nacional, se construyen en base a dos conceptos principales, “seguridad y nación”. Conceptos orientados principalmente a concientizar a los uniformados que su misión principal es: la protección de la comunidad y garantizar la sobrevivencia de la nación.

4.1.1. Enfoque conceptual del término “seguridad” en el contexto de la nación

Al ser la razón principal de la existencia de las Fuerzas Armadas, la protección de la colectividad; ante esta premisa, la seguridad puede entenderse de diversas maneras, desde el concepto amplio de “alejamiento ante cualquier peligro”, hasta el sentido reducido de “protección a la comunidad contra los males que le inquietan”. Ante eso, podemos afirmar que no hay nada más personal para un soldado que la seguridad de su nación; seguridad que tratará a toda costa de garantizar a los ciudadanos en coordinación con las instituciones del Estado.

Por su lado el Estado Nación, apoyado en sus soldados y en los funcionarios de los organismos de seguridad, deberá promover acciones, de acuerdo a los factores, razones o motivos que generen inseguridad en el territorio nacional y en sus misiones diplomáticas en el exterior.

Los factores de inseguridad, a los cuales deberá enfrentar el Estado, pueden ser de orden material, cultural o moral.

En lo material, especialmente orientados a la falta de recursos, mismos que pueden ser naturales, de infraestructura u otros, que generen dificultades financieras y que pongan en peligro la capacidad protectora del Estado a los ciudadanos.

En lo cultural, un factor de inseguridad cuyos efectos en el tiempo atentan contra la estabilidad del Estado, es la falta de participación activa e inteligente de los ciudadanos, en los procesos culturales y políticos del país.

En lo moral, podemos reflexionar que las crisis profundas de los Estados tienen sus raíces en los campos moral y espiritual; se considera la pérdida o deterioro de estos valores, como la causa principal del surgimiento de la inseguridad dentro de las comunidades, ya que, el deterioro de éstos incentiva la confrontación de clases, de ideologías, inclusive de generaciones.

En sinopsis, en el mundo contemporáneo la palabra seguridad está relacionada a todos los ámbitos de la actividad humana y del desarrollo de la nación, en medio de una

realidad en la cual el hombre y las sociedades se encuentran rodeados de nuevas amenazas como el terrorismo, la delincuencia organizada, tráfico de drogas, tráfico de armas, ataques cibernéticos, corrupción, desastres naturales, deterioro del medio ambiente y lavado de activo; entre otros.

En conclusión y en base a las nuevas realidades, cada individuo parte de una sociedad o cada unidad política parte de un Estado Nación, tienen como finalidad la seguridad individual y de su entorno, ya que ésta no puede ser vinculada solo a un determinado aspecto de la vida jurídica del Estado, sino a todas las situaciones de la vida sobre las cuales se inter-relacionan los ciudadanos, tanto en los aspectos psicológicos, sociales, económicos y culturales, del país o jurisdicción política.

Enfoques conceptuales de la seguridad, que los comprenderemos de mejor manera, al analizar y entender los conceptos de Nación, ya que la simbiosis de estos dos términos da como resultado al modelo de seguridad y desarrollo nacional.

4.1.2. Enfoques conceptuales del término “nación”

Plantear un solo concepto genérico de la nación es muy complicado, pero vamos a tratar rápidamente revisar algunos de ellos, para de esta manera comprender la expresión “seguridad nacional”, tan empleada en la doctrina y educación militar, impartida en los institutos de formación de las Fuerzas Armadas ecuatorianas.

Uno de los principales académicos italianos del Derecho Internacional del siglo XIX, (Mancini, Pascale Stanislao), creador de la teoría acerca de la “nacionalidad” como fundamento para la aplicación del derecho extranjero, en enero de 1851 conceptualizó a la “nación” como: *“una sociedad natural de hombres que la unidad de territorio, de origen, de costumbres y de lengua lleva a la unidad de vida y de conciencia sociales”*.

También en el siglo XIX, (Renan, Ernest), en la Conferencia en la Sorbona (París), el 11 de marzo de 1882, afirmó que: *“Una nación es un alma, un principio espiritual. Dos cosas que no forman sino una. Como el individuo, es el resultado de un largo pasado de esfuerzos, sacrificios y desvelos. Una nación es, pues, una gran solidaridad, constituida por el sentimiento de los sacrificios que se ha hecho y aquellos que todavía está dispuesto a hacer...”* (Rodríguez 2010).

El profesor de Derecho Internacional (Delos, Joseph), a mediados del siglo XX, en su obra -La nación (el problema de la civilización)-, manifiesta que: la nación es una comunidad y no una sociedad, en donde el medio étnico y genético impone a los individuos una mentalidad, costumbres, elementos de cultura; estos se imprimen como

proyecciones del medio sobre las conciencias individuales, y, la conciencia nacional despierta en consecuencia de esa contribución histórica. Además, manifiesta que: la nación es una comunidad de comunidades, atadas a grupos sociales que son los puntos de fijación de la vida social, con singularidades comunes como el lugar, la lengua, la historia (Lituma Arízaga 1974).

En resumen, de acuerdo a nuestro pensamiento y como referencia los conceptos de los académicos antes mencionados, nos atrevemos a conceptualizar a la nación como un agrupamiento de individuos, incentivados por un sentimiento de solidaridad, cuyos lazos se estrechan y fortalecen a lo largo de una evolución socio-histórica-política-cultural. Estos lazos, son las fuerzas de cohesión que contribuyen a la unidad y pueden ser la raza, creencias, costumbres, tradiciones, cultura, religión, lengua, entre otras; mismas que, alimentan el deseo colectivo de continuar la vida en comunidad.

Para el caso de nuestro estudio y así entender el concepto de “Seguridad Nacional”, fusionaremos los conceptos de Estado y nación (Estado-Nación), ya que el Ecuador no solo es como conjunto de personas que tienen en común una lengua, una historia, cultura, tradiciones; sino también, es una forma de organización política que integra a una población en un territorio bajo una autoridad.

Todos estos conceptos encajados dentro de la doctrina y educación militar, como dijimos en párrafos anteriores, concientizaron a los uniformados que su misión principal es: la protección y seguridad de la comunidad, para garantizar la sobrevivencia y el desarrollo de la nación; temas que a continuación los analizaremos.

4.2.La seguridad y el desarrollo nacional, y, su influencia en los procesos de formación académica de los miembros de las Fuerzas Armadas

El desarrollo debería ser la consigna principal de los gobiernos, ya que, es la condición sinequa-non para mantener la seguridad y el bienestar de una nación.

Ante ello, y, al ser el “desarrollo nacional” la consigna angustiosa de las sociedades latinoamericanas y para establecer su íntima relación con la “seguridad”, en los siguientes párrafos analizaremos conceptualmente al “desarrollo”, además describiremos sus objetivos y las necesidades que se intenta suplir al alcanzarlo, para finalmente con el análisis de todos estos antecedentes, determinar los vínculos o relaciones existentes entre seguridad y desarrollo, y, a la vez determinar su influencia en los procesos académicos y formativos de los miembros de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, en especial durante la década de los noventa del siglo XX.

Muchos académicos han conceptualizado al desarrollo, ante ello, nosotros intentaremos hacer una síntesis de los conceptos estudiados, tratando de amalgamar todos en uno solo, ajustado a nuestra realidad y al contexto de la doctrina militar, asumiendo como premisa que el desarrollo es sinónimo de progreso. Progreso en los campos social, cultural, económico y político, mediante el cual se consigue mejorar las condiciones socio económicas de la comunidad nacional.

En síntesis, podemos concluir que: el desarrollo nacional es un fenómeno socio-cultural, que intenta instituir una sociedad en la que los ciudadanos puedan disfrutar de un bien común, orientado a alcanzar la promoción humana y la justicia social.

Fenómeno socio-cultural que tiene como objetivos a alcanzar el aumento de la producción, ampliación de los bienes de capital y la formación profesional. Formación profesional en la que también están incluidos los miembros de las Fuerzas Armadas, especialmente orientada a las tres peculiaridades establecidas en los estudios realizados por (Janowitz, Morris); en su obra “El soldado profesional”, y, que ya las estudiamos en párrafos anteriores: sus dimensiones, técnica y moral.

Dichos objetivos, se sintetizan en una mayor autonomía económica y cultural, donde predomine la libertad y la autodeterminación individual, en base a la necesidad imperiosa de acelerar el desarrollo económico del país; para así, asegurar el pleno empleo y el aumento de la renta nacional, misma que deberá ser distribuida de una manera social y económicamente justas, para alcanzar el mejoramiento del nivel de vida de la comunidad nacional.

Al alcanzar el desarrollo en base al cumplimiento de los objetivos antes señalados, alcanzaremos también la verdadera seguridad, resultado del progreso económico y social, a la vez una estabilidad política. En síntesis, a medida que progresa el desarrollo, progresa también la seguridad; determinándose de esta manera los lazos indestructibles y los vínculos inocultables, entre la “seguridad” y el desarrollo” (Lituma Arízaga 1974).

En resumen, el desarrollo y la seguridad son objetivos de la política nacional, mismos que durante la formación de los oficiales de las Fuerzas Armadas, en los institutos de educación superior militar, son inculcados como objetivos supremos en apoyo al Estado, para alcanzar el bienestar y la felicidad de los ciudadanos.

4.3.La seguridad y la política nacional, y, su influencia en los procesos de formación académica de los miembros de las Fuerzas Armadas

Antes de analizar la relación de la seguridad con la política nacional y a la vez establecer su influencia en la sociedad militar, durante los procesos de formación castrense, debemos exponer que: “la política es el marco dentro del cual unos individuos dominan a otros y los someten, en mayor o menor grado a su voluntad, relación que implícitamente determina la existencia de poder, autoridad y de un gobierno (Lituma Arízaga 1974)”.

Esta conceptualización nos lleva determinar que el Estado es concebido dentro de las sociedades modernas como el poder instituido para dirigir políticamente a una nación, con el soporte de las Fuerzas Armadas; institución parte del Estado, cuyos miembros doctrinariamente han sido formados para defender la seguridad y el bien común de los ciudadanos.

En resumen, “la política es la ciencia o el arte de gobernar un estado y dirigir sus relaciones internacionales (Lituma Arízaga 1974)”.

Partiendo del concepto anterior, podemos concluir que la “política nacional” tiene como cimientos las políticas de Estado, cuya misión fundamental es alcanzar y mantener los objetivos nacionales, sin olvidar la resolución de los problemas generales de orden social, político, económico y militar; resolución de problemas que es la aspiración básica de la ciudadanía y que ayudará a la conquista de los objetivos nacionales.

La política nacional tiene como subcomponentes la política de seguridad, en la que se considera las acciones que el poder del Estado ejecutará en caso de presentarse antagonismos que amenacen a la seguridad de la nación, como también, a la conquista y mantenimiento de los objetivos nacionales.

En conclusión, la política de seguridad nacional reglamenta el empleo coercitivo del poder no solo en el campo político, sino también en el económico, psico-social y militar. Siendo el empleo del poder militar, la última alternativa; ejecutado exclusivamente, cuando el antagonismo a superar exija el empleo del poder en su expresión más violenta.

Lo expuesto, nos permite coincidir con la conceptualización de “política de seguridad”, propuesta por la Escuela Superior de Guerra del Brasil, y adoptada en la doctrina militar ecuatoriana, que textualmente dice: *“es el arte de orientar el Poder Nacional, buscando garantizar la conquista o el mantenimiento de los Objetivos Nacionales, con la eliminación o reducción de los antagonismos o presiones existentes o potenciales”* (Lituma Arízaga 1974).

Capítulo tercero:

La revuelta militar del 21 de enero del 2000, motivaciones y protagonistas, primeras acciones, desarrollo de los acontecimientos y desenlace

El relato de las acciones ejecutadas por un grupo de oficiales subalternos del Ejército ecuatoriano, alumnos de la Escuela Politécnica del Ejército, el 21 y 22 de enero del 2000, durante la toma del edificio del Congreso Nacional del Ecuador, será antecedido por un breve análisis de las principales motivaciones y una aclaración de los verdaderos protagonistas; para luego, enfocarnos en un relato de las primeras acciones que antecedieron al desarrollo de los acontecimientos, para por último concluir con el desenlace de los hechos, catalogados por unos “sublevación militar” y por otros “revuelta militar”.

El análisis de los antecedentes, desarrollo de los acontecimientos, motivaciones y protagonistas; nos llevará a entender en particular el accionar de los oficiales subalternos del Ejército ecuatoriano, alumnos de la Escuela Politécnica del Ejército (ESPE), denominados “oficiales académicos”.

Acciones que ejecutaron los “oficiales académicos” en medio de una crisis social y económica, que marcó el término de un siglo y el inicio de otro; incentivados por las orientaciones ideológicas del “nacionalismo”, “militarismo” y “nuevo militarismo”, en el contexto del fenómeno militarista latinoamericano que influenció en la región desde los años sesenta, y, que para el caso ecuatoriano tendría un importante influjo desde los años ochenta.

Influencia ideológica y educación militar, orientadas a la profesionalización de los uniformados y al proyecto nacional de apoyo al desarrollo, cuyos cimientos se implantaron en los años ochenta, cuando en las filas del Ejército ecuatoriano, luego del conflicto de Paquisha, nació la denominada “generación ilustrada” de las Fuerzas Armadas ecuatorianas.

Denominación otorgada a un grupo de oficiales subalternos (subtenientes, tenientes y capitanes) con ideología de vanguardia, que desde los años ochenta fueron consiguiendo poco a poco un gran prestigio y liderazgo dentro de la institución militar; mismos que, en los años noventa con rango de oficiales superiores (mayores, tenientes

coroneles y coroneles), implementan los nuevos “procesos de enseñanza-aprendizaje”, en los institutos de formación superior militar, basándose en el enfoque conceptual de la nación y su seguridad, con el objetivo de alcanzar un ejército funcional al servicio del pueblo y no de las oligarquías. Procesos que, proyectaron a las Fuerzas Armadas y especialmente a los nuevos oficiales subalternos, como el centro del círculo vital, para la sobrevivencia y estabilidad del Estado ecuatoriano.

Con este antecedente, la educación militar ecuatoriana, orientada hacia una visión de profesionalización ilustrada y de compromiso social, impartida a los cadetes de la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro”, futuros oficiales de las Fuerzas Armadas, se centró en conocer a fondo las bases político-estratégicas en las que se fundamenta el sistema de seguridad nacional.

Bases que, ayudarán a los futuros oficiales y comandantes de los diferentes repartos militares, entender a la seguridad como factor de polarización de las actividades dentro de la dinámica del Estado, y, así proyectar el alcance político-estratégico de la seguridad nacional, para alcanzar la consecución de los “objetivos nacionales permanentes”, base fundamental del desarrollo nacional.

En resumen, la clave de la revuelta militar del 21 de enero del 2000, se enmarca en dos procesos:

El primero, la construcción de un poder paralelo en torno a los Parlamentos de los Pueblos; iniciativa que ejecutaron las Fuerzas Armadas, reorientando sus procesos internos, especialmente del Ejército, para alcanzar un compromiso social con los sectores rurales e indígenas, a través de acciones cívicas de apoyo al desarrollo en favor de los más marginados.

El segundo, los procesos de formación ideológica y académica, impartidas por los oficiales de la “generación ilustrada” a los cadetes de la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro” futuros oficiales de la denominada “generación de la victoria”, durante la década de los noventa; mismos que, luego del conflicto del Cenepa, ya con el grado de oficiales subalternos, serían sometidos a un proceso de profesionalización en la Escuela Superior Politécnica del Ejército, convirtiéndose los más destacados en: los denominados “oficiales académicos”.

Oficiales que, el 21 de enero del 2000 durante la toma del Congreso Nacional del Ecuador, motivados el nacionalismo y sus ideales progresistas, lograron la simbiosis de dos mitos: la proclamación patriótica de las Fuerzas Armadas y la etnización de los movimientos sociales.

1. Motivaciones y protagonistas, de la sublevación militar del 21 de enero del 2000

El objetivo principal de esta investigación es hacer una nueva lectura de los sucesos que desembocaron en la caída del gobierno del Dr. Jamil Mahuad, el 21 y 22 de enero del 2000, dar la voz a los protagonistas del hecho y examinar el papel que desempeñaron cada uno de ellos; para de esta manera, revelar las razones y antecedentes de esa decisión, relatar los hechos y acontecimientos reales, como también, establecer las consecuencias que acarrearón el haber ejecutado esa acción de rebeldía, en contra del poder político y del Alto Mando militar ecuatoriano.

El deterioro y futura caída del gobierno del Dr. Jamil Mahuad, el 21 de enero del 2000, fue el resultado del descontento social y de una profunda crisis financiera, que no solo aquejaba al Ecuador, sino también a toda la región; producto de la aplicación de políticas que debilitaron los controles a la banca privada, con el afán de generar competencia; políticas que, al final causaron resultados perjudiciales para las débiles economías de América Latina y en especial para la ecuatoriana.

El Ecuador, producto las políticas económicas y las decisiones erráticas del régimen de Jamil Mahuad, iniciaba el último año del siglo XX, en medio de una crisis generalizada y con un gobierno totalmente deslegitimado. La inflación y recesión, producto del mal manejo económico, y, las enormes pérdidas de recursos y de empleos, provocadas por la grave crisis financiera, generaron el marco para que gran cantidad de ecuatorianos opten por la alternativa migratoria, en búsqueda de oportunidades laborales, en los países del primer mundo; huyendo de la ingobernabilidad política, indolencia social y la inequidad económica (Hernández, Aráuz, y otros 2000).

La crisis generada principalmente por la toma sistemática de decisiones erróneas del gobierno de Jamil Mahuad, como el feriado bancario y el posterior congelamiento de las cuentas; se reflejó en la más grande estampida migratoria que el Ecuador ha vivido en su historia republicana.

Los compatriotas ecuatorianos huían del desempleo y la pobreza; en el año 1999 se estima que 108837 ecuatorianos abandonaron el país, aumentado este número para el año 2000, cuando 158359 ciudadanos registraron su salida del Ecuador (Ramírez Gallegos y Ramírez, La estampida migratoria ecuatoriana: crisis, redes transnacionales, y repertorios de acción migratoria 2005). Estampida migratoria que causó grandes

desajustes locales, descomposición familiar y un éxodo de emprendedores y profesionales (Verdesoto Custode 2014).

Mahuad, al ver que su gobierno estaba a punto de desmoronarse y peligraba su continuidad, como presidente de la República, toma la decisión de dolarizar la economía ecuatoriana, sin ninguna planificación, el 9 de julio del 2000; era una medida desesperada, tomada para tratar de obtener el apoyo de los sectores empresariales y de la derecha política, y, así tratar de asegurar su continuidad en el poder.

La dolarización decretada, no contrarrestó la activación de los Parlamentos del Pueblo, por parte del movimiento indígena, en todas las provincias del país, y, tampoco evitó que los dirigentes indígenas entablen reuniones con el Alto Mando militar, para proponer y planear, la revocatoria del mandato a los tres poderes del Estado (Ramírez Gallegos y Ramírez, La estampida migratoria ecuatoriana: crisis, redes transnacionales, y repertorios de acción migratoria 2005).

Ante esta realidad, las Fuerzas Armadas mantenían una dicotomía, entre los uniformados que apoyaban a los movimientos sociales e indígenas con la tesis de la revocatoria del mandato o la renuncia presidencial, y, los que preferían que el presidente termine el período para el cual fue elegido. Era visible, que quienes apoyaban la primera opción eran los mandos medios y la tropa, fieles a su formación nacionalista-militarista e influenciados por su estrecha relación con la ciudadanía, producto de su trabajo junto al pueblo que les apoyó incondicionalmente durante la Guerra del Cenepa.

En resumen, el movimiento indígena entraba nuevamente al escenario nacional, en medio de un país convulsionado, con una crisis generalizada, las Fuerzas Armadas divididas, y, con un Gobierno Nacional a punto de sustituir a la moneda local por el dólar norteamericano, para el uso en transacciones económicas dentro del país.

La dolarización decretada por el presidente Mahuad, el 9 de enero del 2000, no logró acumular el apoyo que el gobierno esperaba del sector empresarial, ya que la consideraron una medida tardía y la más clara manifestación de incapacidad del Estado para asumir formas de autorregulación y control (Verdesoto Custode 2014).

La incapacidad de gestión de las autoridades del Estado, las decisiones erróneas tomadas por el presidente y el incumplimiento de los acuerdos generados, forjaron un ambiente de desconfianza y antagonismo, de la ciudadanía con el gobierno y sus instituciones democráticas. Este ambiente, fue el caldo de cultivo de una insurgencia indígena y militar.

La protesta permanente del movimiento indígena y la creciente inconformidad de los militares jóvenes ante la crisis que se enfrentaba en el país, generaron interrogantes en las altas esferas políticas, económicas y militares; interrogantes, direccionados especialmente analizar “si las relaciones cívico-militares entre los miembros del ejército y su pueblo, durante la década de los noventa, habían germinado en un pacto indígena-militar implícito”, que decida el destino del país ante la crisis generada por el mal manejo del Estado, las élites y el poder político.

Pacto implícito, al que estaban ligados los protagonistas de la revuelta civil-militar, es decir: los oficiales subalternos alumnos de la Escuela Politécnica del Ejército, el pueblo indígena y los movimientos sociales.

Todos ellos parte de una muy bien planificada acción de engaño, orquestada desde los grupos de poder, donde se jugaron tres estrategias principales: *la estrategia de la insurrección popular*, construida por los movimientos sociales y el movimiento indígena, y, respaldada por los mandos medios del Ejército; *la estrategia del golpe militar*, elaborada por la cúpula militar; *la estrategia del recambio constitucional*, planificada por el sistema del poder constituido.

Al final, triunfa sin rostro definido, *la estrategia "sistémica"*: el heredero es el Vicepresidente Gustavo Noboa, posesionado en los salones del Ministerio de Defensa, ante un grupo de generales.

2. Primeras acciones

Utilizando el estilo de Franz Kafka, regresiones progresivas al pasado, haremos una narración de las acciones ejecutadas por los actores de la sublevación militar del 21 de enero del 2000; crónica que, se enmarcará en los antecedentes históricos, relatados en el primer capítulo de esta investigación, y, en los procesos de cambio en la educación y entrenamiento militar, analizados en el segundo capítulo.

Narración en la que exaltaremos como actores principales de estos hechos y acontecimientos, a los oficiales subalternos alumnos becados en la Escuela Politécnica del Ejército; mismos que, fueron parte fundamental del movimiento cívico-militar, que actuó en rechazo al mal manejo del Estado, y, en respuesta a la crisis generalizada que vivía el Ecuador, a finales del siglo XX.

Los hechos y acontecimientos vividos el 21 de enero del 2000 y que provocaron la salida del poder del presidente Jamil Mahuad, fueron el resultado de un largo proceso político, ideológico y doctrinario, al que se sometieron los dos grupos, actores centrales

de este hecho histórico, es decir: el movimiento indígena ecuatoriano, y, los jóvenes militares de rangos medios, alumnos de la Escuela Politécnica del Ejército.

Por un lado, el movimiento indígena, estaba inmerso en un proceso político interno; proceso que, inició con el primer levantamiento, denominado del Inti Raimy, en junio de 1990, y, prosiguió a lo largo de toda la década, como lo analizamos en el primer capítulo de esta investigación.

Por otro lado, las Fuerzas Armadas desarrollaban un cambio doctrinario en el que priorizaban las relaciones cívico-militares y la profesionalización de sus soldados. Proceso que, inició en los años noventa patrocinado por distinguidos oficiales que iniciaron sus carreras militares en los años ochenta, denominados oficiales de la “generación ilustrada”.

El movimiento indígena durante su lucha histórica, cambio paulatinamente sus propósitos; inició con la lucha por la tierra desde los años cincuenta hasta los ochenta, luego cambió su discurso en los noventa orientándolo a la lucha por la plurinacionalidad, y, cerró el ciclo en el año dos mil, criticando radicalmente la estructura del Estado, exigiendo la disolución de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), y, demandando la instauración de un gobierno denominado de “Salvación Nacional” (Dávalos 2000).

Las Fuerzas Armadas por su lado, en especial el Ejército, desde los años noventa, forman a sus nuevos miembros con una ideología de servicio a su pueblo e institucionalmente incrementan sus actividades de apoyo al desarrollo social, especialmente en las comunidades indígenas. Acciones que les sirvió a las Fuerzas Armadas para ganar cercanía con la colectividad, y, mayor respeto de la población para con los miembros de la institución militar (Equipo de Coyuntura - Centro Andino de Acción Popular 2000).

Como resultado de los procesos de cambio a los que se sometieron durante la década de los noventa, tanto el movimiento indígena en el ámbito político, como las Fuerzas Armadas en el campo académico-doctrinario, y, como consecuencia de las decisiones erróneas de las élites políticas durante este período (junio 1990 - enero 2000), los indígenas llegan a establecer una especie de coalición estratégica con soldados de rangos medios del ejército, a finales de 1999; hecho que, cambió absolutamente el panorama político ecuatoriano (Dávalos 2000).

Esta coalición estratégica entre el movimiento indígena y los oficiales subalternos del ejército, tenía como objetivo fundamental: luchar en defensa de su pueblo, y, en contra

de un gobierno y poder estatales caracterizados por una ingobernabilidad política, indolencia social e inequidad económica (Hernández, Aráuz, y otros 2000).

En este contexto, el movimiento indígena paso de ser un “movimiento de reivindicaciones” a ser “sujeto político” con opciones de poder; mientras que, los militares jóvenes pasaron de ser “obedientes y no deliberantes” a ser “deliberantes y críticos radicales” del manejo político del Estado.

En síntesis, los procesos de cambio en el movimiento indígena y en las Fuerzas Armadas, dio como resultado que sus miembros (indígenas y militares jóvenes), se amalgamaron en una simbiosis de “contra-poder”, suficientemente fuerte para poner límites efectivos a las pretensiones corruptas del poder gubernamental, que estaba bajo el dominio del capital financiero y de los banqueros deshonestos.

Las herramientas de “contra-poder”, empleadas por el movimiento indígena ecuatoriano y los movimientos sociales, siempre han sido: bloqueos, paros huelgas, levantamientos y movilizaciones; los sectores antagónicos al gobierno, utilizaron estos instrumentos de presión, para obligar al poder constituido a derogar las decisiones que iban en contra de los intereses populares.

Las únicas herramientas que los oficiales jóvenes tuvieron el 21 de enero del 2000, fueron: el apoyo ciudadano construido en una década de relaciones cívico-militares, el prestigio de ser parte de la institución con mayor credibilidad del Estado ecuatoriano y el honor de haber sido parte de la gesta heroica del Alto Cenepa.

Las élites políticas de derecha y el Alto Mando militar, nunca se imaginaron que la situación que vivía el Ecuador a finales de 1999 e inicios del 2000, influiría de manera directa en el movimiento indígena para convertirlo en un actor intransigente y radical, de la política nacional; tampoco se imaginaron que, la crisis influiría en los mandos medios del Ejército ecuatoriano (subtenientes, tenientes y capitanes), a tal punto que, los jóvenes oficiales decidan unirse a la movilización popular, en un acto patriótico militar, y, ejecuten acciones de hecho conjuntas, como la toma del Congreso Nacional el viernes 21 de enero del 2000 (Ospina 2000). Acciones por las cuales los soldados luego serían sindicados en causas penales, acusados por los delitos de sedición y rebelión.

En las Fuerzas Armadas existía una disconformidad interna, especialmente de los mandos medios, es decir, de los oficiales jóvenes; tema que era conocido por el Alto Mando militar, pero que no recibió la atención necesaria, con el pretexto de evitar una fractura institucional.

Los oficiales jóvenes y la tropa, sufrían los efectos de reducción del presupuesto militar y el pago de salarios extremadamente bajos; hechos que unidos a la inconformidad con el arreglo fronterizo negociado con el Perú y el contubernio descarado del gobierno con los intereses de la banca privada, provocaron la reacción de los miembros militares más afectados por la crisis financiera (oficiales de rango medio y tropa) y por las decisiones erróneas del Gobierno (feriado y congelamiento bancario). El Alto Mando militar, nunca esperó que estas tendencias desborden hacia una revuelta militar; desencadenando lo que ellos trataban de evitar: una fractura institucional de las Fuerzas Armadas.

La revuelta militar, protagonizada por los militares académicos, es una respuesta al malestar generado por los efectos de las políticas gubernamentales y el debilitamiento institucional del Estado; efectos y políticas, totalmente contrarias a su formación doctrinaria y a legados históricos heredados de la revolución juliana, en la cual también un grupo de militares de mandos medios, en julio de 1925, se pronunció en contra del poder ilimitado de la banca en la política nacional (Ospina 2000).

Fieles a la lealtad con su pueblo, siguiendo sus principios doctrinarios nacionalistas y militaristas, los jóvenes oficiales ya a finales de 1999 y en medio de una crisis generalizada, mostraban cada vez más evidentes signos de rebeldía y rechazo, para con el poder estatal y al Alto Mando militar. Se gestaba otra “revolución juliana”, ante el descuido de la tropa por parte de los mandos militares.

Esas señales de rebeldía, que no supo visualizar el Alto Mando militar, se reflejan en las reuniones que los oficiales de rangos medios ejecutaron a lo largo de todo el segundo semestre del año 1999, posteriores al levantamiento indígena del mes de julio del mismo año; reuniones en las que se analizaba la problemática nacional y se discutían entre los actores alternativas para salir de la misma.

Los oficiales jóvenes en todas las unidades militares del país, comentaban los discursos y pronunciamientos emitidos por oficiales coroneles; discursos de rechazo al gobierno y con un claro mensaje de cuestionamiento a los Altos Mandos militares por su actuación frente a los actos de corrupción gubernamental.

Uno de esos pronunciamientos fue el discurso del Coronel Lucio Gutiérrez, en marzo de 1999, en las instalaciones del Grupo de Caballería “General Dávalos” de la ciudad Cuenca, en presencia del General Telmo Aníbal Sandoval, Comandante General del Ejército; discurso marcado con un claro mensaje de rechazo al salvataje bancario y a la corrupción que campeaba en las altas esferas del Gobierno. El Coronel al finalizar su

discurso proclama en nombre de toda la oficialidad, un pedido para que el Alto Mando militar bajo los principios de lealtad al pueblo ecuatoriano, intervenga en la conducción del país (Hernández, Aráuz, y otros 2000).

El Coronel Lucio Gutiérrez, en su discurso proponía: “establecer una estrategia institucional para que de una manera firme las Fuerzas Armadas se conviertan en guardianes de los dineros del país, fiscalizadores de los malos políticos y ecuatorianos corruptos (Gutiérrez, Lucio)” (Ramírez Gallegos, El 21 de enero del 2000. 2000).

Luego del pronunciamiento de Gutiérrez en marzo de 1999, otro de los oficiales más respetados del Ejército ecuatoriano y Director de la Academia de Guerra, el Coronel Fausto Cobo, en el discurso por los setenta y seis años de fundación de dicho instituto militar, disertado el 9 de abril de 1999, ante -el Presidente de la República, Ministro de Defensa, Jefe del Comando Conjunto, Comandante General del Ejército, oficiales profesores y oficiales alumnos de los diferentes cursos de ascenso-, emite un mensaje muy claro al presidente, al recalcar que la educación militar en todos sus institutos de formación tiene una doctrina “humanista y pluralista”; además, el Coronel Fausto Cobo aprovechó su discurso para emitir recomendaciones al Gobierno Nacional, sobre las salidas posibles a la crisis del Estado, al plantear las conclusiones de un ensayo de su autoría, que titulaba: “Hacia un nuevo Ecuador”.

Las señales estaban claras, el descontento militar se manifestaba en los discursos de oficiales de la “generación iluminada”, respetados por su trayectoria profesional en todo el Ejército; estos discursos se replicaban en toda la institución militar y eran comentados especialmente por los oficiales jóvenes de rangos medios de la “generación de la victoria”, que veían expresado su sentir e inconformidad en dichos pronunciamientos.

La insatisfacción de los oficiales y tropa cada vez crecía más; era visible el malestar tanto en los discursos de los oficiales coroneles más reconocidos y respetados por la oficialidad joven (Fausto Cobo, Lucio Gutiérrez), como en los acalorados y profundos debates ejecutados por la juventud militar, especialmente los oficiales subalternos (oficiales de rangos medios: subtenientes, tenientes y capitanes), en los corredores de la universidad de las Fuerzas Armadas y en todas las unidades militares del país.

El Alto Mando militar, conocía de la insatisfacción que había entre los miembros de las Fuerzas Armadas, y, sabía que al ejecutar acciones en contra los oficiales que

habían hecho público el malestar institucional, como arrestos o separaciones de la institución, generarían a un conflicto interno inmanejable.

La cúpula militar, para evitar un resquebrajamiento institucional, opta por una estrategia conciliadora al interno de la institución, mientras a la par los generales manejaban el escenario de la dimisión presidencial, para impedir la ruptura institucional de las Fuerzas Armadas y el desmoronamiento del país (Ospina 2000).

El camino estaba claro; en diciembre de 1999 ya la cúpula militar había sugerido al Presidente de la República la sucesión presidencial, como una salida a la crisis política y social, en que se encontraba inmerso el país. La salida sugerida por el mando militar al poder político, debía ser voluntaria y sin ninguna acción castrense.

Si bien es cierto el mando militar conocía de la insatisfacción que había entre los soldados, pero sus análisis prospectivos y de inteligencia, en ningún momento pronosticaron una posible sublevación militar de los oficiales de rangos medios.

Craso error, no considerar el malestar de los oficiales de rangos medios y las acciones que esto generaría.

La primera quincena del mes de noviembre de 1999, mientras el Ecuador se encontraba convulsionado políticamente, hasta sus volcanes Guagua Pichincha y Tungurahua, manifestaban la inconformidad con una intensa presencia de explosiones freáticas y expulsión de grandes cantidades de ceniza.

En ese contexto se desarrollaban las primeras reuniones de jóvenes oficiales del Ejército, para buscar una salida a la problemática nacional; análisis ejecutados en los corredores de la Escuela Politécnica del Ejército (ESPE), unos con la seriedad del caso, otros en tono de broma; pero todos con el mismo fin: “salvar a la patria...”.

Estos acalorados debates y profundos análisis, desarrollados en los corredores universitarios de la Escuela Politécnica del Ejército, ejecutados entre la juventud militar, que luego la prensa denominaría “militares académicos”, cobraron fuerza a finales del mes de noviembre, cuando los todos los oficiales alumnos de planta de la ESPE (Escuela Politécnica del Ejército), fueron convocados a una reunión en el coliseo de deportes de éste instituto de educación superior, por los capitanes Guillermo Rosero, Alex Guzmán y Sandino Torres.

Dicha reunión aparentemente tenía la finalidad de tratar asuntos relacionados con la organización de las actividades que se desarrollarían en el Campus Politécnico, por la navidad en diciembre de 1999; este era únicamente el pretexto antes consensuado por los oficiales ideólogos de este movimiento, para reunir a todos los oficiales alumnos, sin

generar suspicacias de los oficiales de mayor rango. Era lo más prudente y seguro, para evitar la fuga de información y posibles represalias por parte de los directivos de la Escuela Politécnica del Ejército (ESPE) y del Alto Mando militar.

Aquella reunión fue liderada por los Capitanes Guillermo Rosero, Alex Guzmán y Sandino Torres Rites; en una primera fase se trataron temas administrativos de la ESPE, hasta cuando los capitanes antes mencionados refirieron al auditorio, es decir a los oficiales alumnos de la ESPE, la situación que vivía el País producto del mal manejo económico, las decisiones erráticas del Gobierno, el feriado bancario y el congelamiento de las cuentas de los ahorristas.

Se lanzó la interrogante: ¿Cuál era su pensamiento sobre este tema? y ¿Qué proponían los oficiales?, considerando que la misión principal de todo soldado es defender a la patria y a su pueblo.

Las exposiciones se tornaron cada vez más acaloradas, iniciando con propuestas de “manifiestos escritos” a ser entregados a la prensa, en los que se relataría el malestar de la oficialidad y la decisión de desconocer al Presidente de la República; llegando inclusive a proponerse acciones más radicales que impliquen el uso de las armas.

Acciones con el uso de las armas, que proponía uno de los oficiales aparentemente más radical, pero que a la final fue uno de los primeros traidores, quien en voz alta ante el auditorio manifestaba “que era hora de hacer uso de las armas en defensa de nuestros compatriotas”. Discurso incendiario que solo quedó en la retórica de aquel individuo desleal y traidor; individuo que, luego de los hechos del 21 de enero, sería el encargado de redactar el listado con los nombres de los oficiales insurrectos, para su judicialización.

Los oficiales de menor rango, también participaron con sus propuestas, entre ellas una en la cual se planteaba la toma del Congreso Nacional del Ecuador; propuesta que fue catalogada anecdóticamente en aquel momento como la locución más descabellada de dicha asamblea de oficiales, y, al subteniente que expuso esta sugerencia, le manifestaron los miembros del auditorio, que estaba loco, por proponer tan absurda opción. A la final la propuesta descabellada fue la que por jugadas del destino se ejecutaría el 21 de enero del 2000.

Luego de aquella acalorada reunión, en la cual se plantearon varios escenarios; por consenso de todos los oficiales de las tres fuerzas Ejército, Marina y Aviación, asistentes a dicha asamblea, se aprobó la decisión de redactar un manifiesto, que exteriorizaría el malestar de los mandos medios frente a las acciones políticas del Gobierno y a su manejo económico; en el mismo documento desconocerían al Alto

Mando militar, por su ineptitud en el manejo de la Fuerzas Armadas, frente a la inestabilidad y crisis del Estado.

Este manifiesto nunca se redactó y tampoco se entregó a la prensa, ya que luego de la asamblea de los oficiales alumnos de la Escuela Politécnica del Ejército, pese a haber existido un pacto de honor entre los asistentes, *-que lo tratado aquel día no iba a salir del grupo de oficiales subalternos y peor que se comentaría ante oficiales superiores y generales de las Fuerzas Armadas-*, este no se cumplió.

Para sorpresa de todos los uniformados que asistieron a dicha reunión, los detalles fueron informados por uno de los oficiales subtenientes de la Aviación a sus superiores en la dirección de inteligencia de la Fuerza Aérea, organismo que inmediatamente informaría al Alto Mando de las Fuerzas Armadas, sobre lo que estaba ocurriendo en la Escuela Politécnica del Ejército. Esta fue la primera traición que enfrentarían los “oficiales académicos”, a finales del año 1999.

El Ecuador inició el año 2000, con un Presidente de la República sin legitimidad y una situación económica nacional caótica; escenarios generados a consecuencia de un gobierno que se desarrolló bajo el imperio de la corrupción y la impunidad, con el único propósito de proteger a las élites económicas y a la banca privada, en desmedro de la calidad de vida del pueblo ecuatoriano.

Producto de estas realidades, el movimiento indígena comenzó a organizar reuniones con miembros de las Fuerzas Armadas de diferentes jerarquías, desde finales del año 1999; encuentros que, buscaban conseguir el respaldo de los uniformados, previo a las nuevas acciones que ejecutarían a principio del 2000.

El 4 de enero del 2000, ante la fuerte caída de la cotización del sucre frente al dólar norteamericano y el temor a la hiperinflación, corría ya el rumor que el Ejecutivo planeaba ejecutar medidas económicas, que cambiarían el manejo económico y monetario del Ecuador. Había dos alternativas que manejaban el gobierno; el modelo argentino de la convertibilidad, o, el modelo panameño de la dolarización.

Ante dichos rumores, la dirigencia del movimiento indígena anunció una protesta nacional indefinida, que se ejecutaría desde el 15 de enero del 2000; acción de hecho a la que se sumarían nuevamente los transportistas, gremios sindicales y campesinos, como en ocasiones anteriores.

La primera semana del año 2000, se produjo una devaluación del sucre del 30%, producto de la inestabilidad económica y política, que aquejaba al país. Corrieron ya desde esos días fuertes rumores de un posible golpe de Estado, que ejecutarían los

militares (Lucas, Ecuador cara y cruz - Del levantamiento de los noventa a la Revolución Ciudadana 2015).

Las Fuerzas Armadas ante la presión del pueblo ecuatoriano, los fuertes rumores de golpe de Estado y las constantes reuniones conspiratorias de la dirigencia indígena con diferentes actores militares; por intermedio del Consejo de Generales, el 7 de enero del 2000 piden al presidente Jamil Mahuad informar al país: “que se va a extraditar a los banqueros prófugos y serán confiscados sus patrimonios, que se detendrá la corrupción en las aduanas y que se ejecutará políticas apropiadas en referencia a los temas petroleros y modernización del Estado” (Ramírez Gallegos, El 21 de enero del 2000. 2000).

Pronunciamiento presidencial, sugerido por el Consejo de Generales de las Fuerzas Armadas, para evitar que el pueblo entre en un estado de desobediencia civil que desemboque el caos y anarquía.

El Consejo de Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas, en adición a los pedidos antes expuestos, también expresó que: “rechazan todo intento de ruptura del ordenamiento jurídico”; mensaje que iba direccionado al presidente Jamil Mahuad, frente a los rumores de un posible intento de auto-golpe de Estado, que personas cercanas al presidente estaban planificando y que inclusive habían gestionado el respaldo del General Carlos Mendoza, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, para ejecutar de este propósito.

Jamil Mahuad hizo caso omiso a los pedidos del Consejo de Generales, el 9 de enero del 2000 anunció únicamente la dolarización y el cambio de gabinete ministerial. El Ministro de Defensa ante la omisión presidencial a los pedidos de los militares y con el apoyo del Ministro de Agricultura, presentó su reclamo al presidente Mahuad en sesión de gabinete, el 10 de enero del 2000. Este acto no fue del agrado del presidente, ante lo cual tomó la decisión de cesar en sus funciones a los dos ministros de Estado.

El anuncio de la dolarización el 9 de enero del 2000, caldeó los ánimos del movimiento indígena y de los movimientos sociales; pese a que esta decisión presidencial en parte mejoró la imagen de Jamil Mahuad ante los empresarios, no evitó que el 11 de enero del 2000, se instaure el Parlamento Nacional de los Pueblos del Ecuador.

Dicho parlamento, el 12 de enero del 2000, resolvería: desconocer el paquete de medidas comunicadas por el Presidente de la República, exhortar a la sociedad ecuatoriana a la desobediencia civil, y, disponer a las bases del movimiento indígena un levantamiento y movilización a Quito, con el objetivo de destituir al Presidente de la Republica, revocar los tres poderes del Estado e instaurar de un Gobierno del Pueblo.

El objetivo inmediato de este parlamento, integrado por trescientos treinta representantes de la sociedad civil e indígenas, sería: elegir una Junta de Salvación Nacional, que deberá reemplazar al gobierno liderado por Jamil Mahuad, e, instituir un régimen de “justicia popular”, propuesto por Carlos Solórzano Constantine, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia.

A la par, la dirigencia de la CONAIE advierte la toma de la ciudad de Quito, por parte del movimiento indígena; movilización que iniciaría el 15 de enero del 2000, desde las diferentes comunidades indígenas del país, para cumplir la amenaza de tomar de capital, en cumplimiento de las resoluciones del Parlamento Nacional de los Pueblos del Ecuador.

La dirigencia indígena, simultáneamente a la convocatoria al levantamiento y movilización a Quito, mantuvo nuevamente reuniones con el Alto Mando militar, en las que pedían el apoyo castrense para la disolución de los tres poderes del Estado y la revocatoria del mandato presidencial (Ramírez Gallegos, El 21 de enero del 2000. 2000), en base a lo acordado por el Parlamento Nacional de los Pueblos y como una salida a la crisis que vivía el Ecuador.

El 14 de enero del 2000, el movimiento indígena agrupado en la CONAIE, mantenía ya bloqueadas las carreteras de todo el país, especialmente de la Sierra y Amazonía, a la par movilizó a más de cincuenta mil indígenas como parte de la marcha hacia Quito.

La Coordinadora de Movimientos Sociales, liderada por Napoleón Saltos; hace público que todas sus organizaciones de base se unen a la protesta indígena, y manifiesta que ésta acción conjunta no se doblegará, hasta conseguir el objetivo de derrumbar el proceso de dolarización, anunciado por el Gobierno. Además hace público un pedido a los organismos y comunidad internacional, para que se mantengan vigilantes del desarrollo de los acontecimientos en el Ecuador (Lucas, Ecuador cara y cruz - Del levantamiento de los noventa a la Revolución Ciudadana 2015).

Como lo habían anunciado la CONAIE y la Coordinadora de Movimientos Sociales, el 15 de enero del 2000 se inicia un nuevo levantamiento indígena indefinido; los dirigentes indígenas y de los movimientos sociales, manifestaron públicamente que la protesta no se detendrá hasta conseguir el objetivo planteado por el Parlamento Nacional de los Pueblos del Ecuador, y, lograr que un nuevo Gobierno integrado por miembros de las Fuerzas Armadas, delegados de los movimientos sociales y profesionales

independientes (Lucas, Ecuador cara y cruz - Del levantamiento de los noventa a la Revolución Ciudadana 2015).

Para el 17 de enero del 2000, los dirigentes indígenas y de los movimientos sociales, denunciaron la detención de tres dirigentes sindicales, acción que fue ejecutada por orden del Gobierno, el día sábado 15 de enero del 2000. Además, informaron al país que la marcha con miles de indígenas llegará a la capital entre los días martes 18 de enero y miércoles 19 de enero del 2000.

A las primeras horas del martes 18 de enero del 2000, más de ocho mil indígenas llegaron a Quito, para ejecutar su toma emblemática, mientras se esperaba la llegada de diez mil indígenas hasta el miércoles 19 de enero del 2000; con este contingente social se presionará el cumplimiento de lo dispuesto por el Parlamento de los pueblos, en especial la derogación de la dolarización.

Las actividades académicas de los militares alumnos de la ESPE, que, desde la última reunión realizada dos meses atrás, se desarrollaban en una tensa calma, se vieron sorpresivamente interrumpidas; ante el asombro de todos los militares que prestaban servicios en ese instituto de educación superior, los generales del Alto Mando militar, llegaron al campus de la Escuela Politécnica del Ejército, el 17 de enero del 2000.

Ante tal inesperada y sorpresiva visita, los oficiales alumnos recibieron la orden de asistir a una reunión urgente, ya que el Comandante General del Ejército, General Telmo Aníbal Sandoval, necesitaba impartir una orden directamente a los oficiales alumnos y directivos de la Escuela Politécnica del Ejército, en medio de la crisis y el “estado de emergencia” que regía en el país.

Ante la orden, todos los oficiales nuevamente se reunieron. Era verdad, ¡todo el Alto Mando! se encontraba ahí frente a ellos; frente a todos los oficiales que semanas antes se habían reunido en el coliseo de la Escuela Politécnica del Ejército para tomar decisiones frente a la situación de inestabilidad social y crisis de gobernabilidad que vivía el Ecuador.

Pese a los pactos de secreto, el Alto Mando militar y los organismos de inteligencia, conocían con punto y coma todo lo que se había tratado dos meses atrás, en la supuesta reunión reservada, de los oficiales alumnos de la ESPE, quienes en un pacto de caballeros habían jurado no informar a nadie sobre lo acordado y las acciones que iban a tomar; pero fueron traicionados ante la deslealtad de un oficial fisgón que divulgó la información.

En base a la información, que los organismos de inteligencia habían entregado al Alto Mando militar, los generales censuraron y llamaron la atención a los oficiales académicos de la ESPE, por la postura frente a la realidad del país y los comentarios que ellos (Subtenientes – Tenientes – Capitanes) habían emitido, en la supuesta reunión secreta; acciones que, según los generales del Mando Militar, iban contra el principio de “obediencia y no deliberancia”, al que todo soldado debía acogerse.

El General Telmo Aníbal Sandoval, Comandante General del Ejército, pidió a los oficiales le expresen su sentir y la que tenían frente a la situación que se encontraba el país. Les pidió que, como soldados de la patria, le informen las razones por las cuales decidieron reunirse semanas atrás y las decisiones que habíamos acordado. Razones que el Alto Mando muy bien las conocía y decisiones que ya les había informado, un oficial pérfido.

Ante el pedido de su Comandante General, varios oficiales manifestaron sus inquietudes, con la diplomacia y la subordinación que su formación les exigía y su educación les caracterizaba; hasta que, a ¡sorpresa de todos los asistentes!, solicitó la palabra el Teniente Alex Vinuesa, personaje caracterizado por no ser nada diplomático y de postura frontal, particularidad característica de los comandos y soldados del fuerzas especiales, quien con un tono fuerte manifiesta a nombre de sus compañeros el malestar que los soldados sentían frente a la situación del país, y, termina su alocución diciendo:

“¡No quisiera pensar Mi General! que usted también sea parte de esto y defienda a los políticos corruptos”

Ante tan fuerte comentario dirigido a la primera autoridad del Ejército ecuatoriano, el General Telmo Aníbal Sandoval muy molesto responde:

“¡Siéntese teniente Malcriado!”

“¡yo soy el Comandante General del Ejército Ecuatoriano, y, no me temblará ni el brazo ni la pierna, para tomar el mando de país y corregirlo!”

Ante esta respuesta enérgica y contundente, del General al Teniente; en las mentes de todos los oficiales académicos se imprimió el mensaje subliminal “que el Comandante General del Ejército estaba alineado con la causa de los oficiales de rangos medios”, y, que las futuras acciones que ellos ejecuten, para corregir el rumbo del país, serían apoyadas por el General Telmo Aníbal Sandoval.

Luego de aquel día, el ambiente en el campus politécnico se volvió muy tenso, llegando inclusive el Rector de la Escuela Politécnica del Ejército a disponer que los oficiales alumnos estaban prohibidos ejecutar reuniones y que serían sancionados

disciplinariamente, si desobedecían esa orden. Se consideraría un acto de indisciplina militar tener tertulias de más de tres uniformados, en las instalaciones de la ESPE, especialmente si el tema de debate o conversación era político, económico o social, relacionado a la realidad que vivía el país.

Pese a las amenazas y posibles sanciones, los debates entre los oficiales siguieron y su malestar aumentaba frente a la realidad caótica que vivía el Ecuador.

Los acalorados debates y la búsqueda de soluciones, se basaban en la situación del Ecuador; que a diciembre de 1999 había cerrado el año con la mayor crisis financiera del siglo XX, que al 52,18% de la población hundió en la pobreza y al 20,10% en la indigencia (El Telégrafo 2012).

En los debates se sentía el malestar, que no solo afectaba a la sociedad civil, sino también a los militares especialmente de rangos medios y a la tropa; los oficiales académicos más antiguos (capitanes y tenientes), realizaban análisis prospectivos sobre cuál sería el desenlace de la situación. Estos análisis se basaban especialmente en los rumores que circulaban, del malestar militar en todas las unidades del Ejército ecuatoriano; entre otras, la Brigada de Caballería Blindada No. 11 “Galápagos” acantonada en Riobamba, la Brigada de Fuerzas Especiales No. 9 “Patria” asentada en Latacunga, el Batallón Escuela del Comunicaciones “Rumiñahui” de Quito, la Aviación del Ejército, Academia de Guerra.

El 19 de enero, ante la presión popular, con un país semiparalizado y la ciudad de Quito sitiada por más de doce mil indígenas; el Gobierno pide dialogar con los grupos alzados en protesta. Diálogo que nunca se ejecutó, por el condicionamiento planteado por el Gobierno, de deponer la decisión tomada por el Parlamento de los Pueblos: “cesar los tres poderes del Estado”.

Como lo había planteado la CONAIE desde el 7 de enero y ratificado el 12 de enero del 2000; las acciones propiciadas por los indígenas desde el 15 de enero del 2000, convergerían en que más de doce mil indígenas rodeen los edificios del Congreso Nacional del Ecuador y la Corte Suprema de Justicia. Instalaciones que se encontraban resguardadas por miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, al mando del General Carlos Moncayo, hermano del ex Jefe del Comando Conjunto y Héroe Nacional, General Paco Moncayo; efectivos que mantenían un fuerte cerco para evitar que los indígenas, campesinos y miembros de los movimientos sociales, se tomen los edificios símbolos de la Democracia y de la Justicia del Ecuador.

3. Sublevación militar de los oficiales subalternos de las Fuerzas Armadas del Ecuador, 21 de enero del 2000

El 21 de enero del 2000, muchos lo consideran como una fecha en que se realizó un levantamiento popular con apoyo del Ejército; pero, realmente fue el día en que las fuerzas sociales se unieron a los mandos medios de las Fuerzas Armadas del Ecuador, y, rompiendo todos los procedimientos formales de la democracia, los soldados dejaron de ser únicamente árbitros para pasar a ser actores de las demandas ciudadanas.

La crisis económica en que se encontraba el Ecuador a finales de los años noventa e inicio del dos mil, afectó al bienestar toda la sociedad ecuatoriana incluidos los militares, especialmente a los mandos medios y la tropa, situación que se vería empeorada con la implantación forzada de la dolarización (Ramírez Gallegos, El 21 de enero del 2000. 2000).

Si la mecha fue el “malestar civil y militar”, generado por el Gobierno Nacional y su mal manejo del Estado, el detonante de aquel suceso histórico que vivió el Ecuador el 21 de enero del 2000 sería “la dolarización”; es decir, la eliminación como moneda oficial del Ecuador “el Sucre”, con 116 años de haber sido instituido con decreto de creación firmado el 22 de marzo de 1884 por el Estado ecuatoriano, y, reemplazado por “el Dólar”, creado como unidad de circulación por los Estados Unidos de Norte América, a partir del 2 de abril de 1792.

3.1.Desarrollo de los hechos

Esta es una narración y un análisis, de los hechos del aquel 21 y 22 de enero del 2000, que como dice Javier Cercas en su obra “Anatomía de un instante”, *éste texto es: “un ensayo en forma de crónica o una crónica en forma de ensayo” no es ficción* (Cercas 2009), es la realidad que vivió el Ecuador en medio de un caos institucional, resultado de una crisis política, descontento social, e, insatisfacción de los miembros de las Fuerzas Armadas de rangos medios y tropa, para con el Estado.

Ante la contundente manifestación ciudadana a lo largo de todo el territorio nacional, y, con un país semiparalizado desde el 15 de enero del 2000; las Fuerzas Armadas, especialmente los jóvenes oficiales ponían objeción y rechazo, a defender una democracia marcada por la corrupción, a costa de emplear su contingente en contra de la ciudadanía y especialmente del pueblo indígena, que años atrás habría dado un apoyo incondicional a las Fuerzas Armadas, en la Guerra del Cenepa.

“El malestar” de la oficialidad joven y la tropa, ante la inminente orden de reprimir al pueblo levantado en protesta, y, “la indignación” de ver al Estado capturado por intereses: privados, particulares y corporativos; serían parte de los motivos, por los cuales los oficiales alumnos de la ESPE, interpelarían al Estado y desconocerían al Alto Mando militar, en la mañana del 21 de enero del 2000 (Ramírez Gallegos, El 21 de enero del 2000. 2000).

El descontento militar, tenía como ingrediente principal el rechazo personal de los soldados a los políticos, producto de las malas condiciones de vida que habían generado para la clase media y baja de la sociedad ecuatoriana. Además, los soldados al ser parte de ésta sociedad, también se encontraban inmersos en estas malas condiciones; pese a que Mahuad meses atrás había realizado un incremento de sueldos a las Fuerzas Armadas, pero en una escala considerada injusta por los militares, especialmente los de rangos medios y tropa.

Este sentimiento, fue el factor que permitió la articulación entre los mandos medios del Ejército ecuatoriano y el movimiento indígena; movimiento que, ya para el 20 de enero del 2000, habían rodeado el Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia, con más de doce mil indígenas, en cumplimiento a la amenaza de tomar las instituciones de los tres poderes del Estado, para exigir el cumplimiento de las resoluciones del Parlamento Nacional de los Pueblos del Ecuador, instaurado desde el 11 de enero del 2000.

La mañana del 21 de enero del 2000, los jóvenes oficiales de la Escuela Politécnica del Ejército, como era rutinario en sus actividades castrenses, formaban para pasar su “parte militar”, ante sus superiores jerárquicos y su comandante, el Coronel Gustavo Tapia, rector de la Escuela Politécnica del Ejército.

Luego de haber recibido el Coronel Gustavo Tapia los honores militares y “el parte” numérico de asistencia de los soldados de dicho instituto de formación superior, regentado por el Ejército Ecuatoriano; se dirige ante sus subordinados con voz enérgica y amenazante, increpándoles: que está estrictamente prohibido las reuniones entre militares que tengan la finalidad de tratar asuntos relacionados con la situación política del país y más aún que tengan tintes conspiratorios ante el orden democrático constituido.

El Coronel Gustavo Tapia, intentando atemorizar a los militares académicos, emite la amenaza, *que todo oficial alumno de planta o con cargo administrativo de la ESPE, que propicie reuniones de más de tres individuos, con temas políticos o conspiratorios, será arrestado o inclusive se atenderá a la separación de la Escuela*

Politécnica del Ejército. Amenaza que, poco o nada les atemorizó a los oficiales de rangos medios.

Mientras el Coronel Gustavo Tapia en su alocución amenazaba a los oficiales, que gallardos se encontraban formados; el Capitán Alex Guzmán, destacado oficial del Ejército ecuatoriano, mismo que se encontraba validando en la ESPE sus estudios de ingeniería en armas cursados en la República de Argentina, caminaba prudentemente detrás la formación de los militares y con voz baja informaba a todos los oficiales alumnos, *que luego del “parte militar” se reunirían en el edificio de la residencia universitaria, porque era el “Día D”*, término militar utilizado para informar que era el día de la ejecución de lo planificado.

El rector de la Escuela Politécnica, terminó de emitir sus disposiciones y ordenó a los oficiales alumnos dirigirse a sus respectivas aulas; pero, ante el pedido disimulado del Capitán Alex Guzmán, la mayoría de los militares cambiaron de ruta y se dirigieron a la residencia universitaria. Excepto algunos, que, por temor a las amenazas del Coronel Gustavo Tapia, se dirigieron a las aulas, y, otros que, por cobardía huyeron a esconderse en sus habitaciones de la residencia universitaria, para evadir el compromiso que habían adquirido en la reunión liderada por los capitanes Guillermo Rosero, Alex Guzmán y Sandino Torres Rites, realizada a mediados de noviembre de 1999.

Ya en la planta baja de la residencia universitaria, los oficiales académicos, la mayoría con el grado de subtenientes, esperaban alguna disposición de los oficiales más antiguos, en especial de los Capitanes Guillermo Rosero y Alex Guzmán o Sandino Torres.

Quien se pronunció ante los jóvenes oficiales, fue el Capitán Alex Guzmán, manifestándoles que *esta acción era voluntaria y a ningún militar se le obligaba a participar*. La acción a ejecutar era: tomarse el edificio del Congreso Nacional, con el apoyo de los oficiales alumnos de la Academia de Guerra del Ejército.

Apoyo que, en la realidad nunca se ejecutó, ya que los alumnos de la Academia de Guerra, oficiales con el grado de mayores, llegaron al Congreso Nacional cuando las cosas estaban consolidadas y no cuando tenían que frentear el peligro, al incursionar en el edificio del poder legislativo.

La decisión estaba tomada, el grupo de oficiales de rangos medios se movilizaría voluntariamente al Congreso Nacional; pero había un problema, como fue una acción no planificada, nunca se consideró como se movilizarían los oficiales alumnos de la ESPE,

desde su universidad ubicada en la ciudad de Sangolquí, hasta las inmediaciones del Congreso Nacional, situado en la ciudad de Quito, para ejecutar este propósito.

En medio de la euforia, se plantaba alternativas, como confiscar buses de transporte urbano de la compañía Vingala C.A., que cubrían la ruta Sangolquí-Quito, o, de alguna manera conseguir que los buses institucionales de la Escuela Politécnica, ejecuten ese recorrido.

Por jugada del destino, el Subteniente Marco Flores, oficial administrativo de la ESPE y encargado del parque automotor de este instituto de educación superior, pasaba por el lugar donde los oficiales alumnos se habían concentrado, y, ante el pedido de uno de sus compañeros de promoción, como también por la solicitud del Capitán Alex Guzmán que les facilite tres buses institucionales, accede a los pedidos, y, dispone utilizando su radio de comunicaciones, al personal de conductores que movilicen tres buses a la prevención, para ejecutar un recorrido. Recorrido que, hasta eso momento el oficial no sabía hacia donde era, y, para que se movilizarían los oficiales alumnos, en dichas unidades de transporte.

Ya con los medios de transporte disponibles, los oficiales muy ordenadamente proceden a embarcar en los buses que les movilizarían a las inmediaciones del Congreso Nacional, donde supuestamente se encontraban los oficiales alumnos de la Academia de Guerra del Ejército.

Ya embarcados casi todos los oficiales y a punto de salir los buses desde la ESPE con dirección a Quito, el único que no sabía a donde se movilizaban los oficiales alumnos, era el oficial que facilitó los autobuses, el Subteniente Marco Flores; quien ese momento hace la pregunta:

¿A dónde se dirigen los oficiales?

Interrogante ante la cual, otro subteniente, compañero de promoción, le responde:

¡A tomarnos el Congreso Nacional!

Momento en el cual, él también decide unirse y exclama:

¡entonces yo también me voy con ustedes!

Ya iniciado el recorrido, con dirección al Congreso Nacional, en uno de los buses, el Subteniente Juan Carlos Sandoval, se dirige verbalmente al resto de oficiales, algunos de promociones superiores a él, y, en voz alta manifiesta:

“Señores oficiales, esto que hemos decidido hacer hoy, es por nuestra patria, es una acción voluntaria, nadie nos está ordenando que lo hagamos; quien no esté de acuerdo, simplemente debe manifestarlo, y, respetaremos la decisión. Si la

decisión es retornar a la Escuela Politécnica, simplemente tienen que decirlo; caso contrario, si todos están de acuerdo en la acción que vamos ejecutar, debe quedar claro que en esta decisión no hay el color gris, es blanco o negro, o resulta o nos jodemos. Que Dios nos ayude ...”

Luego de las palabras del Subteniente Juan Carlos Sandoval, en la mente de cada uno de los oficiales, se preguntaban si hacían lo correcto o no...

Mientras el viaje continuaba, el Subteniente Juan Carlos Sandoval, preguntaba al Capital Sandino Torres, quien también se encontraba en el mismo autobús:

¿cuáles son los miembros militares que están esperando la llegada de los oficiales de la ESPE, para ejecutar la toma del Congreso Nacional?

El capitán responde, ante la interrogante del subteniente:

“los oficiales alumnos de la Academia de Guerra, además la Aviación del Ejército sobrevolará el edificio del Congreso, la Brigada de Caballería Blindada y la Brigada de Fuerzas Especiales también se manifestarán en apoyo a la toma del edificio del Congreso Nacional”.

Ante ese panorama, supuestamente los oficiales académicos, solo harían acto de presencia...

Al llegar los “oficiales académicos”, a las inmediaciones del Congreso Nacional, se toparon con la ingrata sorpresa que eran los únicos oficiales que estaban ahí; no estaban ni los oficiales alumnos de la Academia de Guerra y tampoco ninguna aeronave de la aviación del ejército sobrevolaba ese sector.

Ante ello, el Capitán Guillermo Rosero, dispone al Subteniente Sandoval que se movilice con otro oficial hasta las instalaciones del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, que en aquella época funcionaba junto al hospital militar, muy cerca del Congreso Nacional, para que verifiquen si talvez los oficiales mayores y coroneles de la Academia de Guerra se encontraban ahí.

Los oficiales se dirigieron al edificio del instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, pero al llegar verificaron que tampoco se encontraban ahí ningún oficial. La realidad era, que los mayores y coroneles, se encontraban cómodamente en la Academia de Guerra, nunca tuvieron la intención de salir al Congreso Nacional; es decir, los oficiales alumnos de la ESPE se encontraban solos, ante la decisión de tomarse las instalaciones del Congreso Nacional.

Los oficiales que fueron enviados a verificar si los mayores y coroneles de la Academia de Guerra se encontraban en el sector del Instituto de Seguridad Social de las

Fuerzas Armadas, retornaron a donde se encontraban sus compañeros, e, informaron al Capitán Guillermo Rosero, que ningún oficial de la Academia de Guerra se encontraba en ese sector.

Considerando que el edificio del Congreso Nacional se encontraba resguardado por un fuerte contingente militar, el Capitán Alex Guzmán dispone al Subteniente Juan Carlos Sandoval, y, a otros oficiales, acercarse al personal de tropa miembros del contingente de la seguridad legislativa, para convencerles que apoyen la acción que iban a ejecutar los oficiales de rangos medios en ese momento.

Los oficiales cumpliendo el pedido del Capitán Rosero, se acercaron a los miembros militares encargados de la seguridad del edificio del Congreso Nacional y les manifestaron a los miembros de la tropa, que: *“el grupo de oficiales de la ESPE, no había llegado a reforzar la seguridad, sino al contrario de ello, fueron con el objetivo de tomarse el edificio legislativo, en protesta ante la realidad que vivía el país”*. La respuesta de la tropa fue favorable y de apoyo total a los jóvenes oficiales; las palabras de uno de los Suboficiales que era parte de la seguridad fue:

“por fin los oficiales ejecutan una acción que la tropa hemos estado esperando, ¡tienen todo nuestro apoyo!”

En resumen, los oficiales de rangos medios, alumnos de la Escuela Politécnica del Ejército, que llegaban supuestamente en apoyo a la acción que iban a ejecutar los oficiales de rangos altos de la Academia de Guerra, tenían que tomar la valiente decisión, de ejecutar la tarea que sus superiores no tuvieron la valentía de hacerlo; operación que, luego sería apoyada por los militares de rangos bajos que se encontraban como parte de la seguridad del edificio del Congreso Nacional.

Había una disyuntiva entre los oficiales alumnos de la Escuela Politécnica del Ejército, al ver que los mayores y coroneles de la Academia de Guerra no se encontraban en las inmediaciones del Congreso Nacional; si abortaban la misión para la cual se movilizaron y retornaban al Campus Politécnico, o, ejecutaban la misión únicamente ellos, con el apoyo del personal de tropa que era parte del cordón de seguridad del edificio legislativo.

Ante la ausencia de los oficiales de la Academia de Guerra y el otro contingente de apoyo al movimiento de oficiales académicos, los capitanes informan a los tenientes y subtenientes, que: *“un grupo de ex combatientes del Cenepa, liderados por el Capitán Cesar Díaz, se moviliza en apoyo a los oficiales de la ESPE, como cabeza de lanza de la movilización indígena”*; disponiendo que, el momento que ellos lleguen, los oficiales

alumnos de la ESPE, irrumpen en las instalaciones del Congreso Nacional y ayudan a que el contingente de indígenas ingrese al edificio.

Era ya las 09:00 horas del 21 de enero del 2000, y, los oficiales alumnos de la ESPE formados frente al edificio del Congreso Nacional, aguardaban la orden de sus líderes, los capitanes Guillermo Rosero, Alex Guzmán y Sandino Torres; a la par, esperaban los refuerzos liderados por el Capitán Cesar Díaz, para ejecutar lo ya decidido. No había vuelta atrás.

En ese momento, los oficiales superiores y coroneles comandantes del cordón de seguridad del Congreso, notan la inusual presencia de un grupo de oficiales subalternos, que vestían un impecable uniforme de militar y no portaban ningún equipo antimotines; algo muy raro estaba sucediendo, ya que en esa zona todos los militares que custodiaban el edificio legislativo, portaban equipo y armamento AC⁶, que sería utilizado ante cualquier acción del movimiento indígena. Eran los oficiales de la ESPE, que su impecable atuendo militar y la ausencia de equipo anti-motines, les había delatado...

En ese momento, los capitanes al mando de los oficiales alumnos, informan a sus subordinados, que no hay marcha atrás, ante la decisión de tomarse el Congreso Nacional; ya que, uno de los Coroneles encargados del cordón de seguridad, se había dado cuenta de las intenciones de los oficiales alumnos y había informado el General Carlos Moncayo, comandante de la Fuerza de Tarea No. 1, responsable directo de la Seguridad del Complejo Legislativo.

El Coronel que alertó de las intenciones del grupo de militares académicos, se dirige al lugar donde estaban formados los jóvenes oficiales, increpa enfurecido al Capitán Guillermo Rosero e intenta dar la orden a los oficiales de la ESPE que retornen a su unidad militar, es decir a la Escuela Politécnica del Ejército.

El Capitán Guillermo Rosero, en respuesta a la grosera actitud del coronel, le responde:

“Yo estoy al mando de los oficiales, ellos son mi gente y usted coronel no puede ordenarles”.

En un arranque de valor, el Capitán Guillermo Rosero da la orden a sus subordinados de avanzar con dirección al edificio del Congreso Nacional y ejecutar lo

⁶ El equipo utilizado en el control de eventos puede incluir desde porras hasta escudos antidisturbios y escopetas adaptadas que disparan bolas de goma. Normalmente en el equipamiento de un oficial de antidisturbios siempre se encuentra algún tipo de armadura para su protección y algún tipo de armamento disuasivo, como algún tipo de gas lacrimógeno, incluido el gas pimienta; bastones o porras, armas de electrochoque y algunos tipos de proyectiles no letales (Fundación Wikimedia, Inc. 2020).

acordado, ante la agresiva actitud del coronel, que por la fuerza intentaba detener al capitán y al resto de oficiales; en ese momento llegaban los refuerzos, los héroes del Cenepa, como cabeza de lanza del movimiento indígena.

Era aproximadamente las 09:30 horas del 21 de enero del 2000 y el cerco policial del edificio del poder Legislativo caía, ante la acción rebelde del grupo de oficiales de la Escuela Politécnica del Ejército, secundados por los soldados de tropa que resguardaban el Congreso Nacional, y, apoyados por los héroes del Cenepa, que encabezaban la estampida indígena.

Al ver que los oficiales académicos armados de valor y sin armamento alguno, retiraban los obstáculos, quitaban concertinas, y, rompían las puertas de acceso al edificio legislativo, en medio de una represión agresiva ejecutada por la Guardia Legislativa perteneciente a la Policía Nacional; los indígenas, apresuran su avance para apoyar a los subtenientes y tenientes, e, ingresar al edificio del Congreso Nacional del Ecuador, para consolidar el objetivo de la toma simbólica del monumento a la Democracia y desconocer al gobierno del presidente Jamil Mahuad.

La ocupación del Edificio del Poder Legislativo ecuatoriano se concretó a las 9:45 horas, del viernes 21 de enero del 2000; el país y el mundo, veían en vivo y en directo, por los medios de comunicación nacionales e internacionales, como un grupo de oficiales del Ejército ecuatoriano, ejecutan una revuelta militar sin derramar una sola gota de sangre del pueblo ecuatoriano; el mal llamado golpe de Estado del 21 de enero del 2000, hacía visible una división institucional en las Fuerzas Armadas, donde los Altos Mandos movían las fichas para hacerse cargo del poder, mientras los mandos medios desconocían la autoridad de los Generales.

Esta acción de rebelión indígena y revuelta militar, fue ejecutada en definitiva por los oficiales estudiantes de varias ingenierías de la Escuela Politécnica del Ejército, con apoyo de los soldados que resguardaban el edificio del Congreso Nacional bajo el mando del General Carlos Moncayo (Hernández, Aráuz, y otros 2000).

El General Carlos Moncayo, ante la impotencia de ver que su tropa y los oficiales alumnos de la ESPE, desconocían su mando, e, inclusive uno de los subtenientes mientras ingresaba al edificio del Congreso Nacional, en medio de la euforia, le increpaba diciéndole: *“General, usted ya no es General de la República, retírese, porque desconocemos al Alto Mando militar”*; se retiró y dio una explicación cuyo alcance sigue siendo un enigma:

“me voy, porque el pueblo ya está en el Congreso y aquí no tengo nada que hacer; los oficiales jóvenes hicieron lo que el Alto Mando debió hacer” (Hernández, Aráuz, y otros 2000).

En el interior del edificio, y, ya consolidada la toma del Congreso Nacional, los oficiales de rangos medios, trataban de imponer el orden dentro de las instalaciones del edificio legislativo para evitar que los indígenas destruyan el inmueble. Hasta ese momento, los “oficiales académicos” no medían la magnitud de la acción que habían ejecutado.

Era las 10:00 horas y el Coronel Lucio Gutiérrez llega a las instalaciones del Congreso Nacional, cuando ya todo estaba ejecutado. Su hermano el Teniente Gilmar Gutiérrez, también alumno de la Escuela Politécnica, le había mantenido informado de la situación, además le informó el momento que tenía que llegar al edificio, para aprovechar la oportunidad que el destino y la ingenuidad de los jóvenes oficiales le brindaban.

Ya en la sala de sesiones del Congreso Nacional, el Coronel Lucio Gutiérrez hace su primer pronunciamiento, en representación de los oficiales sublevados y del Parlamento de los Pueblos del Ecuador. En su alocución expone, que se trata de una revolución en contra de la corrupción y de la pobreza, pide a la comunidad internacional el reconocimiento de la soberanía del pueblo ecuatoriano, e, informa al pueblo que:

“el papel de las Fuerzas Armadas es defender la soberanía nacional y apoyar al pueblo en sus reivindicaciones sociales” (Lucas, Ecuador cara y cruz - Del levantamiento de los noventa a la Revolución Ciudadana 2015).

En el Congreso Nacional, aparte de los militares sublevados se encontraban los miembros del Parlamento de los Pueblos del Ecuador, quienes ante la presencia de Lucio Gutiérrez, Antonio Vargas y Carlos Solórzano; apoyan la conformación de la Junta de Salvación Nacional, integrada por estos tres personajes.

En medio de discursos que eran cubiertos por los medios de comunicación, y, transmitidos al Ecuador y al mundo; la denominada Junta de Salvación Nacional, emitía sus primeros decretos, entre ellos disponiendo orden de arraigo para el presidente de la República, presidente del Congreso y presidente de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador (Lucas, Ecuador cara y cruz - Del levantamiento de los noventa a la Revolución Ciudadana 2015).

A la par, el General Paco Moncayo, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y respetado Héroe Nacional, comentaba ante los medios de comunicación, que: el levantamiento militar era predecible porque “Cuando los mandos militares no se levantan

para eliminar la corrupción que vive el país, aparecen los oficiales para buscar salidas, como ocurrió en Venezuela, cuando se levantó Hugo Chávez (Moncayo, Paco)” (Lucas, Ecuador cara y cruz - Del levantamiento de los noventa a la Revolución Ciudadana 2015).

Ante la aparición del Coronel Lucio Gutiérrez, en los medios de comunicación, el Alto Mando militar reunido en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, aproximadamente a las 10:30 horas, recibía el reporte que, hasta esa hora, la insurrección se limitaba a la Escuela Politécnica del Ejército, y, tenían la información que había una alta posibilidad que los oficiales de la Academia de Guerra, se unan a los jóvenes oficiales de la ESPE.

Ante este escenario, el General Carlos Mendoza a las 10:50 horas aproximadamente, decide reunirse con sus dos coroneles de mayor confianza “Jorge Brito y Gustavo Lalama”; para encomendarles la misión de ir al edificio del Congreso Nacional, donde se encontraban los oficiales insurrectos de la Escuela Politécnica y tomar contacto con el Coronel Lucio Gutiérrez, con la finalidad que ellos logren convencer a Gutiérrez de declinar su intención de tomarse el poder (Hernández, Aráuz, y otros 2000).

Los coroneles Brito y Lalama, al llegar al Congreso se contagian del patriotismo de los jóvenes oficiales; al contrario de la misión encomendada por su Jefe del Comando Conjunto, deciden unirse al movimiento de oficiales sublevados, de idéntica forma que lo hizo el Coronel Fausto Cobo.

La posibilidad que se unan a la revuelta los oficiales alumnos y profesores de la Academia de Guerra, se volvió una realidad; ya que, luego de tomar la decisión a las 11:00 horas de unirse a la lucha de oficiales más jóvenes, se movilizan desde la Academia de Guerra, con su comandante el Coronel Fausto Cobo, hacia el Congreso Nacional.

Los “coroneles y mayores” de la Academia de Guerra, oficiales que supuestamente iban a ejecutar la acción a primeras horas, pero nunca lo hicieron, esperando que los jóvenes oficiales de la ESPE tomen la decisión arriesgando hasta sus vidas, llegaron al Congreso Nacional, acompañados de su comandante el Coronel Fausto Cobo, aproximadamente a las 11:30 horas, con ínfulas de estrategas y planificadores, desplazando a los oficiales de la ESPE, ya cuando lo difícil de la operación de la toma de las instalaciones del Poder Legislativo había pasado. Es decir, llegaron solo a figuretear.

El Coronel Fausto Cobo, a su llegada al edificio del Poder Legislativo, emitió su proclama de adición al grupo de oficiales sublevados, desde las oficinas del Congreso Nacional, ante los medios de comunicación; quien con voz firme proclamó:

“¡Si quieren sacarnos de aquí, nos sacan muertos!”.

Frase que, generó un efecto multiplicador, de apoyo al movimiento de oficiales sublevados, en todo el Ejército ecuatoriano. Ya no eran solo los oficiales académicos de la ESPE y los alumnos de la Academia de Guerra; la sublevación se trasladó a las unidades operativas de Guayaquil, Cuenca, Pastaza, y, muchas otras de todo el país, las que por vía telefónica se comunicaban con los oficiales sublevados, para darles su apoyo.

Al medio día (12:00 horas), el General Carlos Mendoza, se comunica vía telefónica con el Coronel Gustavo Lalama, para que pedirle información de la misión encomendada; para sorpresa del General, su emisario le responde:

“Mi General, es irreversible, es irreversible...”.

Respuesta que dejó consternado no solo al Jefe del Comando Conjunto, sino a todo el Alto Mando militar y al Consejo de Generales; ya que, los dos coroneles de confianza del Alto Mando, también se habían unido a los oficiales sublevados, en apoyo a la Junta de Salvación Nacional, y, planificaban como siguiente objetivo la toma del Palacio Presidencial.

El General Mendoza, intentó también vía telefónica convencer al Coronel Fausto Cobo, para mantener una reunión en las instalaciones del Círculo Militar, con el propósito de buscar salidas a la decisión que él había tomado. Pedido que, el Coronel Fausto Cobo rechazó.

Con el Coronel Lucio Gutiérrez formando parte del Junta de Salvación Nacional, apoyado luego por el Coronel Fausto Cobo, Gustavo Lalama y Jorge Brito, y, con el respaldo de los oficiales de la ESPE, Academia del Guerra, se consolidó una certeza entre los militares sublevados: el derrumbe del presidente de la República Jamil Mahuad, era irreversible (Herrera, Carrillo y Torres 2005).

En las instalaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, se encontraban varios funcionarios cercanos al Presidente, entre ellos el Ministro de Gobierno, Vladimiro Álvarez; quien, muy molesto preguntó a los generales:

“¿cuáles serían las acciones en contra de los oficiales golpistas?”

A lo cual, el General Telmo Aníbal Sandoval respondió, que les someterían a las Leyes Militares.

Que irónico, ya que este General, fue quien incentivó semanas atrás a los oficiales alumnos de la ESPE, a que tomarán la decisión de sublevarse; cuando, en la reunión que el Alto Mando militar mantuvo con los oficiales alumnos de la Escuela Politécnica del Ejército, exclamó:

“no me temblará ni el brazo ni la pierna, para tomar el mando de este país y corregirlo”.

A las 13:00 horas, el Alto Mando militar decide reunirse con el presidente Jamil Mahuad, en el Palacio Presidencial. Mahuad y sus ministros de confianza reciben a los Generales: Mendoza, Sandoval, Villarroel, Irigoyen y al Vicealmirante Monteverde. Los Generales en resumen le solicitaron al presidente, que tome una decisión constitucional; en pocas palabras le pedían que renuncie.

Ante esa recomendación, Jamil Mahuad muy molestó, exigió que de inmediato sean desalojados los militares que se encontraban tomados el Congreso Nacional, inclusive si es necesario con el uso de la fuerza. El General Mendoza, también molesto y con voz alta le responde al presidente Mahuad:

“¿Quieren un desalojo del Congreso a sangre y fuego?!”.

Los oficiales académicos seguían tomados el Congreso Nacional, sin saber que sus vidas corrían peligro, por las órdenes desatinadas y desesperadas, del presidente de la república.

El Jefe del Comando Conjunto ante la testarudez de Jamil Mahuad, terminó su exposición diciendo:

“presidente a usted se le acabó el tiempo y el escenario que sigue es la sucesión...”
(Hernández, Aráuz, y otros 2000).

Jamil Mahuad, luego de la visita de los generales, en cadena nacional de radio y televisión afirmó a los ciudadanos, que en el Ecuador esos momentos está perpetrándose una aventura golpista, con el propósito de implantar una dictadura; ante ello, él no aceptará su destitución.

Inmediatamente, el líder político de la Izquierda Democrática y ex presidente de la República, Dr. Rodrigo Borja manifestó públicamente que no existe una salida constitucional, y, que Jamil Mahuad *“debería irse, para evitar enfrentamientos entre el pueblo”* (Lucas, Ecuador cara y cruz - Del levantamiento de los noventa a la Revolución Ciudadana 2015).

A las 15:40 horas, vuelve a aparecer el General Carlos Moncayo en escena; a nombre del Alto Mando militar hace público, que las Fuerzas Armadas quitan definitivamente el apoyo al presidente Jamil Mahuad, luego de lo cual, el General Carlos Moncayo fue la persona designada por el Mando militar, para informar a Jamil Mahuad, que las Fuerzas Armadas no pueden garantizar su seguridad, y, que le pedían abandonar el Palacio Presidencial.

Mientras en el Ministerio de Defensa y los Generales del Alto Mando, planificaban la estrategia para cumplir el objetivo ya negociado con el Vicepresidente de la República; es decir, la sucesión presidencial.

Ante lo cual, a esas horas comenzaba la ejecución del “plan engaño”, en el que caerían tanto los oficiales que lideraban la revuelta, como también los dirigentes indígenas; engaño planificado y ejecutado por los Generales, en coordinación con el Vicepresidente de la República, y, patrocinado por las élites de derecha.

El Alto Mando militar, luego de quitarle el apoyo a Mahuad, informa a los indígenas que las Fuerzas Armadas tomarían el poder de la república, y, que no existirían futuras represalias contra los militares sublevados. Además disponen enviar un telegrama a todas las unidades militares del país, informando que: ante la grave crisis política, económica, social y para precautelar la paz de los ecuatorianos, las Fuerzas Armadas asumen el poder político de la República del Ecuador (Hernández, Aráuz, y otros 2000).

Los soldados del Ejército ecuatoriano, seguían divididos; mientras las unidades de Guayaquil, Cuenca y Pastaza, apoyaban a los oficiales sublevados, las brigadas que disponían del mayor poder militar se subordinaron al Consejo de Generales. La Fuerza Aérea y la Marina, no estaban a favor de los militares insurrectos.

Ante la exigencia del Alto Mando militar, Jamil Mahuad abandona el Palacio Presidencial, aproximadamente a las 16:00 horas; escoltado por un grupo de militares, que cumplían órdenes del General Carlos Moncayo.

Jamil Mahuad salió del Palacio Presidencial, pero pidió ser llevado a la Base Aérea, lugar donde él asumía que estaría más seguro, y, tendría facilidad de maniobra para ejecutar sus acciones políticas, ya que los miembros de la Fuerza Aérea no apoyaban el golpe (Hernández, Aráuz, y otros 2000).

Los oficiales académicos que se encontraban atrincherados en el edificio del Congreso, al enterarse que Jamil Mahuad había abandonado el Palacio Presidencial, entraron en júbilo; sentían haber cumplido su misión, en favor del pueblo ecuatoriano.

No sabían que entraron en un juego de engaño, ejecutado por el Alto Mando militar, al que horas atrás se habían insubordinado; tampoco sospechaban que, el Mando Militar incumpliría su palabra de no sancionar a los oficiales, y, por el contrario, les judicializarían. Cumpliendo lo que el General Telmo Sandoval ya manifestó en la mañana al Ministro de Gobierno: “¡los oficiales sublevados serán sometidos a las Leyes Militares!”.

En la base aérea, un avión fue puesto a disposición de Jamil Mahuad, por parte del Alto Mando de la Fuerza Aérea Ecuatoriana; para movilizar al presidente a donde él disponga, en clara posición de apoyo al Gobierno. Ante eso, a las 17:00 horas un grupo de soldados del Ejército ecuatoriano, invaden la base aérea y rodean el avión destinado para Mahuad, para impedir su despegue.

Además, este grupo de militares fuertemente armados y en apoyo a la Junta de Salvación Nacional, tenían la misión de detener a Mahuad y exigirle que firme su renuncia.

Esta acción, del grupo de militares leales al Coronel Lucio Gutiérrez, estuvo a punto de generar un incidente grave con los uniformados pertenecientes a la Fuerza Aérea, ya que, la operación ejecutada implicó el ingreso por la fuerza a las instalaciones de la Base Aérea, de aproximadamente 15 vehículos, con soldados fuertemente armados, pertenecientes al Grupo Especial de Operaciones Ecuador (GEO), los mismos que bloquearon las operaciones aéreas del aeropuerto Mariscal Sucre.

Mientras Mahuad, pasaba momentos dramáticos en la Base Aérea, el Alto Mando militar, se movilizaba al Palacio de Carondelet; los generales sabían que los que primero lleguen a ese lugar tendrían el mando político del país.

A la par, la marcha de los movimientos indígenas y sociales, encabezada por el Coronel Lucio Gutiérrez, se movilizaba al Palacio de Gobierno, con el mismo objetivo que los Generales. Los indígenas marchaban acompañados por los oficiales sublevados de la Escuela Politécnica del Ejército, Academia de Guerra, y, militares de varias unidades como el Batallón de Apoyo Logístico No.25 y el Batallón de Comunicaciones No.1 “Rumiñahui”.

Los uniformados pertenecientes al Batallón de Comunicaciones No.1 “Rumiñahui”, se unen al movimiento de los oficiales sublevados y participan en la marcha para la toma del Palacio de Gobierno, luego que, aproximadamente a las 14:00, el Subteniente de Comunicaciones Juan Carlos Sandoval, a pedido del Coronel Lucio Gutiérrez, visitara las instalaciones de esa unidad militar.

El joven oficial, perteneciente al Arma de Comunicaciones del Ejército y alumno de la Escuela Politécnica del Ejército, tras entablar una acalorada discusión con el comandante y los oficiales de la Plana Mayor de dicho Batallón, consigue el apoyo de los miembros de esta unidad militar, de la cual él había sido parte años antes.

El Batallón de Comunicaciones “Rumiñahui”, ante la gestión del Subteniente Juan Carlos Sandoval, se movilizó al Congreso Nacional con personal militar, armamento y

equipo de telecomunicaciones; para luego inclusive ser parte de la movilización al Palacio Nacional, en apoyo a la Junta de Salvación Nacional.

Eran las 18:30 horas y los Generales ya habían llegado al Palacio de Carondelet, adelantándose a la llegada de la marcha indígena-militar; mientras la multitud concentrada en la Plaza de la Independencia (movimientos sociales, mestizos e indígenas), hacían retumbar sus voces en apoyo a Gutiérrez y los oficiales sublevados, escuchándose la frase: “*Que salga Gutiérrez, que salga Gutiérrez*” (Hernández, Aráuz, y otros 2000), y, por otro lado el Grupo Escolta Presidencial y unidades de élite fuertemente armadas en claro apoyo a los Generales del Alto Mando militar, resguardaban el palacio.

Aproximadamente a las 19:50 horas, la marcha de los indígenas y militares jóvenes, liderados por el Coronel Gutiérrez, y, acompañados por dirigentes indígenas Antonio Vargas, Miguel Lluco, Ricardo Ulcuango y Salvador Quishpe, llegaba a la Plaza de la Independencia. A su llegada, exigieron ingresar al Palacio de Carondelet, donde ya se encontraba el Alto Mando, liderado por el General Carlos Mendoza.

En el interior del Palacio por el lapso de 40 minutos, se reunieron los Generales del Alto Mando y los Coroneles sublevados, para luego integrarse a la negociación los dirigentes de la CONAIE. Para sorpresa de los militares sublevados y del movimiento indígena, Mendoza y el resto de Generales ya tenían preparada una proclama, en la que darían a conocer al país, su intención de declararse dictadores (Lucas, Ecuador cara y cruz - Del levantamiento de los noventa a la Revolución Ciudadana 2015).

Pretensión que, los coroneles sublevados y la dirigencia indígena no aprobaron, y, rechazaron tácitamente; mientras en las unidades militares se vivía una gran división, ya que una parte de las unidades del Ejército eran leales al Alto Mando y otras apoyaban a Gutiérrez.

Luego de más de cuatro horas de negociaciones, mientras la multitud apostada en la Plaza de la Independencia mostraban claras intenciones de tomarse por la fuerza el Palacio Presidencial; el Alto Mando militar, la dirigencia indígena y los militares insurrectos, a las 23:44 horas del 21 de enero del 2000, llegan a un acuerdo, y, en rueda de prensa anuncian que: la Junta de Gobierno estaba conformada por el General Carlos Mendoza, Antonio Vargas y el jurista Doctor Carlos Solórzano.

El General Mendoza asumía el poder del Ecuador, ofreciendo atacar a la corrupción, y, prometiendo no sancionar a los coroneles, mayores, capitanes, tenientes, subtenientes y civiles, que fueron parte de la sublevación (Hernández, Aráuz, y otros

2000), ante el pedido del Coronel Lucio Gutiérrez, de que no se castigue a ninguno de los oficiales rebeldes. Promesa que nunca fue cumplida.

4. Desenlace de la sublevación

El General Carlos Mendoza, huyendo de la alta responsabilidad que había asumido minutos antes, sale del Palacio Presidencial a las 00:16 horas del 22 de enero del 2000, con dirección al Ministerio de Defensa Nacional; donde, se reúne con los generales del Ejército, para informarles la decisión de pedir su separación voluntaria de las Fuerzas Armadas, para así, dejar el camino abierto a la disolución del triunvirato, que horas antes él mismo había conformado, y, de esta manera, abrir el camino hacia el objetivo de la “operación engaño. Entregar el poder al vicepresidente Gustavo Novoa.

El General Mendoza, a la par que informa a sus generales subordinados la decisión pedir la baja, dispone al General Telmo Aníbal Sandoval se haga cargo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y, continúe con lo planificado; es decir, la sucesión presidencial.

Luego de emitir su última orden militar, es decir, nombrar Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, al General Telmo Sandoval; Carlos Mendoza, regresa al Palacio Presidencial, aproximadamente a las 01:00 horas del 22 enero del 2000, donde comunica a Antonio Vargas, y, a Carlos Solórzano, su decisión de renunciar al triunvirato, pronunciando la simple frase: “Señores esto queda disuelto, renuncio, yo me voy”. Cual vil traidor y cobarde lacayo, de los poderes económicos de la derecha, mentalizadores de la “operación engaño”.

Ante tal desagradable noticia, los dirigentes indígenas Antonio Vargas, Luis Macas, Miguel Lluco, Salvador Quishpe, Ricardo Ulcuango, entre otros; increparon enérgicamente al General Mendoza, por haber faltado a su palabra y haber traicionado a los sectores populares, amenazando en continuar con la movilización indígena.

Los generales del Alto Mando militar, en ese momento comandados por el General Telmo Aníbal Sandoval, concretaban su plan de engaño; ya que, aproximadamente las 03:00 horas del 22 de enero del 2000, luego de comprobar que la multitud que rodeaba el Palacio de Carondelet, habían abandonado completamente la Plaza de la Independencia, y, todos los oficiales rebeldes se habían replegado a sus hogares, confiados en la palabra del general Mendoza; convocan, a los dirigentes indígenas a las instalaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Donde, les informan que, ante la decisión de pedir la baja militar, como oficial del Ejército, por parte

del General Carlos Mendoza, y, la consiguiente disolución del triunvirato; proclaman, que el Vicepresidente Gustavo Novoa, asuma la Presidencia de la República, respetando la sucesión presidencial.

Minutos después, en las mismas instalaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, es posesionado como presidente de la República del Ecuador Gustavo Novoa Bejarano, concretándose definitivamente el “plan engaño”.

Los grupos políticos y económicos de derecha, habían logrado su objetivo con el respaldo de los Estados Unidos de Norteamérica; el juego de engaños del Alto Mando militar, ejecutado por el General Carlos Mendoza, y, concretado por el General Telmo Aníbal Sandoval, había llegado a su fin.

Juego de engaños, que generó consecuencias a los principales protagonistas; es decir, a los oficiales del Ejército ecuatoriano, que de una u otra manera participaron en la revuelta y sublevación militar, preámbulo de la caída del gobierno de Jamil Mahuad y sucesión presidencial de Gustavo Novoa.

Como dice (Ciriza, Alejandra), en su texto titulado: 21 de enero ¿Golpe de estado o revuelta india en el Ecuador?, “Un acontecimiento se inscribe en la memoria nos solo de quienes son sus casuales espectadores, sino que procede de la memoria de quienes los protagonizan, de sus aprendizajes, de sus experiencias” (Ciriza 2000).

En referencia a este pensamiento de (Ciriza, Alejandra), y, tomando las palabras de (Cercas, Javier); los jóvenes oficiales académicos de rangos medios “Lo hacían, como los hombres y las mujeres hacemos la historia, sin saber que la hacemos...” (Cercas 2009).

La sublevación militar del 21 de enero del 2000, generó graves consecuencias a los oficiales subalternos de las Fuerzas Armadas que protagonizaron la toma del Congreso Nacional del Ecuador, específicamente, a los alumnos de la Escuela Politécnica del Ejército; quienes, al puro estilo de las persecuciones producto de las sublevaciones en la Colonia, cuando éstas eran castigadas con sanciones represivas y exilios masivos, fueron humillados y dados el pase a cumplir sus funciones militares en los mas recónditos lugares de las fronteras del Ecuador, truncando así sus procesos académicos como alumnos de las diferentes ingenierías de la ESPE, mientras a la par eran judicializados con cargos de sedición en la justicia ordinaria, como vendetta protagonizada por la élite de clase política, y, secundada por el resentimiento de los generarles del Alto Mando militar.

Los oficiales generales que conformaban el Alto Mando militar, aquel 21 de enero del 2000, se convirtieron en casuales espectadores de las acciones que voluntariamente

ejecutaban los oficiales de rangos medios, para luego convertirse en jueces y verdugos, ejecutores de las sanciones y persecuciones, que fueron objeto los oficiales subalternos, actores de la revuelta militar y ejecutores de la toma del Congreso Nacional del Ecuador.

Se podría catalogar de principal verdugo, a quien en aquellos momentos ostentaba el cargo del Jefe de Estado Mayor del Ejército, General Roberto Moya; personaje se encargó de hostigar, perseguir y hacer sancionar a los jóvenes oficiales, pese a que el Congreso Nacional del Ecuador meses después de la Revuelta Militar, decretara Amnistía Política, para todos los implicados en los hechos del 21 de enero del 2000 (Amnistía: perdón y olvido).

Persecución atroz, de los generales y oficiales de alto rango, que desembocó en la salida de varios oficiales de las Fuerzas Armadas; oficiales que se habían destacado durante su vida militar y académica. Oficiales, que a futuro hubieran sido los generadores de cambio en la doctrina institucional, y, gestores fundamentales del proceso de profesionalización del Ejército ecuatoriano.

Oficiales, que optaron por dejar las filas del Ejército, y, en la actualidad se han destacado profesionalmente, tanto en el Ecuador como fuera del país; para muestra de ello, pondremos de ejemplo al Subteniente Edgar Iván Granizo Caminos, quien luego de la persecución del Alto Mando, por haber participado en la sublevación militar, decidió acogerse a su salida voluntaria de las filas del Ejército ecuatoriano y tomó la decisión de migrar, como muchos de nuestros compatriotas a los Estados Unidos de Norteamérica. País que, si ha reconocido su capacidad profesional y valores morales, en base a sus logros académicos obtenidos en las universidades Cuny QCC y DeVry University, donde alcanzó sus títulos en las carreras de ingeniería biomédica y tecnologías de las telecomunicaciones; hoy para el orgullo de todos los ecuatorianos, es el Director General del Departamento de Biomedicina del Sistema de Salud “Northwell”, en los Estados Unidos de Norteamérica.

Ejemplos como el anteriormente expuesto, hay varios; el factor común de los oficiales académicos, que decidieron salir de las filas de Fuerzas Armadas, luego de la revuelta militar del 21 de enero del 2000, es el haberse destacado permanentemente en sus actividades profesionales, y, en la actualidad ser personas que contribuyen al desarrollo del Ecuador, o, del país que los acogió luego de haber decidido salir de la institución militar y optar por la alternativa migratoria.

No podemos desmerecer a los oficiales que pese a los arrestos que les aplicó la justicia militar y la persecución que tuvieron que soportar de sus superiores, en la

actualidad son destacados oficiales con grados de mayores, tenientes coroneles y coroneles. Oficiales que, siguen aportando al desarrollo nacional, como miembros activos de las Fuerzas Armadas.

Oficiales que nunca olvidarán la traición, que el 22 de enero del 2000, sus Altos Mandos militares ejecutaron sobre ellos. Traición que se materializó en arrestos y sanciones disciplinarias, que los oficiales llevarán escritas en sus libros de vida y marcarán su carrera militar hasta el último día que presten servicios en Ejército ecuatoriano.

Conclusiones

El objetivo principal de esta investigación fue hacer una nueva lectura de los sucesos del 21 de enero del 2000, dar la voz a los protagonistas del hecho y examinar el papel que desempeñaron cada uno de ellos, para de esta manera revelar las razones y antecedentes de esa decisión, relatar los hechos y acontecimientos reales; para de esta manera, contribuir a la formación de una conciencia crítica ante los procesos decisivos de la historia ecuatoriana a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI.

Para alcanzar este objetivo principal se plantearon los siguientes objetivos específicos:

- a) Analizar las lógicas y antecedentes de la sublevación militar del 21 de enero del 2000 en el Ecuador.
- b) Relatar las acciones ejecutadas, narrar los acontecimientos sucedidos y dar voz a los actores de los hechos del 21 de enero del 2000.
- c) Establecer las consecuencias para el Estado ecuatoriano, Fuerzas Armadas, movimiento indígena y miembros militares ejecutores de la toma del Congreso Nacional del Ecuador el 21 de enero del 2000.

En base al trabajo desarrollado, se puede concluir que los procesos que desembocaron en la rebelión militar e indígena, permitieron que por primera vez en la historia del Ecuador, ondeara la Wipala en el Palacio de Carondelt; hecho que, simbolizaría el conflicto entre la legalidad y la legitimidad, entre la soberanía popular y los procedimientos democráticos, entre las desgastadas representaciones político-electorales y las peligrosas expresiones de representación corporativa de los pueblos (Barrera Guarderas 2000).

La revuelta y sublevación militar, del 21 de enero del 2000, concluye este estudio, que fue el resultado de la conjunción de dos procesos, que se desarrollaron paralelamente:

Primero: *los procesos históricos que vivió el Ecuador durante la década de los noventa*, marcados por una profunda inestabilidad social (constantes levantamientos indígenas), acciones militares (Guerra del Cenepa), crisis política (derrocamientos de gobiernos), y, crisis económica (salvataje bancario, feriado bancario, congelamiento de cuentas bancarias, dolarización de la economía).

En referencia a ello, cronológicamente podemos detallar los siguientes subprocesos, mismos que están marcados por acontecimientos que directa o indirectamente los militares estarían inmiscuidos, y, que a futuro serían los antecedentes históricos que incentivaron a los oficiales subalternos del Ejército del Ecuador a sublevarse contra su Alto Mando militar, y, revelarse contra el poder Constitucional del presidente de la República, el 21 de enero del 2000:

- Movilizaciones de 1990 y el primer levantamiento indígena nacional “Levantamiento del Inti Raimy” (4 de junio de 1992).
- Marchas indígenas denominadas “Por los territorios y la Vida” (abril de 1992)
- Movilizaciones por los 500 años de resistencia (octubre de 1992)
- Levantamiento indígena en contra de la aprobación de la Ley Agraria, denominada “La movilización por la vida” (junio de 1994)
- Guerra del Cenepa (enero – febrero de 1995)
- Movilizaciones sociales y la caída del gobierno del Abdala Bucaram (febrero de 1997)
- Gobierno Interino de Fabián Alarcón
- Instalación de la Asamblea Nacional del Pueblo de (octubre de 1997) y Asamblea Nacional Constituyente (diciembre del 1997)
- Negociación territorial con el Perú
- Salvataje bancario y creación de la Agencia de Garantía de Depósitos
- Feriado Bancario y congelamiento de los depósitos de los cuenta-ahorristas (8 de marzo de 1999)
- Movilización nacional y levantamiento indígena contra el gobierno de Jamil Mahuad (marzo de 1999)
- Movilización nacional y levantamiento indígena contra el gobierno de Jamil Mahuad (julio de 1999)
- Dolarización de la economía ecuatoriana (9 de enero del 2000)
- Levantamiento indígena en contra de la dolarización de la economía ecuatoriana (15 enero del 2000)

Antecedentes que, desembocaron el 21 de enero del 2000 en la rebelión indígena y sublevación militar, que causó la caída del presidente de la República Jamil Mahuad; actuando como detonante principal para esta acción de rebeldía, la dolarización la economía ecuatoriana, decretada el 9 de enero del 2000.

Segundo: *Procesos de cambio en la educación y entrenamiento militar, ejecutados en la década de los noventa, en respuesta a los hechos sociales - militares - políticos – económicos, vividos desde 1990 en el Ecuador*; procesos que, a lo largo de toda la década de los noventa, la institución militar impartió a sus nuevos elementos. Conocimientos que, serían aplicados por los uniformados, en el marco de los acontecimientos históricos desarrollados cronológicamente en el primer proceso.

La nueva doctrina militar, aplicada a inicios de la década de los noventa, inicio un proceso de acercamiento de los militares hacia la población indígena, a partir de un trabajo social de sus oficiales y tropa; estos procesos marcaban una clara contra posición con la actuación de los partidos políticos, que en lugar de ser mediadores entre el Estado y la sociedad, como lo dicta la ciencia política, adoptaron el rol de mafiosas “formas empresariales” en favor de intereses corporativos y de las élites económicas, despreocupándose del bienestar de los ciudadanos de la clase media y baja.

El Ejército, inicia un proceso de acercamiento con las comunidades indígenas a partir del año 1990, luego de las primeras movilizaciones del 4 de junio de 1990; acciones sociales que, constituyeron una nueva expresión de la reivindicación indígena en la sociedad ecuatoriana, y, que marcó su presencia en el escenario político del Ecuador (Porrás Velasco 2005).

Este acercamiento tenía también un propósito táctico, que se enmarcaba en una estrategia diseñada por los Mandos militares, para minimizar las acciones de las futuras protestas del movimiento indígena, mediante campañas de disuasión, apoyo a la comunidad, apoyo al desarrollo social y económico de la población indígena; y, de esta manera impedir o minimizar cualquier amenaza que represente un peligro para el sistema democrático, valiéndose para este propósito de la simpatía cosechada por los uniformados en las comunidades indígenas, mediante la aplicación de su doctrina de acercamiento y apoyo al pueblo.

Los soldados jóvenes ya en su vida profesional, lograron vincularse más con la sociedad civil, especialmente con los sectores más desposeídos y descuidados por el Estado ecuatoriano; es decir, orientaron su formación militar a la nueva doctrina de relaciones cívico-militares, priorizando el trabajo social con la comunidad, bajo el eslogan: “El ejército y su pueblo”. Semilla que germinaría en la conjunción entre el movimiento indígena y la juventud militar, el 21 de enero del 2000, durante la toma del Congreso Nacional.

El trabajo social de los uniformados en las comunidades, sirvió para que la sociedad civil le dé su apoyo irrestricto a las Fuerzas Armadas ecuatorianas durante las operaciones de la Guerra del Cenepa, en enero de 1995; momento de la historia del Ecuador, que se evidenció la unión de todos los ecuatorianos, con un solo propósito: ayudar a sus Fuerzas Armadas en su misión de defender la Soberanía Nacional.

Las enseñanzas que también recibieron los noveles soldados, en base a la nueva doctrina militar, que les inculcaba principios en contra de la corrupción, desigualdad social y les incentivaba a defender al pueblo ecuatoriano, comenzó a dar resultados; generando un claro rechazo de los uniformados a la clase política ecuatoriana, juzgando el tipo de democracia en que vivían y cuestionando el modelo económico en el cual se desarrollaba el Estado ecuatoriano.

Juzgamientos y cuestionamientos, basados en los conceptos ideológicos sobre los cuales se basó la doctrina militar ecuatoriana, en los años noventa; conceptos que, tuvieron la influencia ideológica del “nacionalismo”, “militarismo” y “nuevo militarismo”, bajo un enfoque conceptual de la Nación y su seguridad.

Esta filosofía de rechazo a la corrupción y cuestionamiento a las malas prácticas del poder político, llevó a que los militares se conviertan en árbitros que dirimirían ante la grave situación que vivía el país en 1997, producto de la crisis de gobernabilidad generada por el gobierno populista bucaramista; desembocando en la destitución del Presidente Abdalá Bucaram.

Los soldados ya no eran “obedientes y no deliberantes” como la norma castrense los obligaba; pasaron a ser sujetos “obedientes y deliberantes ante la realidad del país”, y, con claros sentimientos de oposición a un Estado patrimonialista, oligárquico y corrupto.

Las fuerzas Armadas a la par del cambio doctrinario, inician un proceso de profesionalización de sus miembros, proporcionándoles de esta manera herramientas para el cumplimiento de su misión en apoyo al Desarrollo Nacional, especialmente de los oficiales de rangos medios (subtenientes, tenientes y capitanes); adaptándose a lo que el sociólogo estadounidense (Janowitz, Morris), llamó en la obra “El soldado profesional” - formas de civilización de las Fuerzas Armadas- (Janowitz 1960), esto sería, la incorporación de lógicas y prácticas del mundo civil en el ámbito militar (Soprano 2013).

Desarrollo Nacional que las Fuerzas Armadas impulsarían en base a la profesionalización de sus miembros, y, a la ejecución de “planes y programas de apoyo al desarrollo”, a lo largo de todo el territorio nacional ecuatoriano; en concordancia, con

la “seguridad” y la “nación”, entendiendo los vínculos entre la “seguridad nacional”, el “desarrollo nacional” y la “política nacional”, y, como estos conceptos vinculados influyen en los oficiales de las Fuerzas Armadas.

Lógicas y prácticas que aumentarían más el sentimiento de apoyo, de los uniformados al pueblo y a los ciudadanos; especialmente de los oficiales jóvenes, que estudiaban carreras técnicas y administrativas, fuera del ámbito militar, en la Escuela Politécnica del Ejército, denominados luego “oficiales académicos”.

Los oficiales académicos, ya con conocimientos técnicos y con un mayor acercamiento a sociedad civil, no solamente cuestionan el modelo económico en el cual se desarrollaba el Estado ecuatoriano, sino también, comienzan a generar debates críticos sobre la realidad del país y a recomendar salidas ante la crisis generada por el mal manejo de los gobiernos de turno.

Los jóvenes oficiales académicos, en 1999 ya representaban una masa crítica que se proyectaba hacia al fenómeno de la insubordinación, ante la despreocupación de sus mandos superiores y la cruda realidad socio-económica que vivía el Ecuador, muy afectada por la crisis que se agudizaba en gran medida por las malas decisiones del poder Ejecutivo y la complicidad de los otros poderes del Estado.

Una sucesión de decisiones presidenciales erróneas, desembocaron en la peor crisis financiera de la historia republicana del Ecuador, afectando a toda la sociedad ecuatoriana y con mayor agresividad a los sectores de clase media y baja. Ante esto, los miembros del Ejército, especialmente los oficiales académicos, comenzaron a expresar su rechazo al gobierno, reactivando su convicción de que ellos se debían al pueblo que les apoyó en la Guerra Cenepa y no a un poder político que defendía intereses del capital financiero y a las élites económicas, en desmedro de la calidad de vida de los ciudadanos. En gran medida, este sector de la oficialidad desbordó su papel de “soldados profesionales” dando prioridad a su pueblo y en defensa de su Patria.

Ante ello, y en referencia a la pregunta de investigación:

¿Cuáles son los procesos que provocaron que los oficiales subalternos de las fuerzas armadas del Ecuador, se rebelen contra el poder político y el Alto Mando militar el 21 de enero del año 2000, su desenlace y las consecuencias generadas?

Y luego del análisis crítico y detallado de los acontecimientos históricos, sucedidos desde inicios de 1990 hasta enero del 2000. Podemos responder que:

Las acciones ejecutadas a inicios de la década de los noventa por los movimientos sociales, especialmente por el movimiento indígena y sus organizaciones de base; obligó

a que las Fuerzas Armadas re-estructuren los planes de estudio que cumplirían los nuevos integrantes de la institución militar.

Planes y programas, que se aplicaron en los institutos de formación y entrenamiento castrense, en función a la nueva doctrina que marcaba las relaciones cívico-militares, en la que se priorizaba la unión de los uniformados con la sociedad civil, influenciada ideológicamente por el “nacionalismo”, “militarismo” y “nuevo militarismo”. Ideologías que se habían venido manifestando en el contexto del fenómeno militarista latinoamericano, desde los años sesenta, y, que para el caso ecuatoriano tendría una importante influencia desde la década de los setenta.

Esta nueva doctrina, fue concebida para cambiar la forma de relacionarse entre los civiles y militares, aplicada desde la época de dictadura militar de los años setenta, y, readaptar a la institución castrense a nueva manera de relacionarse con la sociedad civil en armonía al proyecto de reforma política iniciado a partir de 1976.

Los jóvenes militares, formados en base a la nueva doctrina que priorizaba la unión de ejército con su pueblo, aplicaron sus conocimientos adaptándose a las nuevas exigencias de la sociedad ecuatoriana, vinculando la formación militar profesional, con la realidad social y su entorno geográfico; con el objetivo primordial de apoyar al desarrollo social y económico de la población más necesitada, sin descuidar su misión principal de prepararse para la guerra, en caso que sea necesario defender la Soberanía Territorial.

En resumen, las acciones de los movimientos sociales, especialmente los levantamientos indígenas, forzaron a un cambio de doctrina militar, la misma que al aplicarse en los nuevos miembros de las Fuerzas Armadas, dio como resultado que los uniformados jóvenes generen un vínculo con la sociedad civil, especialmente con los sectores más necesitados. Este vínculo y sentimiento de protección al pueblo, generaría a la vez un sentimiento de rechazo a las élites políticas.

Este sentimiento de rechazo a los políticos y a la aplicación de medidas económicas por parte del Poder Ejecutivo (salvataje bancario, feriado bancario, congelamiento de las cuentas de los ahorristas, dolarización), que los uniformados consideraron erróneas y anti-populares; luego de una década de cambio doctrinario y trabajo de los militares junto al pueblo, desbordaron en una virtual asociación conspiratoria, entre los uniformados jóvenes y el pueblo indígena.

Asociación conspiratoria que ejecutaría acciones reales de rechazo, en contra del Gobierno manejado por poderes fácticos, en la mañana del viernes 21 de enero del 2000,

durante la toma simbólica del monumento a la Democracia, “El Congreso Nacional del Ecuador”, por parte de los oficiales alumnos de la Escuela Politécnica del Ejército, apoyados por el pueblo indígena, movimientos sociales y la sociedad civil ecuatoriana.

Acciones que, fueron el resultado de una crisis de gobernabilidad, y, que generarían consecuencias, para el Estado ecuatoriano y sus instituciones, para el movimiento indígena, y, para las Fuerzas Armadas, producto del incorrecto funcionamiento y escasa articulación de las instituciones del poder gubernamental (Ramírez Gallegos, El 21 de enero del 2000. 2000).

La consecuencia inmediata a la sublevación militar del 21 de enero del 2000, ejecutada en medio de las movilizaciones populares, en protesta por la dolarización, y, ante claros cabildeos en las esferas de poder; fue la salida del presidente Jamil Mahuad, quien sería reemplazado inicialmente por una fugaz Junta de Gobierno, misma que no se consolidó, para luego por decisión del Alto Mando militar, aplicar la sucesión presidencial, nombrando presidente de la República al hasta ese momento vicepresidente, el catedrático guayaquileño Gustavo Novoa Bejarano.

Uno de los tres integrantes de la Junta de Gobierno era el presidente de la CONAIE, evidenciándose un cambio de propósito de los dirigentes indígenas, al querer ser gobernantes; intención que, generó la pérdida de credibilidad en el movimiento indígena, por parte de la sociedad civil ecuatoriana y la población mestiza.

Por el lado castrense, la sublevación de los jóvenes oficiales generó institucionalmente en las Fuerzas Armadas un resquebrajamiento de la disciplina y de la subordinación militar. Lo cual, desbordó en una marcada lucha de clases interna, y, en actos de insubordinación en diferentes unidades militares.

La insubordinación de oficiales de rangos medios, durante los hechos 21 de enero del 2000, entrarían en un proceso de judicialización, y, los actores serían acusados de sedición; cargos que, luego serían absueltos por el Congreso Nacional, mediante la aprobación de una Amnistía Política. Si bien es cierto, la amnistía se aplicó a los procesos penales, pero a la final los militares fueron sancionados mediante el Reglamento de Disciplina Militar, por orden del Alto Mando de las Fuerzas Armadas, en contraposición a lo dispuesto por el Congreso Nacional.

En referencia a, *las consecuencias que la revuelta militar del 21 de enero del 2000, generó para el Estado ecuatoriano y sus instituciones*, podemos resaltar el resquebrajamiento de la frágil democracia, sobre la cual se sostenía el poder estatal; fueron muy claros, la falta de equilibrio y de estabilidad del régimen político, producto

del deterioro de la legitimidad de las autoridades, y, la constante violación del imperio de la ley, para beneficiar a las élites políticas y a los financistas de la campaña electoral.

Para el Estado Ecuatoriano en el ámbito político-gubernamental, la consecuencia inmediata tras la Revuelta Militar del 21 de enero del 2000, fue la salida del presidente Jamil Mahuad, personaje calificado por la clase política ecuatoriana como “presidente inepto”, quien envés de facilitar la ejecución de las políticas de ajuste en medio de una crisis generalizada, más bien las obstaculizaba, evidenciándose que no tenía la legitimidad necesaria, ni tampoco la capacidad para enfrentar la crisis que sufría el país, de la cual él era al menos parcialmente responsable; reemplazándole su compañero de binomio al aplicarse la sucesión presidencial, el vicepresidente Gustavo Novoa, que fue declarado presidente de la república, con el aval de las Fuerzas Armadas.

En relación a esto, la pregunta que siempre rondará en la mente de los principales actores de la sublevación militar, en particular de los oficiales jóvenes de la Escuela Politécnica del Ejército (oficiales académicos), es: “si la salida del presidente Mahuad fue planificada, y, las acciones del 21 de enero fueron parte de una hábil maniobra política, dirigida por los grupos de poder civiles y militares, para forzar indirectamente la renuncia del presidente de la república?” (Ospina 2000).

En referencia a, *las consecuencias para el movimiento indígena*; debemos señalar que, los levantamientos y sublevaciones indias, se han manifestado a través de la historia, desde la Colonia hasta la República; todas con el mismo fin, rechazar la imposición, dominación y discriminación, impuestas por el poder y las élites gobernantes, que no han querido impulsar una equitativa distribución de la riqueza, generando desigualdad e injusticia social a lo largo de la historia (Ciriza 2000).

En los tiempos de la Colonia, los mecanismos de salvaguardia aplicados por los indígenas durante y posterior a sus sublevaciones, fueron entre otros: la huida de sus territorios, aniquilaciones suicidas y hasta choques armados con las tropas de los grupos de conquista y opresión española, que gobernaban en la Audiencia de Quito.

En el siglo XVIII, en la Audiencia de Quito, se activaron varios movimientos subversivos indígenas, que se sublevaron en contra de la imposición, dominación y discriminación; grupos que, inauguraron una tradición de rebeldía indígena de “contra-poder”, misma que inició en la Colonia y ha sobrevivido a través los tiempos hasta la era republicana (Moreno Y 2014).

Estas acciones de rebeldía, si bien es cierto han sido históricamente una reacción contra la dominación, pero han tenido también sus consecuencias en desdicha de sus

actores; es así, que en la época colonial estas fueron reprimidas y castigadas con métodos represivos extremos, como descuartizamientos, desapariciones forzadas, brutales castigos a los cabecillas de los movimientos revolucionarios. Métodos de represión que medraron la fuerza de lucha de los grupos antagónicos indígenas, convirtiéndoles a las comunidades campesinas en los eternos grupos dominados, desprotegidos y de los cuales la oligarquía siempre se ha aprovechado.

Esta analogía histórica de la rebeldía indígena, nos lleva a entender la herencia de luchas y derrotas permanentes, que el movimiento indígena ha tenido a través de la historia; capitulaciones que, le han servido para aprender de sus errores y aceptar sus consecuencias. Enseñanzas que, el movimiento indígena supo aplicar en sus reapariciones en los años cincuenta del siglo XX, en la década de los noventa y en la actualidad⁷.

Cuando el movimiento indígena, se pronuncia como “contra-poder” ante el Gobierno Nacional en enero del 2000, cuestionando a los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial) y exigiendo un cambio radical en las políticas anti-populares, ejecutadas por Jamil Mahuad, el pueblo ecuatoriano y la sociedad en general avalaron su accionar, como referente legítimo del “contra-poder” social; sin embargo, esto no significó que le reconozcan su representación política a Pachakutik, el “brazo político” generado por los movimientos indígenas. No obstante, en términos electorales, el peso político de dicho partido es relativamente mucho más importante que el que representa la población indígena en el total nacional.

Pero el momento que actuaron los oficiales jóvenes de la Escuela Politécnica del Ejército y las pretensiones del movimiento indígena se orientaron a convertirse en gobierno, el accionar indígena perdió credibilidad ante la ciudadanía (Dávalos 2000); inmediatamente, las élites políticas accionaron sus planes de contingencia, entre estos, la sucesión presidencial para garantizar la hegemonía política de la derecha e impedir la consolidación de la Junta Gobierno integrada por un miembro del movimiento indígena (Antonio Vargas), un miembro del Alto Mando militar (General Carlos Mendoza) y un miembro de la sociedad civil (Carlos Solórzano).

La consecuencia del cambio de propósito de los dirigentes de la CONAIE, fue la pérdida de credibilidad en el movimiento indígena por parte de la sociedad civil

⁷ Acciones del movimiento indígena ejecutadas en octubre del 2019, cuestionando las estructuras del sistema económico y en contra de las medidas neoliberales impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) que intentó implementar el Gobierno de Lenin Moreno; entre ellas, el alza del combustible, la precarización del trabajo.

ecuatoriana; ya que, de ser un levantamiento de exigencias reivindicatorias, paso a ser una acción ligada a intereses políticos de los dirigentes indígenas, liderados por Antonio Vargas, presidente de la CONAIE. En clara contraposición ideológica a los levantamientos y sublevaciones en tiempos de la Colonia, en el siglo XIX y siglo XX (1990, 1992, 1994 y 1997).

Con este antecedente, la pregunta que se debería plantear es: ¿Si las bases del movimiento indígena, durante el desenlace de las movilizaciones del 15 de enero del 2000 y la revuelta militar del 21 de enero del mismo año, fueron o no, simples peones de las élites políticas, que, en contubernio con la cúpula militar, manejaron la situación para conducir el resultado de la crisis a una renuncia presidencial y sucesión presidencial? (Ospina 2000).

La respuesta a la interrogante es muy sencilla:

La oligarquía, se aprovechó de las acciones de los movimientos indígenas, para retomar el poder, repitiendo lo que ocurrió con la caída de Abdalá Bucaram, tres años antes de la sublevación civil-militar del 21 de enero del 2000 (Becker 2015).

Otra consecuencia que afrontó el movimiento indígena, luego de los hechos del 21 de enero del 2000, fue que el accionar de los jóvenes oficiales estudiantes de la Escuela Politécnica del Ejército, cambió la lectura por parte de la sociedad civil, de una revuelta indígena a una sublevación militar; dando mayor importancia el accionar de los soldados, que el de los indígenas. Reflejándose esto, en el contundente apoyo que años después recibirían en las elecciones presidenciales el Coronel Lucio Gutiérrez y el partido Sociedad Patriótica, restándole popularidad al Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, creado como partido político del movimiento indígena, el 5 de junio de 1995.

El movimiento indígena durante los acontecimientos del 21 de enero del 2000, evidenció ante la sociedad en general, la ausencia de una clara propuesta política y económica, ante la realidad que vivía el País (Ciriza 2000). Perdiendo popularidad ante el movimiento cívico-militar de los jóvenes soldados, quienes, sin intereses políticos, pero con un alto grado de patriotismo, planteaban una reforma integral del Estado, términos políticos y económicos.

El accionar de la CONAIE y el discurso de sus dirigentes, en conjunción con: las consignas y resoluciones del Parlamento de los Pueblos del Ecuador; alarmó a sus aliados e intelectuales de izquierda, direccionando a que éstos eviten establecer con el movimiento indígena una relación orgánica (Ciriza 2000).

En conclusión y respondiendo a la pregunta de (Ospina, Pablo), las bases del movimiento indígena, si fueron simples peones de las élites políticas y de la cúpula militar, los cuales, aprovechándose de la ingenuidad y patriotismo de los jóvenes soldados y de la convocatoria indígena, condujeron el resultado de la crisis, para forzar a una renuncia y sucesión presidencial, y así, garantizar hegemonía de la derecha política en el manejo del Estado ecuatoriano.

En referencia a, *las consecuencias para las Fuerzas Armadas del Ecuador*; podemos mencionar que, las Fuerzas Armadas a largo de la historia republicana, han estructurado su propia doctrina de defensa y su política de Seguridad Nacional; estos dos factores, unidos a la desconfianza para con las élites políticas por parte de los uniformados, desde el retorno a la democracia en el Ecuador, en los años setenta, han forzado, a que la institución armada confunda su autonomía institucional, con el papel de árbitro en los momentos de: crisis política y conflictividad social.

La firma de la paz con el Perú, ejecutada durante el gobierno de Jamil Mahuad en 1998, direccionó a que las políticas gubernamentales patrocinadas por Mahuad, limiten la participación productiva de las Fuerzas Armadas en el contexto nacional, generando la disminución presupuestaria para la ejecución de programas cívico-militares, que los uniformados ejecutaban en función a su doctrina de apoyo a la comunidad desde 1990, limitando así su operatividad; hecho que generó un descontento dentro de las filas de los uniformados, siendo también un insumo más, al creciente deseo de insubordinación, que desembocaría en los hechos del 21 de enero del 2000.

Producto de este malestar, el cual se recrudeció con la crisis generalizada de 1999, el Ejército comenzó a sufrir una división interna, entre su Alto Mando militar influenciado por las élites políticas y la oficialidad joven que sufría los efectos de las malas decisiones económicas del Gobierno. Los oficiales jóvenes eran quienes más cerca estaban de la tropa de rangos bajos, y, compartían las carencias económicas que los soldados y sus familias vivían, producto de una crisis económica, provocada por el Gobierno Nacional y secundada por el descuido de los Altos Mandos.

La sublevación militar, puso en evidencia que el Ejército ecuatoriano tenía divisiones internas de clases sociales; cabe recalcar, que quienes secundaron a los oficiales de rangos medios a ejecutar la toma del Congreso Nacional del Ecuador, fueron los soldados de tropa (rangos bajos), que formaban parte del cordón de seguridad del edificio del Poder Legislativo, uniformados que en su mayoría venía de la clase económica baja de la sociedad ecuatoriana. Por otro lado, quienes estuvieron en contra de

las acciones ejecutadas por los oficiales académicos de rangos medios, fue el Alto Mando militar, conformado por oficiales que se codeaban con la clase alta, perteneciente a las élites políticas y económicas del Ecuador. Esto, ponía sobre el tapete la clara dicotomía de clases que la sociedad militar mantenía.

Las Fuerzas Armadas en su conjunto, también tenía una significativa división de clases; los uniformados que apoyaron los hechos del 21 de enero del 2000, en su mayoría pertenecían al Ejército, salvo dos oficiales de las filas de la Policía Nacional. Mientras que, el rechazo al Golpe de Estado al interior de las Fuerzas Armadas, venía de los miembros de la Fuerza Aérea y la Marina de Guerra; fuerzas integradas en la gran mayoría por oficiales pertenecientes a las clases altas y tropa de la clase media.

La revuelta y sublevación militar del 21 de enero del 2000, puso en evidencia el malestar por la división de clases interna en el Ejército y la diferencia de clases sociales entre las tres fuerzas, que conforman las Fuerzas Armadas Ecuatorianas.

A los oficiales de rangos medios y los soldados de la tropa del Ejército, se les había negado por parte del gobierno de Jamil Mahuad, los aumentos salariales; por lo tanto, tenían sus propias motivaciones socio-económicas, para ejecutar y respaldar las acciones de la toma del Congreso Nacional y oponerse al Gobierno de Jamil Mahuad. Siendo este, otro de los motivos que provocó el desconocimiento del orden constituido y un resquebrajamiento en la disciplina militar, durante la revuelta del 21 de enero del 2000.

En resumen, la primera gran consecuencia ante las acciones ejecutadas por los oficiales de la Escuela Politécnica del Ejército, durante la toma del Congreso Nacional y desconocimiento de su Alto Mando militar, fue el resquebrajamiento de la disciplina y subordinación militar. Lo cual desbordó en un aumento en la lucha de clases al interior de las Fuerzas Armadas y en actos de insubordinación en varias unidades militares del país.

Posterior a los hechos de insubordinación de los oficiales académicos, pertenecientes a la ESPE, el Alto Mando militar inició procesos de judicialización a los jóvenes oficiales académicos, retirándoles inclusive sus becas de estudios universitarios. Acto que generó consecuencias en la vida personal de cada uno de los oficiales sindicados y procesados.

Obras citadas

- Acosta, Alberto. *Crisis, migración y remesas en Ecuador: una oportunidad para el codesarrollo?* Madrid: CIESPAL, 2006.
- . *Impacto de la migración: Una lectura desde la experiencia ecuatoriana remesas de la emigración y su impacto socioeconómico*. Quito: UNICEF, 2006.
- Alvarez Grau, Vladimiro. *El Golpe detrás de los ponchos*. Guayaquil: EDINO, 2001.
- Andrade, Pablo. *Democracia y cambio político en el Ecuador - Liberalismo, política de la cultura y reforma institucional*. Quito: Corporación Editora Nacional - Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, 2009.
- Araujo, María Caridad. *"Crisis y Políticas de Ajuste", en la Ruta de la Gobernabilidad*. Quito: CORDES, 1999.
- Barrera Guarderas, Augusto. «Ecuador, o cuando la crisis se hace cotidiana.» *OSAL No. 1*, 2000: 11-16.
- Becker, Marc. *¡Pachakutik! Movimientos indígenas, proyectos políticos y disputas electorales en el Ecuador*. Quito: FLacso Ecuador - Ediciones Abya Yala, 2015.
- Castañeda, Manolo Estuardo Vela. *Relaciones cívico militares en Centroamérica: Dilemas del control democrático*. Ciudad de Guatemala: FLACSO / UNESCO, 2004.
- Cercas, Javier. *Anatomía de un instante*. Madrid: LITERATURA RANDOM HOUSE, 2009.
- Chomsky, Noam, Fidel Castro, Heinz Dieterich, y Hugo Chávez Frías. *La cuarta vía al poder : el 21 de enero desde una perspectiva latinoamericana*. Quito: Abya Yala, 2000.
- Ciriza, Alejandra. «21 de enero del 2000 ¿Golpe de estado o revuelta india en el Ecuador?» *OSAL N° 01*, 2000: 6-10.
- Costa Pinto, L. A. *NACIONALISMO Y MILITARISMO*. México D. F.: Siglo XXI editores, S. A., 1974.

- Cueva, Fernando, Patricia Campana, y Hernán Abarca. *Análisis del perfil profesional vigente del subteniente de la Fuerza Terrestre y sus prácticas profesionales en los repartos militares*. Quito: Universidad Nacional del Loja - Centro de Estudios de Postgrado, 2000.
- D'Araujo, María Celina. «Matices de las visiones sobre militares y sociedad en América del Sur.» *Documentos cidob América Latina*, 2013: 8-20.
- Dávalos, Pablo. «Ecuador: las transformaciones políticas del movimiento indígena ecuatoriano.» *OSAL N° 01*, 2000: 25-29.
- DIARIO EL TELEGRAFO. *El feriado bancario se llevó todo, hasta su vida*. Guayaquil, 29 de noviembre de 2019.
- El Telégrafo. «El desempeño económico en dolarización.» *El desempeño económico en dolarización*, 31 de Diciembre de 2012: <http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/masqmenos-2/1/el-desempeno-economico-en-dolarizacion>.
- Equipo de Coyuntura - Centro Andino de Acción Popular. «Ecuador, enero 21: de la movilización indígena al golpe militar.» *OSAL N° 01*, 2000: 22-24.
- Fundación Wikimedia, Inc. *Wikipedia®*. 25 de abril de 2020. https://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa_antidisturbios (último acceso: 7 de junio de 2020).
- García Gallegos, Bertha. «¿Porqué no prospera el diálogo Civil-Militar en el Ecuador? .» *Universitas, Revista de Ciencias Sociales*, núm. 3, 2003: 29-46.
- Goffman, Erving. *Asylums: Essays on the social situation of mental patients and other inmates*. Garden City, N.Y.: Anchor Books, 1961.
- Hernández, José, Marco Aráuz, Byron Rodríguez V., y Leonel Bejarano. *21 de enero. La vorágine que acabó con Mahuad*. Quito: C.A. EL COMERCIO, 2000.
- Herrera Aráuz, Francisco. *Los golpes del poder al aire: el 21 de enero a través de la radio*. Quito: Abya Yala, 2001.
- Herrera, Gioconda, María Cristina Carrillo, y Alicia Torres. *La migración ecuatoriana: transnacionalismo, redes e identidades*. Quito: FLACSO, Sede Ecuador, 2005.

- Hidalgo, Francisco. *Migraciones: un juego de cartas marcadas*. Quito: Abya - Yala, 2004.
- Huntington, Samuel P. *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-military Relations*. Boston: Harvard University Press, 1957.
- Janowitz, Morris. *The Professional Soldier: A Social and Political Portrait*. New York: Free Press, 1960.
- Lituma Arízaga, Alfonso. *La nación y su seguridad*. Carácas, 1974.
- Logomarsino, Francesca, y Andrea Torre. *El éxodo ecuatoriano a Europa: jóvenes y familias migrantes. Entre discriminación y nuevos espacios de ciudadanía*. Quito: Abya - Yala, 2007.
- Lucas, Kintto. *Ecuador cara y cruz - Del levantamiento de los noventa a la Revolución Ciudadana*. Quito: Ediciones CIESPAL, 2015.
- . *La rebelión de los indios*. Quito: Abya Yala, 2000.
- Manpreet, Sethi. «El Nuevo Papel de los militares en América Latina.» *Airpower Journal*, 2019: 1-10.
- Mendoza Calamarco, Elker. «De la crisis financiera ecuatoriana: causas, consecuencias, soluciones.» *Revista Jurídica*, 2002: 45-83.
- Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador. *Libro Blanco de la Defensa Nacional*. Quito, 2002.
- Molina Flores, Coronel Alberto. *Democracia y militares: crisis y arbitraje de Roldós a Palacios*. Quito: El Conejo, 2005.
- Moreno Y, Segundo. *Sublevaciones indígenas en la Audiencia de Quito. Desde comienzos del siglo XVIII hasta finales de la Colonia*. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar / Corporación Editorial Nacional, 2014.
- Ospina, Pablo. «La vuelta a un día de ochenta mundos.» *OSAL N° 01*, 2000: 30-37.
- Pachano, Abelardo. *"Experiencia y ejecución de la dolarización en el Ecuador"*, en *Los desafíos de la dolarización para el Ecuador*. Quito: CORDES-CAF, 2002.

- Pachano, Simón. *Modernización del las Instituciones Democráticas: El Congreso*. Quito: FLACSO - Ecuador, 1997.
- Paz y Miño Cepeda, Juan. *Golpe y contragolpe : "La Rebelión de Quito" del 21 de enero de 2000*. Quito: Abya-Yala, 2002.
- Pedone, Claudia. *Estrategias migratorias y poder: tu siempre jalas a los tuyos*. Quito: Abya Yala, 2006.
- Porras Velasco, Angélica X. *TIEMPO DE INDIOS. La contrucción de la identidad política colectiva del movimiento indio ecuatoriano (Las movilizaciones de 1990, 1992 y 1997)*. Quito: Abya-Yala, 2005.
- Ramírez Gallegos, Franklin. «El 21 de enero del 2000.» *OSAL N° 01*, 2000: 17-21.
- Ramírez Gallegos, Franklin, y Jacques Paul Ramírez. *La estampida migratoria ecuatoriana: crisis, redes transnacionales, y repertorios de acción migratoria*. Quito: Centro de Investigaciones CIUDAD - UNESCO - ABYAYALA - ALISEI, 2005.
- Rodríguez, Alicia de Mingo. «Nación, democracia y humanismo en Ernest Renan.» *Revista Internacional de Filosofía*, vol. XVI, 10 2010: 110-128.
- Romero, Marco. «"Coyuntura nacional: se profundiza la recesión y la incertidumbre".» *Ecuador Debate No. 47*, 1999.
- Saad Herrería, Pedro. *La caída de Mahuad*. Quito: El Conejo, 2000.
- Soprano, Germán. «La profesión militar en los estudios sobre fuerzas armadas y sociedad. Lecturas, interpretaciones y usos desde la.» *Cuadernos de Marte*, 2013: 1-97.
- Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. *ESPE*. 2020. <https://www.espe.edu.ec/> (último acceso: 09 de 03 de 2020).
- Verdesoto Custode, Luis Fernando. *Los actores y la producción de la democracia y la política en el Ecuador 1979-2011*. Quito: Editorial Universitaria Abya-Yala, 2014.